CITRA
CONICET - UMET

Colección
#MétodoCITRA
Nº 11

Octubre 2022
ISSN 2618-351X

La economía popular en pandemia: situación actualizada 2021

María Inés Fernández Álvarez,
Anahi Guelman,
Ana Natalucci,
Mercedes Palumbo (coordinadoras)
Lautaro Chamorro,
Lucio Fernández Mouján,
María Paz Laurens,
María Laura Lezcano,
Ernesto Mate,
Florencia Pacífico,
Verónica Puricelli,
Santiago Sorroche,
Camila Stefanetti

CITRA
CONICET - UMET
PEPTIS
Programa de Estudios e Investigaciones de Economía Popular y Tecnologías de Impacto Social
ANTROPOLOGIA EN COLABOR
Para el fortalecimiento de organizaciones de trabajadores/as
OPS
EDUC.UNLu
Departamento de Educación
IICE

Colección
#MétodoCITRA
Nº 11

Octubre 2022
ISSN 2618-351X

La economía popular en pandemia: situación actualizada 2021

María Inés Fernández Álvarez,
Anahi Guelman,
Ana Natalucci,
Mercedes Palumbo (coordinadoras)
Lautaro Chamorro,
Lucio Fernández Mouján,
María Paz Laurens,
María Laura Lezcano,
Ernesto Mate,
Florencia Pacífico,
Verónica Puricelli,
Santiago Sorroche,
Camila Stefanetti

Comité Editorial
Juan Eduardo Bonnin. CITRA (CONICET-UMET)/UNSAM
Cora Arias. CITRA (CONICET-UMET)/UBA
María Inés Fernández Álvarez. CITRA (CONICET-UMET)/UBA

Comité Académico
Marta Novick. CITRA (CONICET-UMET)/UBA
Nicolás Diana Menéndez. CITRA (CONICET-UMET)/UNSAM
Julieta Haidar. CITRA (CONICET-UMET)/UBA/UNER
Laura Rodríguez Agüero. INCIHUSA (CONICET-UnCuyo)
Andrea Del Bono. CITRA (CONICET-UMET)/UNAJ y UNLP
María Soledad Catoggio. CIS-CONICET/ IDES
Cecilia Magadán. CELES (UNSAM)
Alejandro Vignolo. UdelaR, Uruguay
Andrea Andújar. IIEGE (FFyL, UBA)/CONICET
Pablo Ghigliani. IdIHCS-CONICET/UNLP
María de los Ángeles Di Capua. UNR
Luis Miguel Donatello. CEIL (CONICET)/UNL/UBA
Mabel Grimberg. ICA (FFyL- UBA)
Gloria Rodríguez. NET, ISHIR/UNR
Andrea Villagrán. ICSOH, CONICET-UNAS

Diagramación
Ivana Fioravanti.

Grupo organizador de la investigación
Coordinadoras: María Inés Fernández Álvarez, Anahi Ghelman, Ana Natalucci, Mercedes Palumbo.
Redacción y elaboración del informe: Lautaro Chamorro, María Inés Fernández Álvarez, Anahi Guelman, Lucio Fernández Mouján, Ana Natalucci, María Paz Laurens, María Laura Lezcano, Ernesto Mate, Florencia Pacífico, Mercedes Palumbo, Verónica Puricelli, Santiago Sorroche, Camila Stefanetti.
Procesamiento de datos: Lautaro Chamorro, María Paz Laurens, María Laura Lezcano, Ernesto Mate, Verónica Puricelli, Belen Santín, Camila Stefanetti.
Recolección de datos primarios: Antonella Álvarez, María Eugenia Corigliano, Lautaro Chamorro, Lucio Fernández Mouján, María Paz Laurens, María Laura Lezcano, Ernesto Mate, Florencia Pacífico, Verónica Puricelli, Belen Santín, Santiago Sorroche, Camila Stefanetti, Victoria Tapia.

La colección #MétodoCITRA es una publicación actualizada en forma continua dedicada a la difusión de los estudios y experiencias realizadas en CITRA y/o en colaboración con otras Instituciones sobre temas de: Estudios sociales del trabajo, Sustentabilidad del empleo, Innovación, Estudios sectoriales, Cultura, Comunicación en el lugar de trabajo, Riesgos psico-sociales del trabajo, Estudios CTS, Género y Trabajo y Educación y formación para el trabajo.

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
María Inés Fernández Álvarez, Anahi Guelman, Ana Natalucci, Mercedes Palumbo (coordinadoras) Lautaro Chamorro, Lucio Fernández Mouján, María Paz Laurens, María Laura Lezcano, Ernesto Mate, Florencia Pacífico, Verónica Puricelli, Santiago Sorroche, Camila Stefanett. (2022). La economía popular en pandemia: situación actualizada 2021 Colección *#MétodoCITRA, Número 11*. CABA: CITRA. ISSN 2618-351X

Resumen

El presente informe se propone contribuir al conocimiento sobre la situación de la economía popular durante el trascurso de la pandemia en 2021. Buscamos dar continuidad al relevamiento realizado en el Método Citra #5 "La economía popular durante la cuarentena" en el cual analizamos los impactos de la pandemia para las y los trabajadores de la economía popular en el primer período de la misma durante el 2020. El relevamiento se realizó entre los meses de agosto y septiembre de 2021. Se realizaron entrevistas del tipo semi-estructuradas y se consideraron las siguientes dimensiones para el análisis: impactos en las condiciones de vida y de trabajo, estrategias para sostener la actividad laboral, relación con el estado y acceso a programas estatales; medidas implementadas para responder al cuidado de la salud; estrategias para sostener las dinámicas organizativa y proyectos formativos; el impacto de la presencialidad/virtualidad de la educación en las familias y en las organizaciones. Con el objetivo de relevar la totalidad de actividades que desempeñan las y los trabajadores de la economía popular, se construyó una muestra que contemple la heterogenidad del sector incluyendo en el relevamiento al conjunto de las ramas de actividad según la clasificación establecida por el Registro Nacional de la Economía Popular (ReNaTEP) e incorporando tanto organizaciones que integran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). El informe publicado en 2020 evidenció que las iniciativas y estrategias desplegadas por las organizaciones no sólo permitieron garantizar el cumplimiento de las medidas de aislamiento y la prevención sanitaria, sino también el sostenimiento de la vida en un sentido amplio. Además de enfatizar esta situación, el análisis de los datos relevados en 2021 destaca que si bien la pandemia tuvo un impacto profundo en las condiciones de trabajo y vida para quienes componen la economía popular en su conjunto, las diferencias entre las distintas ramas de la economía popular se expresan en una diversidad de situaciones frente a la crisis provocada por la COVID-19: mientras que algunas lograron fortalecerse otras se vieron profundamente afectadas.

Palabras clave
economía popular, pandemia, trabajo, organizaciones gremiales

Abstract

This report aims to contribute to knowledge about the situation of the popular economy during the course of the pandemic in 2021. We seek to continue the survey carried out in the Citra Method #5 "The popular economy during quarantine" in which we analyze the impacts of the pandemic for the workers of the popular economy in the first period of the same during 2020. The survey was carried out between the months of August and September 2021. Semi-structured interviews were carried out and the following were considered dimensions for analysis: impacts on living and working conditions, strategies to sustain work activity, relationship with the state and access to state programs; measures implemented to respond to health care; strategies to sustain organizational dynamics and training projects; the impact of face-to-face/virtual education on families and organizations. With the aim of surveying all the activities carried out by the workers of the popular economy, a sample was constructed that contemplates the heterogeneity of the sector, including in the survey all the branches of activity according to the classification established by the National Registry of the Popular Economy (ReNaTEP) and incorporating both organizations that make up the Union of Workers of the Popular Economy (UTEP). The report published in 2020 showed that the initiatives and strategies deployed by the organizations not only made it possible to guarantee compliance with isolation measures and health prevention, but also to sustain life in a broad sense. In addition to emphasizing this situation, the analysis of the data collected in 2021 highlights that although the pandemic had a profound impact on working and living conditions for those who make up the popular economy as a whole, the differences between the different branches of the economy people express themselves in a variety of situations in the face of the crisis caused by COVID-19: while some managed to gain strength, others were deeply affected.

Key words

popular economy,
pandemic,
work, trade unions

Sobre los/as autores/as

Lautaro Chamorro

Estudiante de Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Adscripto de la Carrera Ciencias de la Educación, FFyL UBA. Fue docente adscripto en "Proyecto I: Formación de formadores en la economía popular: una experiencia de vinculación universidad-comunidad desde el CIDAC" (2021), y, actualmente, en "Proyecto II: "Formación en el trabajo en los movimientos populares" (2022), ambos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

María Inés Fernández Álvarez

Dra. en Antropología por la Universidad de Buenos Aires y la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Investigadora Independiente del CONICET. Vicedirectora del CITRA-CONICET/UMET. Directora del programa Antropología en Colabor para el fortalecimiento de organizaciones de trabajadores/as (SEUBE/FFyL/ UBA-CITRA/ UMET). Profesora Adjunta de la Carrera de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UBA. Coordinadora del GT CLACSO Reinvenciones de lo común.

Lucio Fernández Moujan

Licenciado en Ciencia Política (UNSAM). Becario Doctoral CONICET con sede en CITRA. Candidato a Doctor por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigador en Formación del Observatorio de Protesta Social (CITRA/CONICET/UMET).

Anahí Guelman

Dra en Ciencias de la Educación (UBA). Especialista posdoctoral en Metodologías de la Investigación Críticas (Universidad de Chiapas- IPECAL, México). Profesora titular del Departamento de Ciencias de la Educación, FFyL, UBA. Profesora de Metodología de la Investigación Educativa (UNPA, UACO). Profesora de la Maestría en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas (FFyL, UBA). Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Educación Popular y Pedagogías Críticas.

María Paz Laurens

Prof, de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropológicas (UBA=. Becaria doctoral del CONICET (CITRA-CONICET/UMET-UBA). Doctoranda en Antropología Social (FFyL-UBA). Integra el programa Antropología en Colabor para el fortalecimiento de organizaciones de trabajadores/as (SEUBE-FFyL-UBA/ CITRA-CONICET/UMET). Docente de la carrera de Ciencias Antropológicas de la UBA y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

María Laura Lezcano

Lic, en Ciencias de la Educación (UBA). Investigadora en formación en el Proyecto de Investigación UBACyT "Formación en el Trabajo de la Economía Popular. Aportes a una pedagogía descolonizadora desde los movimientos populares", en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Docente de Didáctica General del profesorado de Psicología de la UBA y en Institutos de Formación Docente de gestión pública y privada de la provincia de Buenos Aires. Tutora virtual de cursos y postítulos del Instituto Nacional de Formación Docente.

Ernesto Mate

Lic. y Prof. en Enseñanza Media y Superior en Ciencia Política (UBA). Becario Doctoral CONICET con sede en CITRA, donde integra el Observatorio de Protesta Social (OPS). Docente de Políticas de empleo en Argentina y en el Mundo de la Carrera de Relaciones del Trabajo en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

Ana Natalucci

Dra. en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigadora Independiente de CONICET con sede en CITRA/UMET. Directora del Observatorio de Protesta Social. Secretaria de Investigación y Desarrollo de UMET. Profesora Adjunta de Teorías de la Acción Colectiva, Carrera de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Florencia Pacífico

Dra en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires. Becaria Posdoctoral CONICET con sede en el CITRA-CONICET/UMET. Integra el Programa Antropología en Co-labor para el fortalecimiento de organizaciones de trabajadores/as (SEUBE-FFyL-UBA/CITRA-CONICET/UMET). Docente de la carrera de Ciencias Antropológicas de la UBA y del Instituto de Ciencias Sociales y Administración en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). Investigadora del GT CLACSO Reinvenciones de lo común.

Santiago Sorroche

Dr. en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires. Investigador asistente del CONICET con sede en el CITRA-CONICET/UMET. Dirige el programa de extensión universitaria Filo Recupera: Trabajo y Residuos (SEUBE, FFyL, UBA) e integra el programa Antropología en Co-labor para el fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores/as (SEUBE-FFyL-UBA/CITRA-CONICET/UMET). Profesor de la Licenciatura en Antropología. FACSO-UNICEN Docente de la carrera de Ciencias Antropológicas de la UBA.

Camila Stefanetti

Lic. en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Maestranda en Investigación Social (FSOC,UBA). Becaria doctoral del CONICET con sede en el (CITRA-CONICET/UMET-UBA). Doctoranda en Antropología Social (FFyL-UBA). Integra el Programa Antropología en Co-labor para el fortalecimiento de organizaciones de trabajadores/as (SEUBE-FFyL-UBA/CITRA-CONICET/UMET).

María Mercedes Palumbo

Dra. de la Universidad de Buenos Aires, área Ciencias de la Educación. Investigadora Asistente de CONICET con sede en el Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján (UNLu). Docente de grado y posgrado de la UNLu y la Universidad de Buenos Aires. Co-coordinadora del Grupo de Trabajo CLACSO Educación Popular y Pedagogías Críticas.

Índice

11 **I.**

Introducción

13 Metodología

18 **1.**

Capítulo 1. Problemáticas del trabajo referidas a la pandemia: condiciones de trabajo y condiciones de vida

18 1. Problemáticas específicas del trabajo

19 a) Dificultades persistentes a la hora de llevar adelante la actividad productiva y su comercialización pese a la progresiva apertura de actividades y al aumento de la circulación

23 b) Aumentos en el costo de los insumos producto de la inflación y persistente deterioro de los ingresos a pesar de la recuperación económica

24 c) Reorganización del lugar de trabajo a través de burbujas y modificaciones en los horarios de trabajo

26 2. Problemáticas específicas referidas a las condiciones de vida

27 a) Intensificación de la demanda de trabajo de cuidados en el hogar ligada a suspensión de clases presenciales e imposibilidad de externalizar estas tareas en otras instituciones o redes de ayuda, sobrecargando especialmente a las mujeres

29 b) Expansión de la demanda de trabajo de cuidados en ámbito comunitario y mayor visibilización de la importancia de estas tareas, así como del protagonismo de las mujeres en actividades fundamentales para la reproducción de la vida

30 c) Profundización de debates en torno a roles de género y distribución de tareas en el ámbito productivo y reproductivo

32 **2.**

Capítulo 2. Inventivas populares para enfrentar la pandemia

33 1. Estrategias e iniciativas para sostener la actividad laboral

33 a) Implementación de cambios en las modalidades de organización del trabajo

34 b) Surgimiento de nuevas actividades laborales, diversificación y/o reorientación de rubros y actividades productivas y desarrollo de nuevas formas de comercialización con la incorporación de medios y plataformas virtuales

36 2. Construcción de relaciones y fortalecimiento de redes organizativas, comunitarias y territoriales

37 a) Articulaciones dentro de la propia organización y entre organizaciones para sostener actividades productivas y organizativas en conjunto; fortalecimiento de redes e instancias de intercambio a nivel local, regional y nacional

38 b) Fortalecimiento de redes comunitarias y territoriales con otros actores -como centros de atención de la salud, centros de acceso a la justicia, instituciones educativas- para la resolución de problemáticas referidas a la pandemia y realizar proyectos en conjunto

39 c) Estrategias colectivas para el abordaje territorial y prevención de la violencia de género

c.1) Generación de espacios formativos y de debate colectivo sobre temáticas vinculadas a la violencia de género y constitución de redes de promotoras de género.

c.2) Desarrollo de estrategias de contención emocional y afectiva y distintas formas de acompañamiento a realizar denuncias y pedidos de protección ante la justicia

43 3. Proyectos actuales y aprendizajes

44 **3.**

Capitulo 3. Los desafíos de la organización colectiva en la pandemia

45 1. Iniciativas para sostener la organización y actividades de formación

46 a) Utilización de medios virtuales para la comunicación y difusión de información, virtualización de instancias organizativas para sostener el intercambio, debate y la construcción de acuerdos

47 b) Virtualización de instancias de formación interna y gremial y desarrollo de capacitaciones sobre salud, género, oficios y temáticas específicas a cada rama de actividad y regreso progresivo a la presencialidad cumpliendo protocolos sanitarios

49 2. Proyectar(se) a futuro

50 a) Proyectos e iniciativas para el desarrollo de líneas de producción sustentables y nuevas formas de comercialización, implementación de mejoras productivas; creación de espacios de cuidados

51 b) Proyectos y propuestas para ampliar instancias formativas gremiales y mejora de procesos productivos

51 c) Proyectos en co-gestión con el estado, programas y políticas públicas para el mejoramiento de las condiciones del sector

53 **4.**
Capítulo 4. La actuación sanitaria de las organizaciones en la pandemia

54 1. Protocolos del cuidado

56 2. Acceso a la salud
57 a) Estrategias de prevención y acompañamiento a quienes habían estado expuestos/as a la COVID-19
58 b) Estrategias de acompañamiento a quienes padecían alguna enfermedad crónica o situación de salud no emparentada con la COVID-19

59 3. Campaña de vacunación

61 **5.**
Capítulo 5. Educación y escuela en pandemia. El papel de las organizaciones en el 2021

61 1. Las políticas educativas en pandemia

64 2. La escolaridad durante la pandemia en los territorios populares
64 a) Problemáticas para sostener la escolaridad
66 b) Impacto de la no presencialidad educativa
68 c) Iniciativas y aportes de las organizaciones de la economía popular

72 **6.**
Capítulo 6. Formas de intervención del estado: límites y alcances

74 1. Un mapeo sobre el acceso a programas y recursos durante 2021

76 2. Algunas especificidades por rama de actividad

79 3. Demandas y percepciones sobre la intervención estatal

82 **Bibliografía**

#MétodoCITRA
Nº 11

La economía popular en pandemia: situación actualizada 2021

Octubre 2022

Introducción[1]

I

En marzo de 2020, poco después de la declaración de la pandemia de COVID-19, el gobierno nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio conocido como ASPO. Esto implicaba una restricción significativa en la movilidad de las personas y el cierre de actividades productivas y económicas con unas pocas excepciones. En junio de ese 2020, el gobierno decretó el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) por el cual se relajaban las restricciones en algunas zonas del país, manteniendo la cuarentena para el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que recién empezó a flexibilizarse hacia finales de 2020. Las restricciones fueron cediendo en 2021, con un breve intersticio en mayo en el que se dispusieron restricciones de emergencia para los aglomerados urbanos con riesgo de saturación del sistema sanitario (Decreto 334/2021). En 2021, se habilitó la presencialidad escolar en la mayoría de las regiones del país, de forma escalonada y bajo la forma de burbujas, que tuvo impacto directo sobre la coordinación de las dinámicas familiares y laborales.

A pesar de las flexibilizaciones crecientes durante 2021, la pandemia tuvo drásticas consecuencias sociales y económicas relacionadas con las condiciones de trabajo y de vida de los sectores populares y profundizó desigualdades (Kessler et. al., 2020; Instituto del Conurbano de la UNGS, 2020a, 2020b, Soldano y Villaroel, 2020; Craviotti, 2020; Hopp y Maldován Bonelli, 2020a, 2020b; Hopp et al., 2020; Sterling Plazas et al, 2020; Azzati, 2020). Las políticas de aislamiento con fines de prevención sanitaria impactaron en el nivel de la actividad económica, generando discontinuidad en las actividades laborales y afectando los niveles de ingresos (Bonfiglio, Salvia y Vera, 2020; Manzanelli, Calvo y Basualdo, 2020; Bergesio y Gonzales, 2020, ONU, 2020). Para hacer frente a la crisis, el gobierno nacional implementó una serie de medidas orientadas a amortiguar las consecuencias de la pandemia en la situación socio-económica local a través del refuerzo en la asistencia alimentaria y la transferencia de ingresos para los sectores populares (Arcidiácono y Gamallo, 2020; Deux Marzi y Hintze, 2020; Deux Marzi Hintze y Vázquez, 2020; Defensoría del Pueblo de la Ciudad

1. Nota sobre género y lenguaje: se ha optado por el uso de formas de expresión que coordinen el género masculino y femenino, utilizando el género femenino para aquellos casos en que las actividades se encuentran realizadas en su mayoría por mujeres por tratarse de sectores altamente feminizados o empleando formas alternativas que no reflexionen en género. Este informe fue desarrollado en el marco de los proyectos PICT 2016-2043 "Trabajo no salarial y formas emergentes de organización. Un análisis del heterogéneo campo de la economía popular", IR: Ana Natalucci y PICT 2018-03095 "Política colectiva, (re) producción de la vida y experiencia cotidiana: un estudio antropológico sobre procesos de organización de trabajadores y trabajadoras de sectores populares en Buenos Aires, Córdoba y Rosario", IR: María Inés Fermádez Álvarez.

Autónoma de Buenos Aires, 2020). Sin embargo, las acciones gubernamentales tuvieron diferentes alcances, coberturas y propuestas respecto a los diversos sectores económicos asentadas en una lógica del mundo del trabajo que no incorpora la heterogeneidad de formas de trabajo, como las y los trabajadores autónomos, con empleos no registrado y de la economía popular. Esto quedó evidenciado, entre otras cuestiones, con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) sobrepasando ampliamente las previsiones del gobierno que estimaban un total de 3.6 millones de personas y finalmente fue solicitado por 13.4 millones de las cuales fueron admitidas 8.9 millones (ANSES, 2020). Sin ser objeto de una política específica, el sector de la economía popular -que según estimaciones elaboradas por el Programa de Economía Popular, Trabajo e Innovación Social (PEPTIS-CITRA-UMET) alcanzaba para el tercer trimestre de 2021 a 4.645.4476 personas (Fernández Álvarez y Natalucci, et al., 2021)- tuvo acceso a diferentes programas y asistencia estatal expresando diferencias significativas entre las distintas ramas.

Para este heterogéneo sector de la población, las restricciones a la circulación en el espacio público que impidieron la realización de las tareas laborales tal como se venían desarrollando antes del 2020 impactaron tanto en las modalidades, de producción y organización del trabajo (Fernández Álvarez et al., 2020; Molina y Sayago Peralta, 2021), las condiciones en que se realizan los mismos (Herrero, 2021; Maldován Bonelli, Goren y Corradi, 2021) y reconfiguración en las formas de protesta social (Natalucci et al., 2020; Basualdo y Peláez, 2020; Mate y Stefanetti, 2020). Frente a este contexto, las organizaciones de la economía popular desplegaron una variedad de acciones, estrategias y redes colectivas para continuar con sus actividades laborales, formativas y de organización que permitieron sostener la vida en un sentido amplio (Fernández Álvarez, 2022; Fernández Álvarez, Laurens y Stefanetti, 2022).

A su vez, la pandemia tuvo implicancias significativas sobre la división sexual del trabajo evidenciando la imbricación entre los espacios domésticos y laborales, la sobrecarga de tareas de cuidados y la precaria inserción laboral de las mujeres en un contexto global signado por profundas desigualdades (Arza, 2020; Ramacciotti, 2020; Batthyány y Sánchez, 2020; Delfini, et al, 2020; Tabbush, 2021; Ministerio de Economía, 2021). La pandemia intensificó el trabajo de cuidados tanto en los hogares como en las organizaciones que componen la economía popular (Galdos, 2021; Roig y Blanco Esmoris, 2020; Di Croce Garay, Musante y Ventura, 2021). Las trabajadoras de los sectores de cuidado y servicios socio-comunitarios afrontaron una mayor demanda y sobrecarga de tareas. Las actividades realizadas por estas trabajadoras en comedores escolares, comunitarios, merenderos y espacios de niñez fueron un pilar fundamental para el sostenimiento de la vida en los barrios (Fournier, 2020; Galdos, 2021; Zibecchi, 2020; Faur y Brovelli, 2020; Mariños, 2020), tomando un lugar de mediación central entre el estado y el barrio (Zibecchi, 2020; Roig, 2020; Fernández Álvarez, Pacifico y Señorans, 2020) sin el pleno reconocimiento de ese trabajo como tal. El confinamiento acrecentó problemas estructurales ya existentes en los barrios como las violencias de géneros y la falta de acceso a la salud entre otros (Guelman, Palumbo y Lezcano, 2021). El accionar de las promotoras de salud y de género fue-

ron fundamental para intervenir y prevenir estas situaciones (Fernández Álvarez et al., 2020; Croce Garay, Musante y Ventura, 2021) brindando acompañamiento, contención y apoyo afectivo y emocional para enfrentar dichas situaciones (Roig, 2020; Roig y Blanco Esmoris, 2021; Fernández Álvarez, Laurens, Stefanetti, 2022). La colectivización de los cuidados en sectores populares (Sanchís, 2020; Roig, 2020), supuso que los trabajos reproductivos y de cuidado realizados en las casas se combinaron con otros de índole comunitaria para preservar la vida (Fernández Álvarez, Pacífico y Señorans, 2020; Fournier, 2020). Como ha sido señalado desde diversos sectores, la pandemia reactualizó demandas por el reconocimiento de las tareas de cuidado como trabajo y la necesidad de elaborar respuestas desde un enfoque de género, entendiendo a los cuidados como un componente fundamental para el desarrollo y la sostenibilidad de la vida (CEPAL, 2020a; 2021 CIM, 2020; Pautassi, 2020; Wagon, 2021; Hopp y Kasparian, 2021; Gago, 2021).

El presente informe se propone contribuir al conocimiento sobre los efectos de la pandemia para el sector de la economía popular concentrándose específicamente en la situación de 2021. Así, nos proponemos dar continuidad y poner en perspectiva diacrónica el relevamiento realizado durante el primer período de la pandemia publicado en el Método Citra #5 "La economía popular durante la cuarentena". Allí, analizamos los impactos de la pandemia para las y los trabajadores de la economía popular atendiendo a las iniciativas y estrategias desplegadas por las organizaciones señalando como no sólo permitieron garantizar el cumplimiento de las medidas de aislamiento y la prevención sanitaria, sino también el sostenimiento de la vida en un sentido amplio (Fernández Álvarez et. al., 2020). Como lo desarrollamos a continuación si bien la pandemia tuvo un impacto profundo en las condiciones de trabajo y vida para quienes componen la economía popular en su conjunto, las diferencias entre las distintas ramas de la economía popular se expresan en una diversidad de situaciones frente a la crisis provocada por la COVID-19: mientras que algunas lograron fortalecerse otras se vieron profundamente afectadas.

METODOLOGÍA

Una particularidad de la economía popular y sus espacios de representación gremial y política es la heterogénea composición donde convergen diferentes ramas de actividad y organizaciones. Por esta razón, en términos metodológicos, decidimos construir una muestra que contemple esta diversidad incluyendo en el relevamiento al conjunto de las ramas de actividad según la clasificación establecida por el Registro Nacional de la Economía Popular[2] (ReNaTEP) e incorporando tanto organizaciones que integran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) como otros espacios organizativos con el propósito de dar cuenta de un amplio panorama de sus experiencias. En la tabla 1 se detallan las organizaciones que entrevistamos.

2. El Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular es un registro estadístico nacional de trabajadores de la economía popular del Ministerio de Desarrollo Nacional creado en 2020 que se propone dimensionar y analizar su composición y trayectoria en el tiempo.

Tabla 1: **Selección de las ramas y organizaciones entrevistadas**

Rama	Actividad	Organizaciones
Servicios Socio Comunitarios	Tareas de cuidado: comedores comunitarios; espacios de cuidado de niños/as y adultos/as mayores	- Rama sociocomunitaria del Movimiento Evita -UTEP - Somos Barrios de Pie - Frente Popular Darío Santillán/La Boca CABA - La Garganta Poderosa
Comercio Popular y Trabajos en Espacios Públicos	Venta de productos y servicios en espacio público	- Rama de Trabajadoras y Trabajadores del Espacio Público- Movimiento Evita -UTEP - Rama Espacio Público -Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) - Frente Darío Santillán- Misión Me.Co.Po/ Nacional - Espacio Puebla
Recuperación, Reciclado y Servicios Ambientales	Recolección, acopio y procesamiento de materiales reciclables	- Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR-UTEP) - Federación de Cooperativas Unión de Trabajadores de Reciclado de Argentina (FECUTRA) - Federación de Cooperativas Argentinas de Reciclado Autogestionadas (FECARA)
Construcción e Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental	Construcción, trabajo en obras, mejoramiento barrial	- Frente Arde Rojo (FAR) - Movimiento Evita - Rama Construcción-MTE-UTEP - Frente Popular Darío Santillán (FPDS) - Unión Obreros Ladrilleros de la República Argentina (UOLRA)
Industria Manufacturera	Producción y confección de ropa e insumos textiles	- Federación de Cooperativas de Costureros, Trabajadores de la Indumentaria y Sector Textil- MTE. - Frente Arde Rojo (FAR) - Somos Barrios de Pie - Rama de Liberados, liberadas y familiares de detenidos/as-MTE-UTEP
	Empresas recuperadas que desarrollan diversas actividades productivas: metalurgia, gráficas, textil, construcción, peluquerías, frigoríficos, gastronomía, educación.	- Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) - Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires (FEDECABA) - Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA)

	Trabajos de Carpintería	Movimiento Evita - Rama de Liberados, liberadas y familiares de detenidos/as-MTE-UTEP
	Trabajos de Herrería	- Rama de Liberados, liberadas y familiares de detenidos/as-MTE-UTEP
	Producción Gastronómica	- Rama de Liberados, liberadas y familiares de detenidos/as-MTE-UTEP
Agricultura Familiar y Campesina	Producción, distribución y comercialización de alimentos	- Rama Rural del MTE-UTEP - Frente Agrario del Movimiento Evita-UTEP. - Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) Buenos Aires - Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina (MOCASE-VC) - Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) Somos Tierra - Frente Arde Rojo (FAR) - Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT)

Las entrevistas fueron de tipo semi-estructuradas a partir de un cuestionario que abarcaba diversos temas, a saber: 1) condiciones y modalidades de trabajo (transformaciones en las actividades laborales atendiendo a las diferencias con 2020; acceso a programas estatales); 2) salud (estrategias organizativas de prevención, participación en campañas de vacunación); 3) organización (estrategias para sostener las dinámicas organizativas, proyectos formativos, demandas y conectividad); 4) educación (presencialidad/virtualidad, impacto en las familias y en las organizaciones). El cuestionario siguió una perspectiva de género que permitiera captar las desigualdades entre mujeres y varones respecto de cada uno de estos temas. Las entrevistas fueron realizadas de manera virtual, a través de plataformas específicas que nos permitían tener una conversación sincrónica. En total realizamos 30 entrevistas durante agosto y septiembre de 2021. Para trabajar los datos relevados construimos las siguientes dimensiones analíticas:

Tabla 2: **Dimensiones analíticas**

Dismensión	Subdimensión
Relación con el estado	- Acceso a programas (transferencia directa, créditos, líneas de financiamiento) - Acceso a recursos (alimentos, capacitaciones, insumos de higiene, maquinarias y herramientas) - Co-gestión/co-construcción de programas y políticas - Demandas al estado
Cuestiones estructurales	- Condiciones de trabajo - Condiciones de vida
Cuestiones contingentes	- Condiciones de trabajo (cambios ocurridos específicamente en los lugares de trabajo: implementación de burbujas, (re)organización de tareas en espacio laboral, modificación de horarios y turnos de trabajo, cambios en la jornada de trabajo) - Problemáticas específicas referidas al trabajo en pandemia (dificultades, paralización de las actividades) - Iniciativas para sostener las actividades laborales en la pandemia (desarrollo de estrategias comerciales, implementación de canales de comercialización, desarrollo de nuevas actividades productivas, reorientación de la producción)
Género	- Tareas de cuidado y roles de género en el hogar y en trabajo - Violencia de género
Organización	- Iniciativas para sostener la organización (dinámicas internas: virtualización de asambleas, asambleas semipresenciales, (re)organización de roles y actividades) - Fortalecimiento de redes y relaciones entre organizaciones (articulaciones entre organizaciones, s, centros de salud, centros de acceso a la justicia, instituciones educativas, etc., creación de nuevos espacios de agremiación) - Desarrollo de actividades de formación (tanto desde la propia organización como junto a otras instituciones)
Salud	- Campaña de vacunación - Protocolos de cuidado (medidas de prevención sanitaria e higiene, utilización de elementos de protección) - Acceso a la salud
Aprendizajes y proyecciones a futuro	- Proyectos actuales - Proyectos a futuro - Aprendizajes
Educación	- Impacto de la no presencialidad educativa - Problemáticas para sostener la actividad pedagógica/escolar - Aportes e iniciativas de las organizaciones para sostener la escolarización

En cada uno de los capítulos de este Informe desarrollamos estas dimensiones, como aporte para pensar la economía popular y contribuir al diseño de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida y laborales de los y las trabajadoras del sector.

Capítulo 1. Problemáticas del trabajo referidas a la pandemia: condiciones de trabajo y condiciones de vida

1

Ernesto Mate, Camila Stefanetti, Florencia Pacífico

En este capítulo, en un primer momento nos abocamos a las problemáticas en torno a las condiciones de trabajo que encontraron las diferentes ramas de la economía popular en el contexto de la pandemia. Así analizaremos las dificultades frente a la comercialización y la producción; y, cómo se desarrollaron a lo largo de 2021. Entre las problemáticas más mencionadas se encontraron la constante baja de ingresos, acompañada por una sostenida suba de costos de los insumos indispensables para llevar a cabo sus actividades y el aumento del costo de vida en general producto de la inflación. Asimismo, más allá de la flexibilización de las restricciones, la circulación del virus persistió y los protocolos sanitarios debieron seguir aplicándose, lo que generó otras dificultades a la hora de reorganizar el trabajo. En este sentido, analizaremos detalladamente cómo se llevó a cabo la reorganización de los puestos y horarios de trabajo en diferentes sectores.

En un segundo momento, se abordarán las problemáticas generadas a partir de esta situación pandémica en las condiciones de vida de las diferentes ramas consultadas. Allí se podrá observar cómo a partir de la pandemia la cuestión del trabajo de cuidados y las desigualdades de género y clase tomaron centralidad. La mayor exigencia de la demanda de trabajo de cuidados en el ámbito comunitario y en el hogar, en el marco de la crisis sanitaria y la vuelta escalonada de las y los niños a las escuelas, dio cuenta del rol protagónico de las mujeres en actividades fundamentales para la reproducción de la vida. Asimismo, se pudo observar cómo la feminización del trabajo de cuidados se incrementó y sostuvo a lo largo de estos dos años de pandemia, recayendo sobre las mujeres la asistencia alimentaria, promoción de salud, entre otras tareas. Esta sobrecarga de tareas de cuidado tanto en el ámbito del hogar como en el comunitario generó grandes dificultades a la hora de que estas mujeres salieran a buscar otros ingresos para sostener la economía familiar.

1. PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS DEL TRABAJO

Uno de los ejes abordados desde de las entrevistas es el que refiere a las problemáticas específicas del trabajo en torno a la comercialización y a la producción en el

contexto de la pandemia y a la organización en el lugar de trabajo. Entre otras cosas, la pandemia dejó al descubierto el grado de desprotección e inestabilidad que tienen las y los trabajadores de la economía popular y su dependencia en relación con la actividad económica en general. A esto se suma que la mayor parte de estos sectores ya venían con dificultades económicas previas de mediana y larga data.

Los procesos para destacar en relación con las problemáticas específicas del trabajo en pandemia se pueden resumir en los siguientes destacados:

- **a)** Dificultades persistentes a la hora de llevar adelante la actividad productiva y su comercialización pese a la progresiva apertura de actividades y al aumento de la circulación.
- **b)** Aumentos en el costo de los insumos producto de la inflación y persistente deterioro de los ingresos a pesar de la recuperación económica.
- **c)** Reorganización del lugar de trabajo a través de burbujas y modificaciones en los horarios de trabajo.

a) Dificultades persistentes a la hora de llevar adelante la actividad productiva y su comercialización pese a la progresiva apertura de actividades y al aumento de la circulación

En términos generales, la actividad productiva y su comercialización continuaron teniendo dificultades para agosto de 2021 pese a la flexibilización y apertura de actividades. Las problemáticas fueron heterogéneas de acuerdo con la rama de actividad, en relación con su modalidad de trabajo, sus vínculos con otros sectores productivos y las formas de comercialización.

En el caso de la rama de la industria manufacturera la situación fue heterogénea. En algunos casos, la baja productividad estuvo principalmente asociada a la paralización de las ferias durante 2020. La imposibilidad de comerciar sus productos provocó una merma en la demanda y por ende en la actividad. Subsidiariamente, en estas ferias se comercializan guardapolvos y ropa para el colegio, por lo que el cierre de las escuelas acentuó la baja demanda de algunos productos manufacturados como los textiles. De acuerdo con la referente de Somos Barrios de Pie, en 2021 comenzaron a abrirse progresivamente las ferias, en un principio para los productos alimenticios y poco a poco para otros. En contraste, hubo otras cooperativas que consiguieron elaborar kits de salud para el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires lo que les permitió aumentar la producción, mejorar los ingresos e incluso incorporar a jóvenes en la cooperativa, específicamente en los trabajos más pesados como alzar rollos o mudar bultos, según la referente de MTE. Estos contratos de elaboración de kits alcanzaron a distintas organizaciones como el MTE, el Movimiento Evita y FAR. En el caso de las y los trabajadores ladrilleros, no pudieron trabajar por las restricciones hasta mayo de 2020 cuando lograron un reconocimiento del Estado debido a la elaboración de un protocolo específico para la actividad. De acuerdo al referente de

UOLRA, las problemáticas de las y los ladrilleros son de larga data: deficiencia en torno al acceso a los derechos laborales, infraestructura inadecuada para llevar adelante la actividad, trabajo en zonas periféricas -lo que entre otras cosas dificulta el acceso a la salud de las y los trabajadores, que se suma el esfuerzo y deterioro físico y de la salud ya que tienen que agacharse y levantarse cientos de veces al día-, problemáticas en torno al acceso a la tierra para producir ladrillos y el acceso a materias primas concentradas en pocas manos, entre otras. La actividad durante la pandemia tuvo una dinámica cíclica, con momentos de mucha demanda debido a que otras actividades con las que compiten estaban cerradas -como las fábricas de cerámica-, junto a períodos de caída marcada de la demanda. A esto se sumó el histórico rol de los intermediarios, los cuales establecen un elevado nivel de arbitrariedad a la hora de definir el precio de los ladrillos, por lo que no necesariamente la mayor actividad redundó en una mejora en la economía de las y los trabajadores ladrilleros.

En el caso de la rama de la construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental, se observó una leve mejora en relación con 2020. La paralización de las obras públicas se venía dando desde 2019 previo al cambio de gobierno. El surgimiento de la pandemia empeoró la situación de la rama al paralizarse definitivamente la obra pública, por lo que durante 2020 no pudieron trabajar. No obstante, continuaron en actividad a partir del Potenciar Trabajo y la línea de mejoramiento integral de barrios y saneamientos, aunque según algunos referentes entrevistados, esto les quitó autonomía en el manejo de las decisiones y los presupuestos, como así también les imposibilitó la capitalización en maquinaria propia. Según referentes del Movimiento Evita, durante 2021 la obra pública tuvo un ligero repunte por lo que hubo una reactivación de las cooperativas de construcción, sobre todo a partir de obras públicas financiadas por los municipios, aunque al momento de las entrevistas todavía había obras que no estaban funcionando. Al problema de la discontinuidad en el desarrollo de las obras se sumó la problemática del deterioro de los materiales y el aumento de los insumos, ya que cada vez que se reactiva una obra paralizada hay que volver a discutir los costos, lo que genera que la ejecución final de la obra se ralentiza y dificulta todavía más la actividad. Otras organizaciones de la rama, como la organización FAR, durante 2020 tuvieron que volcar las "cuadrillas" de construcción y mejoramiento barrial hacia la demanda de asistencia alimentaria y, para agosto de 2021, estaban volviendo a aumentar las horas de trabajo en el sector socioambiental y de la construcción.

Las empresas recuperadas, al abarcar distintos rubros (gráficas, alimenticias, textiles, etc), tuvieron dificultades específicas de acuerdo con cada actividad. No obstante, en las entrevistas se observa una caída en la actividad productiva de todos los rubros a excepción de aquellas cooperativas cuyos productos estaban ligados al sector de la salud o a aquellas que lograron reconvertir su producción a las demandas sanitarias. En el caso de las empresas del rubro alimenticio, el cierre de restaurantes y eventos sociales ligados a la cultura y al turismo afectó la producción y la comercialización. Gran parte de estas cooperativas entre sus actividades provee a restaurantes, salones de eventos sociales y culturales o refrigerios para las escuelas. Sumado a la

caída de la producción, hubo también una reestructuración de algunas actividades en términos productivos ya que, producto de la virtualización de la educación, se reemplazaron los refrigerios por canastas de alimentos ya preparados, por lo que la actividad productiva de muchas cooperativas se redujo al empacado y la distribución de estos. En paralelo, se sumó el problema de las máquinas dado que, al bajar la producción, se aceleró el proceso de deterioro debido a su escaso uso. A mediados de 2021, con la apertura de muchas actividades, se han ido recuperando las horas de trabajo, sobre todo por la demanda de eventos realizados por sindicatos y universidades, instituciones con las que estas cooperativas ya tenían vínculos estrechos. En el caso de las empresas recuperadas vinculadas a la actividad gráfica, en el año 2020 se vio afectada la demanda de productos como flyers, formularios, volantes, etc. por la caída de la actividad económica. A su vez, la paralización de la actividad desmotivó el pedido de los créditos subsidiados que otorgaba el Estado, ya que la incertidumbre impedía asegurar el repago a futuro de estos. En el mismo sentido, se orientaron las empresas recuperadas del rubro textil e industrial que al momento de las entrevistas recuperaron gran parte de su actividad; tal es así que la textil Pigüé, nucleada en ACTRA, pudo sumar más trabajadores y trabajadoras con la reactivación económica, trabajando a tres turnos de producción las 24 horas, o como el caso de las empresas nucleadas en el MNER. No obstante, a estas últimas se les sumaron dificultades con los proveedores, los cuales o no estaban trabajando o no tenían lista de precios, como también dificultades en torno a garantizar el transporte público a sus trabajadores y trabajadoras en virtud de la normativa, por la que las empresas debían garantizar la movilidad hacia el lugar de trabajo.

Las cooperativas de la rama de liberados, liberadas y familiares de detenidos/as del MTE-UTEP, en coincidencia con la rama de empresas recuperadas, abarcan un abanico diverso de actividades de producción, como herrerías, panaderías, textiles, etc. De acuerdo con sus referentes, la situación al momento de las entrevistas en comparación con 2020 cambió en el sentido de que aumentó la actividad, con dificultades para la comercialización:

> Por ahí este año los compañeros pudieron producir pero tienen guardados todos los muebles. Está parado porque no hay plata, las compañeras hacen las mejores facturas y las mejores cosas dulces pero no tenemos compra, entonces necesitamos otra reactivación (Referente de la rama de liberados, liberadas y familiares de detenidos/as-MTE-UTEP).

En el caso de la rama de recuperación, reciclado y servicios ambientales, se sumó el problema de que en algunas zonas no lograron acceder a los permisos para trabajar. En lugares como el CEAMSE o en municipios específicos no se les permitía ingresar y/o circular. Este hecho, a la par de la baja cantidad de materiales disponibles por la poca producción de las empresas, generó una reducción del trabajo. Paralelamente, aumentó la necesidad de trabajo debido al incremento de la cantidad de trabajadoras y trabajadores cartoneros como consecuencia de la profundización de la crisis social.

En la rama servicios socio comunitarios, el trabajo aumentó principalmente por la situación social crítica y la demanda de alimentos. Si bien en 2021 la demanda bajó en comparación con 2020, el sostenimiento de los comedores siguió siendo una de las principales urgencias. En casos como de la organización FAR, la pandemia implicó el cierre de distintos proyectos de trabajo productivo vinculados a la carpintería, panadería y serigrafía, proyectos pensados como parte de la rama servicios socio comunitario, a la par del aumento de personas trabajando en los comedores. Además, la organización tiene un ámbito orientado a la niñez, en la que sostienen jardines comunitarios y espacios en los que trabajan problemáticas de las y los niños en distintos barrios sobre todo del AMBA. En 2021, lograron volver a poner en funcionamiento estos espacios.

En cuanto al trabajo en la rama comercio popular y trabajos en espacios públicos, durante 2020 su actividad se vio afectada principalmente por el cierre de las ferias, una de las principales formas de comercialización, como también por las restricciones a la circulación en el caso de los/as vendedores/as ambulantes. Desde el FPDS ya contaban desde 2015 con el Mercado de Consumo Popular (ME.CO.PO), una herramienta de comercialización virtual desde la cual pudieron seguir vendiendo sus productos. Durante 2020, tuvieron un fuerte aumento de las ventas a domicilio, ocasionando problemas de *stockeo*, vacancia de algunos productos por parte de los proveedores y un exceso de demanda que superó la capacidad de producción. Al momento de las entrevistas, en agosto de 2021, aumentaron las ventas tanto a domicilio como en los almacenes populares en los barrios.

La rama de agricultura familiar y campesina, por producir principalmente en contextos de ruralidad y periurbana tuvo algunas dificultades específicas, además de las que atravesaron al conjunto del resto de las ramas. El principal problema no estuvo en el ámbito de la producción, sino en la comercialización de sus productos, en los que muchas veces hubo sobreproducción sin posibilidad de venta. Al igual que otras ramas, el cierre de mercados y ferias afectó seriamente la etapa de comercialización. Según referentes tanto del MTE como de la UTT, la sobreproducción de alimentos hizo que baje el precio de venta, que sumado a la ausencia de un control de los precios, afectó principalmente a los pequeños productores al tener que vender la producción a los precios que establecían los intermediarios. Algo similar sucedió con las y los floricultores quienes, al estar cerrados los cementerios y florerías, no lograron vender sus productos y tuvieron que desecharlos en varias ocasiones. En el caso de la rama rural del MTE-UTEP, tuvo dificultades para tramitar permisos de circulación sobre todo en la región norte del país debido a que el ReNAF no estaba funcionando y, por ende, no contaban con el reconocimiento de trabajadores esenciales. En el caso del MOCASE-VC, en el NEA, a comienzos de la pandemia no pudieron transportar sus productos por las restricciones a nivel interjurisdiccional; recién a fines de 2020 se reactivaron los circuitos de venta, incluso del AMBA, lo que aumentó la producción y las ventas. En el MNCI Buenos Aires, en agosto de 2021 aclararon que las ventas estaban por debajo del nivel de 2020, donde hubo un boom en la demanda de productos agroecológicos.

b) Aumentos en el costo de los insumos producto de la inflación y persistente deterioro de los ingresos a pesar de la recuperación económica

En general, en agosto de 2021 -momento de las entrevistas- continuó siendo un problema la caída de ingresos debido a la elevada inflación y a las dificultades productivas y de comercialización. Por un lado, hubo menos actividad en la mayoría de las ramas de la economía popular, lo que generó menores ingresos en paralelo a un aumento general en las necesidades de trabajo y del aumento del costo de vida. Por otro lado, las y los trabajadores de la economía popular se caracterizan por poseer lo que se denomina pluriactividad. Por ello, son trabajadoras y trabajadores que en su *rebusque* tienen que estar constantemente *en movimiento* (Fernández Álvarez y Quirós, 2021). En este sentido, al disminuir la actividad económica en general, se redujeron también las *changas* con las que obtienen sus ingresos. Por lo tanto, la crisis les afectó doblemente: tanto en la actividad propia de la economía popular como en las otras formas de ingreso. En las entrevistas, este diagnóstico se repitió transversalmente a las ramas y las organizaciones. Por ejemplo, el referente de FECARA comentó que además de la poca generación de residuos reciclables, tuvieron dificultades financieras para garantizar el cuidado personal de las y los trabajadores en el lugar de trabajo. En el caso de la rama servicios socio comunitarios, muchas trabajadoras de los comedores tuvieron que salir a buscar changas extras para sustentarse.

Encontramos algunas excepciones en las empresas recuperadas. En el caso de ACTRA, la caída de ingresos fue marcada en los primeros meses de la pandemia hasta mediados de 2020. En esa etapa tuvieron que refinanciar sus acuerdos comerciales y devolver cheques. En agosto de 2021, la actividad se reactivó y ya trabajaban a plena capacidad. En el caso de las empresas recuperadas nucleadas en el MNER, la situación fue dispar según el rubro de actividad de cada cooperativa. En el caso de FACTA, la pérdida de ingresos se arrastraba desde la gestión del gobierno anterior y se profundizó con la pandemia. Una de las circunstancias particulares que acentuó esto fue el cambio en las escuelas del gobierno de CABA en torno a la elaboración de canasta de alimentos que comentábamos anteriormente, que redujo a las cooperativas al empaquetamiento y distribución, afectando los ingresos de sus trabajadoras y trabajadores. Paradójicamente, lo que ayudó a sobrellevar la situación financiera de algunas empresas recuperadas fue que, al haber un menor movimiento y presencia de trabajadoras y trabajadores en la cooperativa, los gastos y la proporción de desperdicio se redujo, lo que solventó parte de la caída de la producción.

En el caso de la rama de la agricultura familiar y campesina, tuvieron dificultades en relación con los insumos, generalmente con precios dolarizados. Los faltantes de semillas para producir hicieron que en muchos casos se duplicara su precio, al igual que otros insumos como la madera y el nylon para los invernaderos. No obstante, el aumento del precio de los insumos fue algo transversal a las ramas de actividad, lo que afectó a los ingresos de las y los trabajadores, debido a la imposibilidad de trasladar el costo a los precios, ya sea por las dificultades en la comercialización o

por el peso de los intermediarios al momento de fijar los precios de los productos de la economía popular.

c) Reorganización del lugar de trabajo a través de burbujas y modificaciones en los horarios de trabajo

Las diferentes ramas de la economía popular consultadas en el relevamiento han adaptado y reordenado sus actividades laborales frente al contexto de pandemia durante 2021. En comparación con los cambios sucedidos durante el primer año de la pandemia, durante 2021 se observó una mayor adaptabilidad y rapidez en la reorganización del trabajo, a partir de burbujas, y reordenamiento de horarios laborales según las normativas vigentes. Asimismo, se encontraron excepciones en ciertas cooperativas y espacios productivos que, por sus actividades y disposición espacial, no tuvieron que recurrir a burbujas y protocolos.

En cuanto a la implementación de burbujas, esto es la organización de grupos reducidos de trabajadoras y trabajadores en los espacios de trabajo con el fin de reducir el riesgo de contagio por proximidad, ya se habían aplicado con éxito en la mayoría de las ramas consultadas durante 2020. En 2021, se mantuvo esta modalidad, la mayoría de las ramas consultadas manifestaron haber aplicado burbujas de trabajo de entre 3 a 6 personas por turno -dependiendo del tamaño del lugar de trabajo y de la cantidad total de trabajadoras y trabajadores-. Se observó que algunas de las causas por las cuales se adoptó esta estrategia, más allá de la sanitaria, fue en pos de que pudieran organizar sus horarios y coordinar con otras actividades: las salidas de la escuela de sus hijas e hijos -quienes también estaban en burbujas y con horarios rotativos-, el reemplazo de compañeras y compañeros, entre otras. Algunas de las ramas que adoptaron esta estrategia fueron la rama de servicios socio comunitarios -particularmente los espacios de niñez-, la rama de liberados, liberadas y familiares de detenidos/as-MTE-UTEP, la rama de comercio popular y trabajos en espacios públicos, algunas cooperativas de la rama de construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental y las empresas recuperadas. Las y los dirigentes de estas ramas han expresado que el uso de elementos de higiene como son barbijos, sanitizantes, lavandina, guantes, cofias y batas, dentro de sus espacios de trabajo fue una medida obligatoria y muy efectiva.

Como mencionamos, ciertas ramas como la agricultura familiar y campesina no tuvieron la necesidad de reorganizarse en función de mantener el distanciamiento entre las y los trabajadores, ya que sus lugares de trabajo son espaciosos y en general se trabajaba dentro del mismo círculo familiar.

> ...en las quintas siempre se trabajó normalmente porque en 2020 no llegó la pandemia acá, estamos muy aislados y no tenemos contacto con gente, sí lo que adoptamos son medidas de precaución para cuando venía algún que otro intermediario... (Referenta de la Rama Rural del MTE-UTEP).

En cuanto a la jornada de trabajo, su ampliación o reducción fue heterogénea según la actividad, incluso dentro de la misma rama. Algunas no redujeron su franja laboral, por ejemplo, los comedores y merenderos de la rama de servicios socio comunitarios. Estos habían intentado reducir su actividad en el momento de estricto aislamiento durante 2020, sin embargo, siguió siendo elevada por la situación socioeconómica.

La rama de recuperación, reciclado y servicios ambientales también sostuvo la presencialidad diaria y no redujo sus horas de trabajo durante 2021, incluso se crearon nuevas rutas de recolección, tal es el caso de FACCyR. Algo parecido se observó en algunas cooperativas de construcción y con trabajadoras y trabajadores de la rama de la industria manufacturera, específicamente de las y los ladrilleros, quienes no modificaron sus horarios, ya que se trata de un trabajo mayoritariamente individual y al aire libre.

En la rama de comercio popular y trabajos en espacios públicos, donde se encuentra la Cooperativa de Trabajo Vendedores Unidos del Tren San Martín del Movimiento Evita, decidieron coordinar los recorridos y el tiempo en los trenes, para que las y los trabajadores tuvieran oportunidades similares de vender sus productos. Algo similar pasó con la rama de liberados, liberadas y familiares de detenidos/as del MTE-UTEP y la rama de empresas recuperadas, quienes tomaron la decisión de repartirse equitativamente entre las y los trabajadores el escaso trabajo que les llegaban a las cooperativas, dando por resultado una menor cantidad de horas trabajadas. Asimismo, las empresas recuperadas y algunas cooperativas de construcción directamente tomaron la decisión de no exponer a sus trabajadoras y trabajadores más adultos y, por lo tanto, de mayor riesgo decidiendo que se resguarden en sus hogares, mientras que otras y otros compañeros los reemplazaban.

> …empezamos a trabajar de a poco y sí, es cierto que con burbujas, con cronogramas, con esto de que al día de hoy tenemos gente que es más grande y que tiene que viajar en transporte público, y todavía no se reincorporó y no sabemos si lo van a hacer o no en algún momento. (Referenta del MNER)

Finalmente, es menester destacar el carácter indispensable de las ollas populares, comedores y los espacios de niñez para llevar adelante la actividad laboral. Sin estos espacios, la organización laboral de las distintas ramas hubiera sido imposible, ya que coordinar la situación familiar y personal de cada trabajador y trabajadora con lo laboral fue muy difícil, en particular para las mujeres, sobre las recayó principalmente la coordinación de las actividades reproductivas y productivas.

2. PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS REFERIDAS A LAS CONDICIONES DE VIDA

Una cuestión que surgió de forma recurrente en las entrevistas tuvo relación con la mayor visibilización que adquirió la cuestión del trabajo de cuidados y las desigualdades de género y clase. Tal como lo han identificado distintos estudios, la pandemia ha profundizado una crisis de cuidados previamente existente en Latinoamérica, evidenciando la centralidad de estos trabajos y las profundas asimetrías que la atraviesan (CEPAL, 2020b; Batthyany 2020; ONU MUJERES y CEPAL, 2020). De ahí que distintas autoras han planteado que la pandemia brindó una oportunidad para promover transformaciones en la injusta configuración de los cuidados, apuntando hacia su revalorización y al diseño de políticas integrales y de corte universal (Pautassi, 2020; Batthyani y Sánchez, 2020; Tabbush, 2021). Debido a la interrupción o reducción de la presencialidad en instituciones educativas, la demanda de trabajo de cuidados en los hogares se incrementó, generando una intensificación de los esfuerzos cotidianamente realizados por quienes tienen a su cargo estas tareas de forma no remunerada (Ottaviano, 2020; Pautassi, 2020). Las mujeres fueron mayoritariamente quienes tuvieron que hacer frente de forma simultánea a las exigencias del trabajo productivo y reproductivo, sin contar con posibilidades de delegar las tareas del cuidado.

Específicamente en el caso de la economía popular, la feminización de los cuidados ha afectado a las mujeres reduciendo sus posibilidades de generar ingresos económicos centrales para la subsistencia y sobrecargándolas de trabajo tanto en el hogar como en el ámbito comunitario, en donde fueron las principales encargadas de realizar tareas de asistencia alimentaria, promoción de salud, apoyo escolar y prevención de la violencia. En muchos casos, los dos años de pandemia fomentaron una serie de debates y reflexiones que ya estaban en curso, en relación con la generización de los distintos trabajos, la construcción de estereotipos laborales y la distribución de tareas entre varones y mujeres, así como la apuesta por construir formas de organización que involucren miradas no binarias.

En este sentido, se destacan una serie de procesos recurrentes en relación con el trabajo de cuidados y los roles de género, que atraviesan las distintas ramas ocupacionales de la economía popular y que podemos sintetizar de la siguiente manera:

- **a)** Intensificación de la demanda de trabajo de cuidados en el hogar ligada a suspensión de clases presenciales e imposibilidad de externalizar estas tareas en otras instituciones o redes de ayuda, sobrecargando especialmente a las mujeres
- **b)** Expansión de la demanda de trabajo de cuidados en ámbito comunitario y mayor visibilización de la importancia de estas tareas, así como del protagonismo de las mujeres en actividades fundamentales para la reproducción de la vida
- **c)** Profundización de debates en torno a roles de género y distribución de tareas en el ámbito productivo y reproductivo

a) Intensificación de la demanda de trabajo de cuidados en el hogar ligada a suspensión de clases presenciales e imposibilidad de externalizar estas tareas en otras instituciones o redes de ayuda, sobrecargando especialmente a las mujeres

La necesidad de reorganizar los tiempos y modalidades de trabajo en relación con la demanda de cuidado en los hogares ha sido una cuestión recurrentemente señalada por referentes de distintas ramas productivas de la economía popular. Sin adentrarnos en cuestiones específicas en relación con la educación durante la pandemia y las demandas y estrategias de las organizaciones, que son analizadas en profundidad en otros capítulos del presente informe, existe un notable consenso respecto que la interrupción de las clases presenciales, la virtualización de la educación y la instalación de modalidades híbridas ha generado desafíos en la organización de los tiempos y modalidades de trabajo. Desde distintas ramas -tales como la rama de recuperación, reciclado y servicios ambientales, construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental, industria manufacturera, comercio popular y trabajos en espacios públicos y empresas recuperadas- se ha insistido que la no presencialidad en las escuelas desencadenó problemáticas específicas para la realización de trabajos. Esta sobrecarga del trabajo de cuidados en los hogares se vio intensificada debido a la imposibilidad de contar con otras formas de colaboración en manos de familiares o servicios remunerados de cuidado.

> Nosotros tenemos horarios de entrada y de salida acordes a lo que los compañeros dejan a los chicos en el colegio y tienen quién los cuide. Cuando están los chicos en la casa ¿quién los cuida? Nadie o la abuela y la abuela está aislada. (Referente de la FACCYR-UTEP)

Referentes de la rama de trabajadoras y trabajadores de comercio popular y trabajos en espacios públicos, mencionaban que, debido a la merma de ingresos económicos, las posibilidades de recurrir a contratar servicios de cuidado remunerado también se habían visto reducidas, afectando especialmente la situación económica de las mujeres con hijos/as menores a cargo que quedaron "sobrecargadas de tareas de cuidado y crianza". En este sentido, los referentes de varias ramas coincidieron que esta situación reforzó desigualdades de género en la medida en que fueron mayormente las mujeres las que tuvieron que quedarse en su casa al cuidado de sus hijas e hijos encontrando dificultades para retomar el trabajo. Desde el MNER, se planteó específicamente que esta sobrecarga de trabajo de cuidados "castigó" a las mujeres porque, en muchos casos, sin dejar de estar presentes en las unidades productivas, se hacían también cargo de tareas de cuidado y acompañamiento de la educación de sus hijas e hijos, teniendo que "dar respuesta" a múltiples problemas emergentes. Según la referente de esta organización, una problemática específica ha sido la necesidad de profundizar la inclusión de cuestiones referidas a las responsabilidades de cuidado de las y los trabajadores en los reglamentos internos de las cooperativas. En coincidencia con este diagnóstico acerca que el trabajo de cuidados implica una

cuestión relevante en la organización del trabajo en las unidades productivas, referentes de otras organizaciones de la rama de empresas recuperadas, como FACTA y FEDECABA, han mencionado que muchas cooperativas han otorgado a las trabajadoras con hija e hijos en edad escolar la posibilidad de realizar sus tareas de forma remota o de no concurrir al lugar de trabajo durante el período en que los servicios educativos estuvieron restringidos.

En otras ramas productivas, como de la rama de agricultura familiar y campesina, muchas mujeres se vieron obligadas a trabajar con las y los niños en las quintas, ya que la precariedad habitacional de los hogares constituyó un factor importante en la decisión de concurrir con ellas y ellos a los espacios de trabajo. En algunos casos, como en algunos territorios de la rama rural del MTE, por la frecuencia en los incendios accidentales en las casillas -debido a las instalaciones eléctricas precarias- fue clave para que muchas mujeres evitaran dejar a sus hijas e hijos en sus hogares, aunque fueran mayores. Esta situación difiere de otros entornos rurales y periurbanos, en los que las personas viven en el mismo territorio en los que realizan sus tareas laborales y, al no tener que desplazarse, tampoco deben dejar sus hijas e hijos solas y solos o al cuidado de otras personas, tal como fue señalado por referentes del MOCASE-VC.

En la rama de servicios socio comunitarios, distintas referentes han destacado que se trata de una rama compuesta mayoritariamente por mujeres y que, en muchos casos, ellas fueron quienes sostuvieron simultáneamente el cuidado de sus hijas e hijos y el de su comunidad. Esta sobrecarga de trabajo afectó el modo en que se organizó el trabajo en comedores y merenderos, en donde fue necesario adaptarse a lo que disponían las burbujas de las escuelas alternando semanalmente las jornadas laborales, tal como lo expresó una referente de la Rama sociocomunitaria del Movimiento Evita -UTEP.

En síntesis, de forma recurrente, los y las referentes de las distintas ramas productivas identificaron que los modos de organizar el cuidado de familiares a cargo, principalmente aquel dirigido a la atención de la primera infancia, debieron reorganizarse durante 2020 y 2021. En 2020, en que las medidas de aislamiento fueron más estrictas y duraderas y la presencialidad educativa estuvo interrumpida todo el ciclo lectivo, los hogares vieron intensificada la demanda de tareas de cuidado. Esta se mantuvo durante 2021, ya que la "vuelta a la escuela" implicó un funcionamiento reducido, con alternancia entre virtualidad y presencialidad. De este modo, se pone particularmente en evidencia la importancia del lugar de las escuelas como estructura organizadora de la vida social estrechamente relacionada a los cuidados y la urgente necesidad de considerar las necesidades de quienes tienen personas a cargo a la hora de pensar el trabajo en la economía popular.

b) Expansión de la demanda de trabajo de cuidados en ámbito comunitario y mayor visibilización de la importancia de estas tareas, así como del protagonismo de las mujeres en actividades fundamentales para la reproducción de la vida.

Tal como se refirió en el informe de Fernández Álvarez, et al., (2020), durante la pandemia se expandió considerablemente la demanda de asistencia alimentaria en los barrios populares, incrementándose el trabajo realizado por referentes comunitarias que se ocuparon de sostener merenderos, comedores y ollas populares. La entrega de viandas ya preparadas y bolsones de alimentos fue una estrategia adoptada por una variedad de ramas productivas dentro de la economía popular. Durante 2021, si bien algunos testimonios señalan que se observó una lenta recuperación de la actividad económica con respecto a 2020; también coinciden en afirmar que la demanda de trabajo en la rama de servicios socio comunitarios, continuó siendo alta, profundizando un proceso previo de visibilización del rol de las trabajadoras de esta rama y de la comprensión de sus tareas en término de trabajo de cuidado en el ámbito comunitario.

En este sentido, el cuidado adquirió centralidad en las reivindicaciones y proyectos a futuro de las organizaciones, dando lugar a la profundización de una demanda previa en torno al reconocimiento social y salarial de quienes realizan este tipo de trabajos para sus barrios y comunidades, tal como lo refieren desde diversas organizaciones. Distintas referentes de la rama servicios socio comunitarios, coincidieron en afirmar que las tareas de cuidado en los barrios y comunidades fueron sostenidas mayoritariamente por mujeres y otras identidades feminizadas como travestis, trans y no binaries. Esta relevancia no se limita solamente a las tareas de apoyo a la alimentación y de resolución de necesidades básicas para la subsistencia, sino que incluye el trabajo con personas con problemas de adicciones, la prevención de la violencia en los barrios, el acompañamiento a situaciones de violencia de género y juventudes.

Así, en términos generales, puede decirse que un emergente significativo surgido en la pandemia, fue la instalación de la temática de los cuidados en un sentido amplio en las agendas y problemáticas identificadas por diferentes organizaciones. Si la rama de servicios socio comunitarios cobró centralidad como espacio de trabajo desde donde se proveen una serie de recursos y ayudas centrales para la reproducción de la vida, otras ramas de la economía popular también destacaron que los cuidados empezaron a hacerse presente de forma más explícita como un tema de reflexión y abordaje colectivo en los espacios de trabajo. De los testimonios de variadas ramas de actividad emerge como significativa la profundización de debates sobre el tema, tanto en relación con el modo en que se abordan cuestiones referidas a las responsabilidades de cuidado de las y los trabajadores -lo que en el ámbito laboral suele denominarse como "conciliación familia-trabajo"- como en lo que refiere a la importancia de las tramas comunitarias y colectivas desde las que se resuelve la sostenibilidad de vida de los sectores populares. A modo ilustrativo, pueden mencionarse las palabras de la referente de la rama de comercio popular y trabajos en espacios públicos quien planteó que la pandemia les "abrió los ojos", haciendo evidente la necesidad de considerar la situación

familiar de las y los trabajadores a la hora de construir demandas y modalidades de organización y permitiendo identificar el déficit existente en materia de provisión pública de cuidado infantil. Desde el MNER refieren que cobraron centralidad reflexiones en torno a las necesidades de cuidado de adultos mayores, visibilizando el tema en las cooperativas y dando lugar a debates respecto de los modos en que se resuelven los mismos. Por último, vale la pena mencionar que esta mirada desde los cuidados y la recuperación de perspectivas cercanas a la economía feminista en las demandas y acciones de las organizaciones dejó como emergente una problematización de qué se entiende por productivo, como lo señalaron algunos referentes de la rama agricultura familiar y campesina. Desde el MNCI Somos Tierra señalaron la necesidad de llevar adelante un proceso de problematización de los proyectos productivos desde la perspectiva de género, buscando deconstruir miradas de hombres y mujeres respecto de la valorización de los trabajos.

c) Profundización de debates en torno a roles de género y distribución de tareas en el ámbito productivo y reproductivo.

La cuestión del trabajo de cuidados y las implicancias de la distribución desigual entre varones y mujeres se articula con un debate más amplio que surgió en las entrevistas en relación con los modos en que la construcción del género atraviesa los roles y tareas en los espacios de trabajo. Si bien la asociación entre mujeres y trabajos de cuidado surgió de forma recurrente en el relevamiento, también resultó significativa la frecuencia con la que en las entrevistas se afirmó la preocupación por avanzar hacia un reparto equitativo de tareas entre los géneros, procurando tomar distancia de estereotipos laborales tradicionales. De esta manera, la incorporación de mujeres en trabajos de la rama Construcción e Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental fue señalado como un aspecto de relevancia en esta dirección, en la medida en que permitió visibilizar que las trabajadoras de la economía popular ocuparon un lugar central en el desarrollo de tareas que contribuyen a mejorar condiciones habitacionales y de infraestructura barrial, involucrándose incluso en acciones que tradicionalmente son asociadas a lo masculino. Así, distintas referentes afirmaron que la apuesta por que las mujeres "aprendan oficios" y ocupen lugares como capataces, oficiales, coordinadoras de obra constituye un eje de importancia en la construcción política de sus organizaciones. Asimismo, destacaron la centralidad respecto de tomar distancia de modelos tradicionales de género a la hora de distribuir tareas en los espacios de trabajo. Por ejemplo, en la rama de comercio popular y trabajos en espacios públicos, referentes del FPDS destacaron la participación de mujeres en tareas que habitualmente "hacen los varones cis", como las de carga y descarga de mercadería. Según la mirada de nuestras entrevistadas, este "intercambio de roles" resultó una estrategia dirigida a "empoderar a las compañeras", evitando que su lugar se restrinja a actividades tradicionalmente asociadas a lo femenino, tales como las de atención al público y venta. Esta apuesta por problematizar roles de género a la hora de distribuir tareas en unidades productivas

también ha sido destacada por referentes de la rama recuperación, reciclado y servicios ambientales. Sin dudas, estas discusiones exceden a la situación de la pandemia y son objeto de amplios debates en organizaciones de la economía popular y dentro del feminismo. De todos modos, es relevante destacar el modo en que la aceleración de la crisis de cuidados ha abierto un camino propicio para profundizar en un proceso de reflexión colectiva en torno a la generización de los distintos trabajos, su valoración y reconocimiento social y la producción de formas de intervención política dirigidas a problematizar desigualdades estructurales de género.

Capítulo 2. Inventivas populares para enfrentar la pandemia

2

María Paz Laurens, Florencia Pacífico, María Inés Fernández Álvarez

En este capítulo se analizan las estrategias e iniciativas desarrolladas por las organizaciones de los y las trabajadores de la economía popular para enfrentar y resolver problemáticas y dificultades provocadas por la crisis de la pandemia del COVID-19 en lo que atendiendo a aspectos laborales, organizativos y territoriales. El accionar de las mismas se caracterizó por el despliegue de una serie de respuestas diversas que pusieron de relieve la creatividad para hacer frente a la cambiante coyuntura de la pandemia y las medidas sanitarias para mitigarla. Al mismo tiempo, recuperaron los conocimientos y aprendizajes acumulados en 2020, que tal como analizamos en el Método Citra #5 "La economía popular durante la cuarentena", fueron claves para llevar adelante acciones que garantizaron no solamente el cumplimiento de las medidas de aislamiento y la prevención sanitaria, sino también el sostenimiento de la reproducción de la vida en un sentido amplio de los y las trabajadores de la economía popular (Fernández Álvarez et. al., 2020). En primer lugar, se analizan las iniciativas y estrategias colectivas que las organizaciones de la economía popular consultadas han desarrollado para sostener la actividad laboral; considerando los cambios que debieron implementar en la modalidad de trabajo; la reorientación de la producción y el surgimiento de nuevas formas de producción y comercialización con la incorporación de medios y plataformas virtuales. Consideraremos tanto aquellos aspectos generales que atravesaron a todas las ramas como las particularidades de cada actividad laboral. Luego, analizaremos las relaciones y redes establecidas entre las organizaciones y otros actores como centros de salud, instituciones educativas, centros de acceso a la justicia, etc. Estas vinculaciones fueron fundamentales para resolver problemáticas de los territorios y espacios laborales, así como también llevar adelante proyectos en conjunto y conformar espacios de intercambio y agremiación. Dentro de este conjunto de iniciativas, consideraremos particularmente aquellas dedicadas al abordaje territorial y prevención de la violencia de género desarrolladas por parte de organizaciones de la economía popular durante la pandemia. Por último, presentamos dos aspectos relevantes surgidos en base a las entrevistas realizadas en relación con los aprendizajes de la experiencia transitada y la (re)actualización de proyectos impulsados por las organizaciones de la economía popular y que recuperan demandas de más larga data del sector.

1. ESTRATEGIAS E INICIATIVAS PARA SOSTENER LA ACTIVIDAD LABORAL

La mayoría de las organizaciones consultadas señalaron que, a excepción de algunos períodos breves de tiempo durante comienzos de 2020, donde las restricciones a la circulación fueron más estrictas, nunca llegaron a suspender por completo las actividades laborales. La heterogeneidad de las actividades productivas y laborales desarrolladas por las organizaciones de la economía popular entrevistadas -industria manufacturera, agricultura familiar y campesina, comercio popular y trabajo en espacio público, construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental, recuperación, reciclado y servicios socioambientales, servicios sociocomunitarios-, también se vio reflejada en las estrategias e iniciativas que las mismas desarrollaron para sostener las actividades laborales y garantizar la generación de ingresos. Respecto a estas iniciativas y estrategias para sostener la actividad laboral destacamos dos aspectos significativos:

- a) Implementación de cambios en las modalidades de organización del trabajo.
- b) Surgimiento de nuevas actividades laborales, diversificación y/o reorientación de rubros y actividades productivas y desarrollo de nuevas formas de comercialización con la incorporación de medios y plataformas virtuales.

a) Implementación de cambios en las modalidades de organización del trabajo

Un aspecto relevante en relación con las iniciativas y estrategias para sostener la actividad laboral a partir de la pandemia provocada por el virus COVID-19 fue la implementación de cambios en las modalidades de organización del trabajo en las distintas ramas. Es decir, que las organizaciones debieron reordenar las actividades cotidianas respecto a la organización de tareas, tiempos y espacios de trabajo. En la rama de servicios sociocomunitarios, se observan una serie de estrategias que se mantuvieron durante 2020 y 2021, entre las que se destacan los cambios en la modalidad de entrega de comida en los comedores, implementando el reparto de viandas en *tupers* y en las casas de personas aisladas y/o que estuvieran dentro de los grupos de mayor riesgo sanitario. Las organizaciones consultadas señalaron que, debido al aumento de demanda de asistencia alimentaria, tuvieron que abrir nuevos comedores y realizar más ollas populares en los territorios. Cabe destacar que la importancia de esta rama en este contexto fue crucial para garantizar el acceso al alimento a los y las vecinos de los barrios resultando en muchos casos el principal nexo entre el barrio y el estado para la implementación de las medidas sanitarias y asistenciales que se implementaron durante la pandemia. Al respecto, es importante señalar que según datos del ReNaTEP correspondientes al informe publicado en agosto de 2021 los servicios sociocomunitarios representan la segunda actividad con mayor cantidad de trabajadoras con un 28,8%. Un dato sumamente significativo que se desprende del relevamiento realizado pone en evidencia que este sector, conformado en su mayoría por mujeres, se hizo cargo también de numerosas actividades complementarias como la asistencia para realizar trámites, brindar información sobre protocolos, vacunación y cuidados sanitarios, entre otras. En particular, algunas organizaciones como la rama sociocomunitaria del Movimiento Evita-UTEP desarrollaron huertas para abastecer los comedores y organizaron trueques

o roperitos en los barrios para que las personas que asistían en busca de su alimento pudieran acceder a otros bienes necesarios, como ropa y calzado.

Las trabajadoras y trabajadores del espacio público del Movimiento Evita-UTEP señalaron cambios referidos a su forma de trabajo: quienes realizaban la venta en transportes públicos se volcaron en el 2020 a la venta casa por casa debido las restricciones a la circulación. Asimismo, el Frente Arde Rojo de la organización FAR, específicamente la rama de construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental, reorganizó las áreas de salud e higiene para poder implementar los protocolos de trabajo requeridos por los gobiernos nacionales y locales para poder retornar progresivamente a la actividad. Otras organizaciones de esta rama, como el FPDS, han desarrollado equipos técnicos formados por especialistas en la construcción, como ingenieros, arquitectos y maestros mayor de obras, para finalizar obras que habían quedado inconclusas debido a las restricciones de principios de 2020. Los trabajadores ladrilleros de la rama de industria manufacturera nucleados en UOLRA debieron aplicar una reducción en los precios de venta de los ladrillos para sostener la comercialización y mantener los ingresos. En lo que respecta a la rama agricultura familiar y campesina se impulsó la creación de almacenes para la venta directa al consumidor y la organización de rifas solidarias para sostener los comedores abiertos debido a la sostenida demanda de asistencia alimentaria.

Las empresas recuperadas implementaron diversas estrategias para la reorganización de las tareas laborales de acuerdo con la actividad productiva desarrollada en cada una. Tal como se señaló en el capítulo anterior, al verse suspendidos la provisión de servicios gastronómicos en restaurantes, eventos y comedores escolares, algunas empresas recuperadas dedicadas al rubro alimenticio debieron reordenar la forma de trabajo para poder continuar con la distribución de viandas. Para ello, adquirieron diversos elementos como canastos y empaquetadoras para realizar el empaque y distribución de las viandas y garantizar así la continuidad del servicio. A su vez, otras empresas recuperadas como FEDECABA, trasladaron a modalidad virtual aquellas actividades que no requerían necesariamente la asistencia presencial como tareas administrativas, de diseño y de administración.

b) Surgimiento de nuevas actividades laborales, diversificación y/o reorientación de rubros y actividades productivas y desarrollo de nuevas formas de comercialización con la incorporación de medios y plataformas virtuales

La incorporación de la virtualidad, la prioridad en la asistencia alimentaria y las cuestiones relativas a la prevención sanitaria fueron en términos generales tres aspectos relevantes que las organizaciones debieron incorporar en sus tareas cotidianas para poder sostener las actividades productivas desde 2020. Tal como desarrollamos en el relevamiento del Método Citra #5 resolver el aumento de la demanda alimentaria fue algo común a la mayoría de las organizaciones de todas las ramas, es decir que además de hacer sus actividades laborales cotidianas, tuvieron que desarrollar y sostener el funcionamiento de comedores, merenderos, ollas populares, entregas de viandas a personas aisladas y/o de riesgo para brindar asistencia alimentaria. Esta situación que se volvió prioritaria en 2020 continuó durante el desarrollo de la pandemia de 2021.

Una cuestión destacada es que muchas de las organizaciones debieron (re)inventar y/o diversificar sus rubros laborales para garantizar la generación de ingresos. Esto se vio principalmente en las organizaciones textiles -MTE, FAR, Somos Barrio de Pie- que reorientaron la producción hacia la confección de insumos sanitarios -camisolines, barbijos, cofias-, desde 2020 en adelante en muchos casos bajo acuerdos con los ministerios de salud correspondientes. Es decir que, debieron cambiar el tipo de producción que venían realizando, como por ejemplo manteles, sábanas, guardapolvos, indumentaria urbana hacia la fabricación de insumos sanitarios. Algunas organizaciones de esta rama como Somos Barrios de Pie señalaron que pudieron retornar a la venta en ferias en los territorios una vez que las restricciones disminuyeron.

Otro aspecto relevante fue sin duda la incorporación de la virtualidad en todos los aspectos de la vida cotidiana de las organizaciones y, sobre todo, en los momentos de mayores restricciones a la circulación. Las organizaciones consultadas han señalado que también debieron incorporar la virtualidad para sostener actividades laborales de forma remota e incorporar canales de comercialización virtual. En este sentido, varias de las ramas -comercio popular y trabajo en espacios públicos, agricultura familiar y campesina y empresas recuperadas- mencionaron que impulsaron nuevas formas de comercialización a través de medios virtuales, modalidades de entrega por *delivery* y/o *take away* y la incorporación de medios de pago digitales para la venta de sus productos y servicios. En las organizaciones nacionales de la rama de agricultura familiar y campesina -MNCI, MNCI Somos Tierra, UTT, MTE Rural- esto se llevó adelante específicamente a través del desarrollo de almacenes populares para la venta directa al consumidor de la producción agroecológica y distribución domiciliaria de bolsones de verdura. Desde el MNCI Somos Tierra y el MTE Rural desarrollaron nuevas líneas de productos como distintos tipos de conservas, escabeches y mermeladas, para aprovechar las frutas y verduras que no se podían vender debido a que los medios de distribución estaban suspendidos por las restricciones. Desde el MTE Rural señalaron que hubo rubros especialmente afectados, como los floricultores ya que, al no ser un trabajo considerado esencial, se suspendieron los canales de comercialización como los cementerios y las florerías, por lo que no había posibilidad de vender su producción -tal como se desarrolló en el capítulo 1-. Durante 2020, debieron comenzar con huertas orientadas hacia la producción hortícola, actividad que mantuvieron de forma combinada cuando pudieron retomar la floricultura.

El área de coordinación de productivos de la organización FAR -equivalente a la rama de manufactura del RENATEP- señaló que algunas actividades como carpintería, dejaron de funcionar y los y las trabajadores fueron incorporados a las cuadrillas de construcción para finalizar obras en espacios dedicados a realizar acompañamiento en situaciones de violencia de género en los barrios, situación que se agravó con el aislamiento como desarrollaremos en profundidad en el siguiente punto del presente capítulo.

Desde el Frente Darío Santillán- Misión Me.Co.Po/ Nacional mencionaron que durante 2021 abrieron más ferias y almacenes populares en los barrios para la venta de productos de cooperativas de la organización, productores directos y emprendimientos familiares. A su vez, crearon una nueva área dentro de la organización para la coordinación de las ventas de productos a instituciones como escuelas y universidades e instituciones públicas. Uno de los ejemplos más destacados de esta área fue la fabricación de los barbijos Atom-Protect en el Polo Textil del FPDS ubicado en la localidad de Avellaneda a partir de un convenio con universidades y la pyme textil Kovi SRL.

Los y las referentes de empresas recuperadas señalaron diversas situaciones según los rubros productivas de cada cooperativa de trabajo. En el caso de la actividad textil, en línea con lo señalado anteriormente, remarcaron que fue el sector que mayor impacto tuvo en cuanto a su reconversión productiva, al volcarse hacia la producción de insumos sanitarios como barbijos, cofias y camisolines. Cabe mencionar que desde la cooperativa textil Pigüé, ubicada en la localidad del mismo nombre y perteneciente a la federación ACTRA, crearon una nueva marca SANITEX de insumos sanitarios que se sumó a la histórica fabricación de indumentaria deportiva de la fábrica. En las cooperativas textiles de FACTA surgieron nuevas actividades como la confección de zapatos para trabajadores industriales que combinaron con la producción ligada a insumos de salud. En el caso del MNER señalaron que aquellas cooperativas dedicadas a la actividad metalúrgica realizaron una ampliación productiva hacia la fabricación de sanitizantes a pedal y exploraron la posibilidad de fabricación de respiradores. Respecto a aquellas dedicadas al rubro gastronómico, señalaron que durante 2020 mientras todas las demás actividades se veían intensamente afectadas, estas fueron las que lograron mantener y aumentar su producción debido a que fue un rubro que vivió una gran demanda. Sin embargo, para 2021 esta situación se modificó ya que su producción disminuyó de un modo significativo.

La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores-UTEP señaló que durante la pandemia pudieron ampliar puestos de trabajo en una de sus plantas de reciclado en Lomas de Zamora, al incorporar un servicio que antes tercerizaban: el procesamiento del nylon para la fabricación de bolsas. De esta forma pudieron venderlas a municipios y abastecieron a otras ramas del MTE, como a las y los trabajadores de la rama de espacio público y rural para empaquetar sus producciones. De esta forma, lograron realizar en la misma planta todas las etapas de recolección, clasificación, procesamiento y generación de un nuevo producto, a través de la venta colectiva del material.

Desde la rama de liberados, liberadas y familiares de detenidos/as del MTE-UTEP mencionaron que 2021 significó un crecimiento para la organización al lograr la apertura de nuevas unidades productivas que les permitió incorporar laboralmente a más personas que salieron de estar detenidas en cárceles durante la pandemia. Aquí podemos mencionar la apertura de diez herrerías en el AMBA, las cuales se organizaron en base a un esquema de distribución de trabajos de clientes –privados, públicos y de la propia organización- para garantizar la producción y la generación de ingresos en todas ellas. También inauguraron una panadería formada por mujeres liberadas en el municipio de Pilar que provee, a través de un convenio municipal, pan para las obras de urbanización que se realizan en el mismo.

2. CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES Y FORTALECIMIENTO DE REDES ORGANIZATIVAS, COMUNITARIAS Y TERRITORIALES

Otro de los aspectos relevantes surgidos a partir de las entrevistas con los y las referentes de las organizaciones de la economía popular fue la importancia de los vínculos que se tejieron entre las organizaciones y otros actores para hacer frente a la situación de crisis. Es decir, se construyeron redes que fueron cruciales para garantizar el acceso a insumos sanitarios, alimentos, medicamentos, brindar asistencia jurídica, colaborar en la realización de trámites virtuales

y sostener actividades productivas y comerciales en conjunto. También se impulsaron diversas instancias organizativas y de agremiación que sirvieron para plantear problemas en común respecto a la pandemia ya sea dentro de la misma rama de actividad o entre ramas y buscar estrategias colectivas para resolverlos. La construcción de redes y articulaciones fueron cruciales para resolver problemáticas relacionadas con la pandemia y recuperaron experiencias y trayectorias organizativas previas que las organizaciones de la economía popular vienen desarrollando para garantizar la reproducción de sus vidas. Respecto a estos procesos destacamos tres puntos:

- a) articulaciones dentro de la propia organización y entre organizaciones para sostener actividades productivas y organizativas en conjunto; fortalecimiento de redes y de instancias de intercambio a nivel local, regional y nacional.
- b) fortalecimiento de redes comunitarias y territoriales con otros actores -como centros de atención de la salud, centros de acceso a la justicia, instituciones educativas-, para la resolución de problemáticas referidas a la pandemia y realizar proyectos en conjunto.
- c) estrategias colectivas para el abordaje de la violencia de género en los territorios.

a) Articulaciones dentro de la propia organización y entre organizaciones para sostener actividades productivas y organizativas en conjunto; fortalecimiento de redes e instancias de intercambio a nivel local, regional y nacional

Las organizaciones consultadas han señalado que durante la pandemia fue de suma importancia realizar acciones en conjunto para llevar adelante actividades laborales y/o organizativas y para resolver situaciones problemáticas en los territorios. Por ejemplo, desde la rama de agricultura familiar y campesina realizaron articulaciones con cooperativas de pequeños productores agrícolas de la provincia de Buenos Aires dedicadas a la producción de quesos, leches y pescado que al comienzo de la pandemia se vieron profundamente afectados al verse suspendidos sus canales de comercialización. Tanto desde el MTE rural como de la UTT brindaron asistencia para incorporarlos al esquema de comercialización de los productos hortícolas, realizando compras y ventas en conjunto. Una situación similar ocurrió con el Frente Darío Santillán- Misión Me.Co. Po/Nacional que realizó articulaciones con cooperativas de pescadores, con el fin promover el consumo de ese producto en ámbitos urbanos y sumarlo al esquema de comercialización de sus almacenes populares. Desde la rama de liberados, liberadas y familiares de detenidos/as del MTE-UTEP se realizó la fabricación de carros de hierro para la recolección de materiales reciclados para las cooperativas de la FACCYR y de esta forma garantizaron las compras entre cooperativas y ramas dentro de la misma organización.

A su vez, las organizaciones consultadas señalaron que, a pesar de las restricciones a la circulación y que los encuentros presenciales estuvieron suspendidos, continuaron promoviendo diversas instancias de participación y/o de creación de mesas de trabajo conjunta entre diversas organizaciones y/o federaciones tanto a nivel local, regional y nacional. Esto permitió mantener el diálogo y los debates sobre las necesidades y demandas de cada rama, acompañar la conformación de nuevos espacios, realizar tareas en conjunto, prestarse ayuda mutua y/o asesoramiento trámites o cuestiones jurídicas, entre otras. Tal es el caso de la rama de liberados,

liberadas y familiares de detenidos/as del MTE-UTEP quienes, durante 2021, a medida que las restricciones a la movilidad se fueron levantando, realizaron visitas y asambleas presenciales con cooperativas de la rama ubicadas en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires y otras como Misiones, Corrientes y Neuquén con el fin de acompañar procesos organizativos más recientes y la apertura de nuevas unidades productivas. En esta misma línea, desde la rama textil del MTE articularon con otras cooperativas del mismo rubro pertenecientes a otras organizaciones para replicar la experiencia de conformación de polos textiles. La conformación de polos textiles es una de las demandas de esta rama y bajo la consigna "el hogar para habitar, el polo para trabajar" se expresa la necesidad de que el trabajo de la confección de indumentaria se realice en lugares adecuados y no en la propia casa de los y las trabajadores. Por su parte, las empresas recuperadas realizaron acompañamiento a través de medios virtuales a las cooperativas que conforman sus respectivas federaciones tanto para brindar asesoramiento en cuestiones administrativas, realizar trabajos en conjunto, incorporar nuevas cooperativas e intercambiar sobre las demandas del sector. En particular, desde FACTA realizaron campañas de difusión sobre las necesidades de las empresas recuperadas respecto a la situación jurídica de los asociados y realizaron compras de alimentos en conjunto que se distribuyeron a los miembros de las cooperativas. Una situación similar ocurrió en la rama de recuperación, reciclado y servicios ambientales que promovieron mesas de articulación entre MTE, FECARA y FECUTRA. A su vez, desde FECUTRA crearon la Red Recuperando Líderes, desde la cual ayudaron a otras cooperativas en proceso de conformación a por ejemplo realizar los trámites de formalización de la matrícula.

b) Fortalecimiento de redes comunitarias y territoriales con otros actores -como centros de atención de la salud, centros de acceso a la justicia, instituciones educativas- para la resolución de problemáticas referidas a la pandemia y realizar proyectos en conjunto

A su vez, para las organizaciones fue importante la promoción de redes comunitarias de anclaje territorial, que fueron claves para resolver situaciones problemáticas durante la pandemia. En un contexto donde la atención por parte de diversas instituciones estatales pasó a realizarse en formato virtual, muchas personas en los barrios quedaron sin poder acceder a servicios para atender cuestiones de salud, educación, seguridad social, etc. De esta forma, las organizaciones fueron el nexo con instituciones educativas y deportivas, centros de atención de la salud, centros de acceso a la justicia, ONG´s, etc. para resolver problemas que fue presentando la coyuntura de la pandemia en los territorios.

Desde las ramas de industria manufactura, construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental y servicios sociocomunitarios se realizaron ollas populares y reparto de comida junto a diversas instituciones de los territorios como clubes y centros de salud. Particularmente, la rama de servicios sociocomunitarios destacó la centralidad que cobraron las relaciones con clubes de barrio, asociaciones civiles y centros culturales para hacer llegar los alimentos e insumos sanitarios a la mayor cantidad de familias, sobre todo aquellas que estaban aisladas. En esta misma línea, el MTE Rural señaló que realizó articulaciones con centros de acceso a la justicia y salas de salud para realizar operativos móviles en las quintas de las

familias trabajadoras. De modo similar, el MNCI Buenos Aires junto a la UBA realizaron talleres sobre aspectos productivos y armado de precios para fortalecer el trabajo de los productores.

La rama de liberados, liberadas y familiares de detenidos/as del MTE-UTEP, a través de una donación de una ONG, llevaron adelante la apertura de diez emprendimientos gastronómicos en casas de mujeres con arresto domiciliario en el AMBA. Esta iniciativa dió continuidad al relevamiento que habían comenzado en 2020 para conocer la situación de las mujeres a quienes se les había otorgado la detención en sus hogares y organizaron circuitos de distribución para proveerles de alimentos y elementos de protección, frazadas y caloventores. Según el último informe del Registro Único de Personas Detenidas (RUD) en 2020 la cantidad de mujeres detenidas en arresto domiciliario en la provincia de Buenos Aires fue de 1.057 en contexto de pandemia. Esta cifra marca un incremento respecto de 2019 en el cual se produjeron 777 arrestos. La mayoría de las mujeres detenidas bajo arresto domiciliario se encuentran en una situación de profunda precariedad y son en su mayoría el único sostén del hogar, teniendo en muchos casos menores y personas adultas a su cargo. En la situación de arresto en sus casas, las posibilidades de acceder a un trabajo u obtener una autorización para realizar una salida laboral es casi nula. La apertura de estos emprendimientos significó una posibilidad de generarse ingresos, vendiendo productos panificados y viandas desde sus hogares que integrantes de sus familias y/o compañeros y compañeras de la rama comercializaban en el barrio. A su vez, desde esta misma rama, conformaron equipos de abordaje comunitario integrados por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y operadores comunitarios dentro de los polos productivos para brindar asesoramiento judicial, acompañamiento en casos de consumos problemáticos de sustancias, atención psicológica, etc. Estos equipos articularon con centros de salud, centros de acceso a la justicia, juzgados y defensorías para gestionar permisos para salidas de mujeres con arresto domiciliario ya sea para que puedan asistir a una consulta médica, participar de un curso de formación y/o realizar salidas laborales en las unidades productivas de la rama.

Las empresas recuperadas señalaron que realizaron articulaciones con diversas instituciones como organismos públicos y universidades, entre ellas podemos mencionar el caso de ACTRA, que desde la cooperativa Pigüé realizó articulación con el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires[3] y el Programa Envión[4] para incorporar nuevos trabajadores/as a la cooperativa. Desde FEDECABA, realizaron proyectos de acompañamientos a nuevas cooperativas en articulación con INAES, el programa Facultad Abierta y profesionales del derecho y la administración.

c) Estrategias colectivas para el abordaje territorial y prevención de la violencia de género

El abordaje territorial y prevención de la violencia de género ha ocupado un lugar de relevancia dentro de las acciones y estrategias colectivas desarrolladas por parte de organizaciones de la economía popular. Vale la pena destacar que se trata de una temática que ha ganado una creciente visibilidad en las agendas políticas de las organizaciones en sintonía con una serie

3. El Patronato de Liberados es en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la institución que debe llevar adelante políticas pospenitenciarias que incluyen la "asistencia, el tratamiento y control" de aquellas personas que según establece la Ley de Ejecución Penal 12.256 deban estar bajo su órbita por disposición judicial. Fuente: https://www.plb.gba.gov.ar/.

4. El programa Envión, está orientado a promover la inclusión socioeconómica, política y cultural de los jóvenes de entre 12 a 21 que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Fuente: https://www.gba.gob.ar/desarrollo_de_la_comunidad/asistencia/envion#:~:text=Orientado%20a%20lograr%20la%20inclusi%C3%B3n,entre%2012%20y%2021%20a%C3%B1os.

de procesos de movilización, organización y demanda desarrollados en los últimos seis años. Las protestas "Ni una Menos" y los paros de mujeres desarrollados desde 2015 y 2016 respectivamente mostraron una notable capacidad de convocatoria, la cual interpeló a distintos sectores sociales y recibió el apoyo de actores políticos variados (Natalucci y Rey, 2018; Daich y Tarducci, 2018; Sciortino, 2018; Frega, 2019). Las organizaciones de la economía popular han tenido una participación significativa en estas luchas generadas en repudio a los femicidios y otras expresiones de la violencia de género, desarrollando una interpretación de estos fenómenos a la luz de procesos más amplios de desigualdad social y reivindicando que el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población ha afectado particularmente a las mujeres sobrecargándolas de trabajos precarios y no remunerados. Estos procesos organizativos más recientes tienen antecedente en una tradición más amplia de articulaciones entre las demandas de las organizaciones territoriales y los feminismos, las cuales constituyen un fenómeno de larga data en nuestro país, cuyos antecedentes pueden rastrearse en el protagonismo de las mujeres en los movimientos sociales que resistieron a las políticas neoliberales durante los noventa, en su participación en los Encuentros Nacionales de Mujeres y en la constitución de modalidades de organización identificadas con el feminismo popular (Di Marco, 2011; Laudano, 2017; Korol, 2016; Daich y Tarducci, 2018).

En sintonía con estos procesos organizativos, las organizaciones de la economía popular no tardaron en identificar el impacto que las medidas de aislamiento y distanciamiento social tendría en el recrudecimiento de la violencia de género. De las entrevistas realizadas surge de forma recurrente el reconocimiento de que las situaciones de violencia en los hogares aumentaron durante los períodos de aislamiento social. Referentes y referentas de variadas ramas coincidieron en afirmar que la permanencia de mayor cantidad de horas en el hogar, la disminución de la circulación y de los vínculos extra domésticos, los problemas en los ingresos económicos y la profundización de consumos problemáticos ha exacerbado situaciones de violencia que eran preexistentes y se tornaron especialmente críticas en los casos en los que la víctima convive con el agresor. En efecto, estas afirmaciones coinciden con lo que han sostenido distintos análisis sobre el tema. Desde organismos como CEPAL (2021) ONU MUJERES (2020) y la CIM (2020) se ha advertido que la crisis del COVID-19 ha generado un repunte alarmante de la violencia de género a nivel mundial, debido entre otras causas a la convivencia con el agresor durante el confinamiento, a la reducción de los niveles de autonomía económica de las mujeres, el aumento de la discriminación a personas LGTBIQ y un crecimiento en los casos de ciberviolencia y ciberacoso. Distintos informes reconocieron que el aislamiento generó una serie de barreras en el acceso a servicios de atención para víctimas de violencia, las cuales se tornaron aún más críticas en los casos de mujeres en situación de vulnerabilidad (mujeres mayores, con discapacidad, con orientación sexual diversa, migrantes o habitantes de asentamientos informales, entre otros) (ONU MUJERES, 2020; CIM, 2020). A nivel local, los informes han revelado que durante la primera etapa del ASPO en 2020 se registró un aumento significativo en el número de denuncias realizadas a la línea 144, el cual ascendió un 39% durante los primeros 42 días de cuarentena con respecto al período anterior (MMGyD, 2020). Asimismo, de los datos de una encuesta realizada por la Unidad Coronavirus del CONICET en acción conjunta con el MMGyD, sobre la base de encuesta realizadas a 2274 mujeres se desprende un aumento del 84,6% en la percepción de las violencias de género (Bidaseca, Aracao, Brighenti y Ruggero, 2020).

En este contexto, las organizaciones de la economía popular dieron cuenta del desarrollo de una serie de acciones dirigidas a mitigar los efectos del aislamiento en las vidas de las mujeres y otras identidades feminizadas, desarrollando propuestas de abordaje territorial que se fueron tornando más sistemáticas a lo largo de la pandemia y que recuperan su experiencia acumulada en la prevención y acompañamiento de víctimas durante años previos.

En esta línea, se destacan dos conjuntos de iniciativas que emergieron como recurrentes en las distintas entrevistas realizadas:

- **c.1)** Generación de espacios formativos y de debate colectivo sobre temáticas vinculadas a la violencia de género y constitución de redes de promotoras de género.
- **c.2)** Desarrollo de estrategias de contención emocional y afectiva y distintas formas de acompañamiento a realizar denuncias y pedidos de protección ante la justicia.

c.1) Generación de espacios formativos y de debate colectivo sobre temáticas vinculadas a la violencia de género y constitución de redes de promotoras de género.

Una cuestión que ha resultado significativa como parte de las iniciativas populares desarrolladas para mitigar los efectos de la pandemia y la emergencia sanitaria ha sido el desarrollo de distintas instancias formativas y de debate colectivo en torno a la violencia de género, como forma de construir una respuesta integral y transversal a la problemática. En este sentido, muchas de las referentes territoriales que desarrollaban tareas de promoción de salud, ayuda alimentaria, o cuidado infantil, se han ido constituyendo como Promotoras o Referentes de Género o de Género y Diversidad. El surgimiento de redes de promotoras permitió fortalecer y visibilizar su trabajo previo de participación en acciones comunitarias dirigidas a prevenir e identificar situaciones de violencia de género, generando espacios de escucha y contención y acompañando el acceso a denuncias y medidas de protección. Las referentas de distintas organizaciones dentro de la rama de servicios socio comunitario han manifestado que el tema de la violencia de género constituyó un eje de debate y discusión dentro de plenarios y reuniones de sus espacios de trabajo y que las promotoras de salud y trabajadoras de postas sanitarias y comedores han ocupado un rol central en la prevención de la violencia y asesoramiento a las víctimas. En este sentido, dan cuenta de un trabajo de articulación entre distintas áreas de la rama de servicios sociocomunitarios, destacando que las postas sanitarias y comedores populares han venido funcionando como espacios desde los que se "canalizan" distintas problemáticas emergentes, entre las cuales la prevención de la violencia de género ocupó un lugar significativo. Asimismo, la recurrencia con la que nuestras entrevistadas mencionaron la acción de estas referentas en relación con el abordaje de la violencia de género como una tarea de relevancia, sintetizada bajo el nombre de "promoción de género", da cuenta de una apuesta por especializarse y profesionalizar su labor en esta dirección, reivindicando la urgente necesidad de que exista mayor cantidad de dispositivos territoriales descentralizados dedicados al tratamiento del tema.

c.2) Desarrollo de estrategias de contención emocional y afectiva y distintas formas de acompañamiento a realizar denuncias y pedidos de protección ante la justicia

Distintas organizaciones destacaron que han venido desarrollando una serie de acciones de acompañamiento a personas que se encuentran en situación de violencia, articulando en muchos casos con profesionales del ámbito de la salud mental y el derecho. En este sentido, una estrategia recurrente, mencionada por las ramas de servicios sociocomunitario, agricultura familiar y campesina, construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental y la rama de liberados, liberadas y familiares de detenidos/as-MTE-UTEP, ha sido la de brindar acompañamiento a la hora de concurrir a realizar denuncias en comisarías, fiscalías u otros organismos públicos, asesorando respecto de la realización de trámites tales como el pedido de medidas de restricción perimetral y otras medidas preventivas y de protección. En este sentido, los y las referentes consultados subrayaron que el desarrollo de estas formas de acompañamientos implicó tanto asesorarse jurídicamente, recurriendo a la colaboración de abogados y otros especialistas sobre el tema, como generar espacios de contención psicológica y emocional que resultaron fundamentales para dar lugar al pedido de ayuda y el acceso a medidas de protección. Distintas organizaciones, como el Movimiento Evita, la UTT, el MTE y el FPDS, destacaron que los frentes de mujeres o áreas de género dentro de las organizaciones venían funcionando como espacios de intercambio que tornaron posible que algunas mujeres se animaran a compartir situaciones de violencia que permanecían invisibilizadas. Las estrategias desarrolladas durante la pandemia recuperaron experiencias y saberes acumulados producto de un trabajo previo de acompañamiento afectivo y sostén emocional y de articulaciones con equipos interdisciplinarios que venía realizándose desde hacía tiempo.

En el marco de esta trayectoria, algunos entrevistados hicieron mención a la necesidad de articular esta lucha contra la violencia de género con otras demandas como el acceso a la vivienda y la necesidad de plantear políticas que recuperen la especificidad de distintos contextos, destacando las diferencias entre las condiciones de vida en el sector urbano y rural. Por último, vale la pena destacar que el asesoramiento jurídico y acompañamiento afectivo y emocional desplegado por estas organizaciones combinó distintas modalidades de trabajo, incluyendo tanto encuentros y charlas presenciales, como la generación de formas virtuales de comunicación mediante WhatsApp y otros servicios de telefonía móvil, los cuales, tanto en 2020 como en 2021 se tornaron esenciales como medios para sostener el trabajo territorial en los tiempos en que rigieron medidas de aislamiento y restricción a la circulación.

3. PROYECTOS ACTUALES Y APRENDIZAJES

El accionar de las organizaciones de la economía popular durante la pandemia puso en evidencia la capacidad de estas para (re)crearse y (re)organizarse para garantizar la sostenibilidad de la vida de quienes las integran. Los proyectos desarrollados por ellas, si bien resolvieron problemas coyunturales producidos por la pandemia, recuperan demandas de larga data del sector en torno a su reconocimiento como trabajadores y trabajadoras, poniendo en debate los modos en que se accede a la salud, al espacio público, las formas de producción y consumo,

el territorio, los cuidados. A modo de balance, los y las referentes señalaron que muchos de los proyectos que se iniciaron con el cambio de gobierno en 2019 y que se abrían en ese momento como nuevas posibilidades de transformación tras la gestión macrista, se vieron detenidos o truncados con el advenimiento de la pandemia. Sin embargo, esto no significó que las organizaciones quedaran detenidas, sino por el contrario continuaron trabajando, siendo las primeras en estar presente ante las necesidades que surgían en los territorios, (re)creando nuevas formas de enfrentar una realidad que afectó profundamente a los sectores populares y que incrementó las desigualdades. En este sentido, las organizaciones continuaron desarrollando una variedad de proyectos en relación con sus demandas más históricas. Entre ellos podemos mencionar: la apertura de nuevas cooperativas y polos productivos en las ramas de liberados, liberadas y familiares de detenidos/as y textil, ambas del MTE-UTEP, para la incorporación de nuevos trabajadores y trabajadoras. En la rama de servicios sociocomunitarios la apertura de nuevos espacios de niñez y cuidados, bachilleratos populares y espacios para la prevención de la violencia de género; y la creación de espacios de primera infancia y salud en la rama de construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental. Desde la rama rural del MTE asumieron el desafío de reconstruir la secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, la cual había quedado sin recursos debido a los recortes en el gasto público llevado adelante por la gestión del gobierno macrista. Desde el MNCI-Somos Tierra apostaron al desarrollo de nuevos lugares de comercialización. Por su parte, en el MNCI-Buenos Aires se apuntó al mejoramiento en los espacios de trabajo a través de inversión en invernáculos, sistemas de riego y gallineros. En las empresas recuperadas, la apuesta ha sido por fortalecer el desarrollo productivo, la inversión en maquinaria y mejorar nuevas líneas de producción de alimentos y productos textiles. Por último, la rama de trabajadoras y trabajadores del espacio público- Movimiento Evita-UTEP impulsó la creación de una distribuidora propia de productos. Esto representa la posibilidad de que los y las trabajadores puedan acceder a la compra de bienes para su posterior comercialización a precios que queden fuera de la especulación de terceros intermediarios. De esta forma, se avanza hacia el control propio de toda la línea de distribución y comercialización de productos para mejorar los ingresos de los y las trabajadores.

Capitulo 3. Los desafíos de la organización colectiva en la pandemia

3

María Paz Laurens, Santiago Sorroche, Lucio Fernández Mouján

Como señalamos en los capítulos anteriores, la pandemia provocó que la mayoría de las organizaciones de la economía popular debieran reorganizar las formas de trabajo y desarrollar nuevas modalidades de comercialización y producción. Esta situación también representó desafíos para el sostenimiento de las dinámicas organizativas y actividades de formación impulsadas por las organizaciones de la economía popular. Como mencionamos en el Método CITRA #5 (Fernández Álvarez, et. al. 2020), la virtualización de las actividades laborales, educativas y sociales para evitar los encuentros presenciales y así la propagación del virus supuso repensar las formas en las organizaciones de la economía popular sostenían los vínculos organizativos a través de asambleas, plenarios e instancias para el debate y la formación gremial, que hasta marzo de 2020 se realizaban casi exclusivamente de forma presencial.

En este capítulo desarrollamos los desafíos que implicó para las organizaciones sostener instancias de organización y formación teniendo en cuenta los cambios que produjeron las medidas sanitarias implementadas para mitigar la pandemia, que combinaron períodos de aislamiento y apertura; así como también las estrategias que implementaron las organizaciones para sortear las dificultades en cuanto a la falta de dispositivos y medios de conexión. A pesar de los obstáculos, los espacios de intercambio se sostuvieron de forma virtual durante el aislamiento, lo que permitió mantener las actividades de formación y construir vínculos entre las organizaciones a lo largo de todo el país. Las organizaciones pudieron retomar paulatinamente la formación interna y gremial de sus integrantes, al mismo tiempo que desarrollaron otras abordando temas como salud y género que se volvieron relevantes en el contexto de pandemia. Repensar y sostener instancias de organización y formación también permitió retomar la discusión de proyectos y avanzar en nuevas propuestas desde las organizaciones en búsqueda de una ampliación de derechos y mejoras en las condiciones de trabajo y de vida del sector. En muchos casos estas iniciativas se vieron retrasadas debido a las dificultades que produjo la pandemia, que se sumaron a las que ya habían causado las políticas regresivas del gobierno de la coalición

Cambiemos. En un segundo momento, analizamos las propuestas e iniciativas que las organizaciones vienen trabajando y abren la posibilidad de proyectar(se) a futuro. Estas recuperan demandas en torno a problemáticas surgidas en el contexto de pandemia y otras de más larga data. Cabe señalar que algunos de estos proyectos permitieron el avance en la diagramación y proyección de nuevas políticas públicas cogestionadas que se encuentran en fase de implementación o de discusión para su puesta en funcionamiento. Lejos de ser cuestiones cerradas, estas propuestas se encuentran en desarrollo, mientras buscan dar soluciones a problemáticas nuevas y antiguas que enfrenta al sector de la economía popular.

1. INICIATIVAS PARA SOSTENER LA ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

La incorporación del uso de tecnologías digitales fue fundamental para mantener la comunicación, difundir información y sostener espacios de intercambio y formación. Sin embargo, esto no estuvo exento de dificultades en cuanto a la falta de conectividad, la poca disponibilidad de medios tecnológicos como notebooks, tablets y computadoras y las dificultades para el uso de estos. Las organizaciones desarrollaron habilidades y estrategias para incorporar los medios virtuales de comunicación, como el uso compartido de dispositivos, la compra en conjunto de paquetes de datos para la conexión, la enseñanza entre integrantes de organizaciones sobre su uso, entre otras. Con el progresivo levantamiento de las restricciones y habilitación de actividades sobre todo durante 2021, las organizaciones fueron retornando a la presencialidad realizando encuentros en grupos reducidos y respetando los protocolos sanitarios correspondientes. Además, continuaron utilizando de forma alternada los medios virtuales para mantener la comunicación y construir vínculos con espacios ubicados en diferentes puntos del país y acompañar procesos organizativos más recientes.

Respecto a las iniciativas para sostener las dinámicas organizativas y de formación señalamos dos aspectos centrales:

- a) utilización de medios virtuales para la comunicación y difusión de información, virtualización de instancias organizativas (asambleas, plenarios, reuniones) para sostener el intercambio, debate y la construcción de acuerdos; regreso progresivo a la presencialidad cumpliendo protocolos sanitarios.
- b) virtualización de instancias de formación interna y gremial y desarrollo de capacitaciones sobre salud, género, oficios y temáticas específicas a cada rama de actividad y regreso progresivo a la presencialidad cumpliendo protocolos sanitarios.

a) Utilización de medios virtuales para la comunicación y difusión de información, virtualización de instancias organizativas para sostener el intercambio, debate y la construcción de acuerdos

Sin lugar a duda, una de las principales transformaciones que trajo la pandemia en el funcionamiento cotidiano de las organizaciones fue la incorporación de medios y herramientas digitales de comunicación. Los y las referentes entrevistados señalaron que la utilización de grupos de *WhatsApp* y redes sociales fue fundamental para mantener la comunicación y difundir información, ya sea sobre cuestiones organizativas internas como también sobre cuestiones generales referidas a la pandemia: protocolos y recomendaciones sanitarias, medidas acerca de las restricciones a la circulación, campaña de vacunación, etc. También señalaron que la utilización de esas plataformas fue de suma importancia para difundir y visibilizar el trabajo y las acciones que los y las trabajadores llevaron adelante durante la pandemia a través de publicaciones, comunicados y videos. La incorporación de los medios virtuales de comunicación para la realización y desarrollo de asambleas, reuniones y plenarios ha sido un aspecto común señalado por todas las organizaciones. La utilización de plataformas de comunicación virtual fue esencial para sostener instancias de comunicación, encuentro y debate tanto hacia adentro de las organizaciones como con otras y mantener reuniones con otros actores como funcionarios estatales, judiciales, universidades, etc. También se utilizaron para coordinar grupos de trabajo, actividades productivas y de comercialización.

Sin embargo, la incorporación de la virtualidad trajo aparejada nuevas dificultades y potencialidades al funcionamiento cotidiano de las organizaciones. Una de las principales dificultades señaladas por la mayoría de las organizaciones está vinculada, por un lado, al acceso a conectividad ya que la falta de señal de internet en algunas regiones, especialmente en zonas rurales, y el costo que implica el acceso a los datos móviles para la conexión por celular representaron un problema para la dinámica cotidiana de las distintas ramas de la economía popular entrevistadas. Por otro lado, la falta de dispositivos como computadoras, notebooks y tablets en cantidades y condiciones adecuadas también fue otra problemática señalada. En muchos casos, los y las integrantes de las organizaciones debían compartir los celulares o computadoras con sus hijos e hijas superponiendo las actividades organizativas con las tareas escolares.

Las organizaciones desarrollaron una serie de estrategias para paliar los problemas de conectividad y garantizar la comunicación. En primer lugar, cabe destacar que muchos espacios no contaban previamente con conexión a internet, por lo que la urgencia de la situación ante la necesidad de mantener la comunicación hizo que tuvieran que asumir por sus propios medios los costos de obtener los servicios de internet. Desde los espacios de las organizaciones se pusieron a disposición tanto computadoras y celulares como la conexión de internet para que los y las integrantes se conectaran y participaran de las reuniones y/o asambleas virtuales. Por ejemplo, desde la rama de agricultura familiar y campesina señalaron que, debido a las grandes dificultades para la conexión por tratarse de zonas rurales alejadas de centros urbanos, utilizaron la radio comunitaria para transmitir avisos y mantener la comunicación y se compraron paquetes de datos que dis-

tribuyeron en las casas de cada familia. Las organizaciones también ayudaron a realizar todo tipo de trámites virtuales como el DNI, monotributo social, permisos de circulación, inscripciones para la vacunación, etc. Cabe mencionar que la rama de empresas recuperadas fue la única que no señaló dificultades de conectividad, dado que todos los espacios de trabajo contaban con señal inalámbrica de internet previamente a la pandemia.

Pese a estas dificultades, algunos referentes y referentas han señalado aspectos positivos de la incorporación de la virtualidad como la posibilidad de construir vínculos y acompañar espacios que comenzaban sus procesos organizativos y así como mantener intercambios y comunicación con aquellos que se encuentran en diversos puntos del país, fortaleciendo de esta forma, la organización a nivel regional y/o federal. Tal como señalan desde FECARA:

> Hay compañeros que están en el municipio, y en municipios chicos ni siquiera tienen cartoneros, pero hay muchos desocupados, entonces a la distancia estamos formándolos para ver cómo pueden empezar a trabajar y cómo se lo pueden plantear al municipio. Todo esto nos permite socializar lo que vamos haciendo. (Referente de FECARA)

Con el progresivo levantamiento de las restricciones, las organizaciones retornaron a la realización de asambleas y reuniones presenciales, lo cual implicó una redistribución de tareas, roles y organización de grupos en burbujas para cumplir con los protocolos sanitarios correspondientes. La posibilidad de incorporar las plataformas y medios virtuales fue gracias a la acción de las organizaciones, que debieron en un corto período de tiempo (re)organizar las actividades y dinámicas organizativas tal y como las venían desarrollando previo a marzo de 2020, así como también volver a adaptarlas a la progresiva vuelta a la presencialidad, según fueron indicando las medidas sanitarias durante 2021. Con esto queremos señalar que no fueron por sí solos los medios tecnológicos y plataformas virtuales los que garantizaron la continuidad de la comunicación, sino que fue posible gracias al accionar de los y las trabajadores de la economía popular. La incorporación de la virtualidad implicó un proceso de aprendizaje que se fue desarrollando entre los mismos trabajadores y trabajadoras, adaptándola a las dinámicas cotidianas de cada espacio. Sin embargo, como ya fuimos mencionando, la pandemia puso en evidencia las desigualdades en cuanto al acceso tanto a los medios digitales como a la conexión virtual en los barrios populares por lo que resulta necesario desarrollar y profundizar políticas públicas que garanticen la conectividad para estos sectores.

b) Virtualización de instancias de formación interna y gremial y desarrollo de capacitaciones sobre salud, género, oficios y temáticas específicas a cada rama de actividad y regreso progresivo a la presencialidad cumpliendo protocolos sanitarios

Tal como señalan los y las entrevistados la irrupción del virus provocó la suspensión instantánea de las actividades de formación en todas las ramas de la economía popular.

En el período inicial, las acciones se orientaron a resolver las situaciones de urgencia, relacionadas sobre todo a la asistencia alimentaria y en los espacios de trabajo debido a la suspensión de actividades. Paulatinamente, a medida que estas cuestiones se fueron ordenando, las organizaciones comenzaron a utilizar medios de comunicación virtual para retomar las actividades de formación suspendidas y/o implementar nuevas. Estas instancias abarcaron tanto cuestiones referidas a dinámicas de organización interna y formación gremial y organizativa, así como también a cursos y talleres sobre salud, género, oficios y temáticas específicas correspondientes a cada rama. Desde la rama de servicios sociocomunitarios se generaron instancias de capacitación sobre salud para promotoras territoriales en las que se transmitieron las cuestiones en relación con la prevención del virus COVID-19: medidas de cuidado e higiene, protocolos de acción e intervención ante contactos estrechos y contagios, asistencia a personas aisladas, etc. Particularmente, dentro de esta rama el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie llevaron adelante la Diplomatura en Cuidados Integrales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y orientada a personas que participan del programa Potenciar Trabajo, generando instancias formativas en relación con tareas de cuidados de personas mayores, niños y niñas y personas con discapacidad, teniendo como objetivo la promoción del trabajo socio comunitario. En los espacios de niñez de la organización FAR, se realizaron talleres sobre cuidado de la salud mental y física en tiempos de confinamiento, género y ESI.

Desde la rama de liberados, liberadas y familiares de detenidos/as del MTE-UTEP señalaron que desarrollaron cursos virtuales de formación gremial para referentes y referentas de todo el país a través de la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular (ENOCEP). Esta escuela de formación es una iniciativa de la Secretaría de Formación de la UTEP con el objetivo de dictar cursos de economía popular y organización comunitaria para la formación de dirigentes y militantes e integrantes de organizaciones comunitarias, sindicales y unidades de producción abordando temas como el desarrollo del sistema capitalista, la historias de los movimientos sociales y problemáticas del mundo del trabajo. A su vez, realizaron cursos de formación en oficios como herrería, construcción, serigrafía, gastronomía y textil en los polos productivos, los cuales se desarrollaron en un primer momento de forma virtual y luego de forma presencial en espacios al aire libre y con protocolos de distanciamiento. Estos cursos fueron dictados por liberados y liberadas con conocimientos técnicos en los oficios, reconociendo su labor como formadores y con el objetivo de capacitar e incorporar a personas recientemente liberadas a las cooperativas de trabajo.

Las empresas recuperadas destacaron las capacitaciones realizadas en articulación con el INAES sobre comercio digital, administración y asesoramiento para la realización de trámites de cooperativas de forma virtual, y capacitaciones internas sobre cooperativismo. Desde el MNER señalaron que continuaron la enseñanza de forma virtual en el bachillerato popular que se ubica en la planta de trabajo y el dictado de la materia Territorio Educativo en el Centro Universitario San Martín (CUSAM), un espacio educativo creado por la Universidad Nacional de San Martín en la Unidad Penal N° 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). De forma similar, FECUTRA realizó capacitaciones a

personas privadas de su libertad y sobre venta digital a las cooperativas que integran la federación. Dentro de esta misma rama, la FACCyR realizó formaciones virtuales sobre política gremial, separación de reciclables a cartoneros/as de otras localidades y talleres de promoción ambiental.

Los y las referentes entrevistados de la rama de agricultura familiar y campesina dieron cuenta de dos tipos de formaciones realizadas, primero dictadas de forma virtual y luego presencial respetando protocolos de distanciamiento. Por un lado, aquellas vinculadas a la producción agroecológica, cuidado de la tierra y soberanía alimentaria; y por otro, aquellas sobre abordaje y prevención de la violencia de género. El MOCASE-VC reorganizó la modalidad de dictado de las escuelas de agroecología para dictarla de forma itinerante, es decir, fueron rotando las clases por las quintas en las cuales trabajan las familias de pequeños productores para sostener la formación. Las organizaciones textiles realizaron cursos para la venta online y desarrollaron talleres sobre la formación de precios y cálculo de costos y la confección de fichas técnicas en articulación con universidades. La rama de trabajadoras y trabajadores del espacio público- Movimiento Evita-UTEP generó espacios de formación interna y sobre protocolos de prevención y correcto uso de los elementos de protección para el desarrollo de forma segura de la actividad laboral y el cuidado de la salud de los vendedores y sus clientes. Por su parte, la UOLRA realizó formaciones semanales sobre la conformación del sindicato de ladrilleros y la historia del movimiento obrero en articulación con la Universidad del Salvador.

2. PROYECTAR(SE) A FUTURO

La crisis generada por la pandemia profundizó desigualdades y produjo nuevas problemáticas que afectaron a los sectores populares. Las organizaciones no respondieron solamente a la urgencia que impuso la pandemia, sino que también sostuvieron, retomaron y propusieron proyectos que buscan ampliar los derechos y mejorar las condiciones de vida de los y las trabajadoras de la economía popular. Estas propuestas generadas desde la experiencia vivida de las organizaciones aportan elementos que son relevantes a la hora de construir una agenda pospandemia que incorpore las propuestas y demandas de las organizaciones en la elaboración e implementación de políticas para la economía popular. En base a las entrevistas realizadas, podemos agrupar los proyectos a futuro de las organizaciones en tres categorías:

- **a)** proyectos e iniciativas para el desarrollo de líneas de producción sustentables y nuevas formas de comercialización, implementación de mejoras productivas; creación de espacios de cuidados.
- **b)** proyectos y propuestas para ampliar instancias formativas gremiales y mejora de procesos productivos.
- **c)** proyectos en co-gestión con el estado, programas y políticas públicas para el mejoramiento de las condiciones del sector.

a) Proyectos e iniciativas para el desarrollo de líneas de producción sustentables y nuevas formas de comercialización, implementación de mejoras productivas; creación de espacios de cuidados

Las organizaciones impulsaron proyectos e iniciativas para mejorar y fortalecer los espacios y procesos productivos, así como también desarrollar nuevas líneas de producción y comercialización. Estas propuestas abrieron la posibilidad de repensar las formas en que se produce y se genera valor en los procesos productivos. Muchas organizaciones propusieron desarrollar procesos productivos sustentables que, al mismo tiempo, permitían incorporar a más trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo. En este sentido, podemos mencionar las propuestas de la FECUTRA con el desarrollo de carbón ecológico y la fabricación de bolsas de nylon desde la FACCyR, ambos procesos a partir de materiales reciclados. La rama de liberados, liberadas y familiares de detenidos/as del MTE avanzó en el establecimiento de la primera planta de tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) de la provincia de Buenos Aires en articulación con el municipio de Pilar. Con la creación de esta planta productiva, por un lado, aportan a la disminución del impacto ambiental ocasionado por el descarte de los residuos electrónicos, a partir de los cuales se reciclan materiales y se fabrican nuevos aparatos y dispositivos, y al mismo tiempo, permite generar nuevos puestos de trabajo para personas que han estado detenidas y que por sus antecedentes penales tienen muy pocas –o casi nulas- posibilidades de ser incorporados en un empleo formal.

Los cambios e impactos que trajeron las restricciones y la centralidad que cobró el abastecimiento de alimentos llevaron a que las organizaciones plantearan iniciativas para fortalecer la producción y comercialización. En este sentido, las empresas recuperadas -FACTA- impulsaron el fortalecimiento de una red de cooperativas de polos productivos concentrados en los cinturones de las ciudades, replicando experiencias como la del Mercado Central. Al mismo tiempo, buscaron desarrollar procesos de producción y comercialización con cercanía al consumidor, lo que derivó en la reducción de costos logísticos permitiendo el abaratamiento de los precios. Referentes de FEDECABA ha señalado la necesidad de fortalecer las empresas recuperadas que producen alimentos, principalmente los frigoríficos. Las organizaciones de la rama de agricultura familiar y campesina han propuesto la apertura de espacios de comercialización en centros urbanos, de modo de poder vender la producción de forma directa eliminando intermediarios. FECUTRA propuso el desarrollo de huertas para garantizar alimentos más sanos y accesibles para los y las trabajadores que forman parte de la organización. La rama de trabajadoras y trabajadores del espacio público- Movimiento Evita -UTEP se encuentra trabajando en propuestas que apunten a la mejora de las condiciones de trabajo, particularmente de los y las vendedores "manteros" que sufren un gran desgaste físico debido a las grandes cargas de mercaderías que soportan sus cuerpos en el desarrollo de su actividad diaria. En este sentido, plantearon la necesidad de conseguir elementos e insumos de protección como fajas lumbares y carros para el traslado de la mercadería. Otros proyectos a futuro fueron la ampliación y apertura de nuevos

espacios de trabajo. Al respecto, el FPDS propuso la construcción de polos textiles, la realización de obras para la rama de construcción y el desarrollo de una sala dedicada a la agroindustria, que permita disputar la venta de la producción.

Como hemos venido señalando a lo largo del presente informe, la pandemia puso en evidencia la centralidad de los cuidados y muchas organizaciones comenzaron a proyectar la construcción de espacios destinados a resolver esa necesidad. Esto fue destacado por la rama de trabajadoras y trabajadores del espacio público- Movimiento Evita -UTEP, ACTRA y por el FPDS que proyectan la construcción de espacios en los cuales los y las trabajadores puedan dejar a sus hijos e hijas as mientras realizan su jornada de trabajo y proponen, además, que sean también espacios de recreación y de formación en ESI. A su vez, el FPDS ha propuesto la creación de un espacio de "juventud y cultura" para generar espacios de articulación con las familias. De esta manera, no sólo consideran relevante la resolución de problemáticas referidas al trabajo sino también a la vida familiar, los cuidados y la contención de los/as jóvenes quienes en los barrios son perseguidos por la policía o se enfrentan a otros riesgos como el narcotráfico.

b) Proyectos y propuestas para ampliar instancias formativas gremiales y mejora de procesos productivos

Los y las referentes de las organizaciones de la economía popular han destacado como algo sumamente relevante ampliar y fortalecer las instancias de formación, tanto para cuestiones organizativas y gremiales, como aquellas orientadas a contenidos técnicos para mejorar los procesos productivos y comerciales. En este sentido, FECARA señaló la necesidad de articular con universidades para analizar el funcionamiento de las empresas recuperadas y avanzar en mejoras en la producción. El FPDS señaló la importancia de implementar formaciones orientadas a la construcción y técnicas de obra, administración, y ventas desde la perspectiva de la economía popular. La FACCyR señaló que ha trabajado en un curso tendiente a la mejora del uso y mantenimiento de las maquinarias de las plantas de reciclado, que resolvería los inconvenientes surgidos en el proceso de trabajo sin tener que recurrir a la contratación de servicios a terceros. Por último, el MNCI Buenos Aires destacó su trabajo en pos de cursos de alfabetización para adultos para resolver los bajos niveles de escolarización de sus integrantes.

c) Proyectos en co-gestión con el estado, programas y políticas públicas para el mejoramiento de las condiciones del sector

En vinculación con el estado, las organizaciones avanzaron en el desarrollo de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida del sector de la economía popular. En el caso de la rama de agricultura familiar y campesina lograron incorporar trabajadores y trabajadoras en la dirección de comercialización de la Secretaría de Agricultura de Familias Campesinas-Indígenas de la Nación y avanzaron en el relanzamiento

del Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF). Este programa es de relevancia para tener un conocimiento del sector desde las experiencias de los y las trabajadores. A su vez, lanzaron el Programa Nacional de Comercialización que busca acercar a los pequeños productores rurales con los consumidores, evitando así la participación de intermediarios. De esta forma, apuntan a resolver uno de los principales problemas que afronta esta rama ya que los precios se multiplican al momento de llegar al consumidor. Al mismo tiempo, se empezó a desarrollar el Programa de Trabajo y Arraigo Rural que busca detectar tierras fiscales sin uso para que las mismas puedan ser utilizadas para la producción, evitando que las y los trabajadores del sector paguen arrendamientos elevados que terminan significando uno de los mayores costos de producción.

De forma similar, los y las referentes de las empresas recuperadas destacaron la comercialización como un problema recurrente y por esto buscaron la posibilidad de articular las compras y ventas con entidades privadas o a través de la Dirección de Empresas Recuperadas dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. A su vez, lograron que trabajadores y trabajadoras integren la comisión de empresas recuperadas en el INAES. En articulación con esta misma institución, FEDECABA desarrolló el programa "Doble Impacto", cuyo objetivo es a través del comercio *online* promover la compra y venta inter-cooperativas, generando un catálogo digital para quienes forman parte de la federación. La rama de liberados, liberadas y familiares de detenidos/as del MTE-UTEP participó junto a otras organizaciones del sector en la conformación de la Mutual de Liberados en el INAES, un espacio de articulación de diversas cooperativas y organizaciones de liberados para la realización de formaciones en oficios en unidades penitenciarias, provisión de servicios de salud, y asistencia productiva entre otros.

En el marco de la gestión de políticas conjuntas, varias organizaciones mencionaron que siguen apostando a completar el ReNaTEP, que lleva más de 3 millones de trabajadores inscriptos de forma virtual y voluntaria. Algunas organizaciones, como las trabajadoras y trabajadores del espacio público- Movimiento Evita -UTEP organizaron jornadas de inscripción en los territorios. En la rama de construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental, las organizaciones han proyectado la articulación con diferentes ministerios que, conjuntamente con los equipos técnicos y de trabajo, les permita planificar obras de mejoramiento barrial como redes cloacales y mejoras habitacionales.

Capítulo 4. La actuación sanitaria de las organizaciones en la pandemia

4

Lautaro Chamorro y Verónica V. Puricelli

En el marco de las normativas desarrolladas por el poder ejecutivo nacional, durante abril y mayo de 2020 se lanzaron dos programas denominados "El barrio cuida al barrio" y "DETeCTAr", que se extendieron durante 2021. El primero fue diseñado en articulación con las organizaciones y municipios; su principal objetivo fue el fortalecimiento del trabajo de las y los promotores comunitarios. Sus tareas estuvieron vinculadas principalmente a recorridas barriales y a la identificación de quienes se encontraban dentro de grupos de riesgo. El "DETeCTAr" se orientó a la búsqueda activa de personas con síntomas compatibles con el COVID-19 y a facilitar el testeo en unidades móviles sanitarias.

Las y los entrevistados mencionaron su participación en el programa "El barrio cuida al barrio" que fortaleció los equipos de promotoras de salud y permitió el desarrollo de diversas actividades barriales como controles rutinarios de salud y mesas de información acerca de los centros de salud y hospitales más próximos. Esto no implicó que las organizaciones que no formaran parte del programa no realizaran esas mismas tareas (creación de comisiones de salud por barrio, tareas de relevamiento y acompañamiento individual). Asimismo algunos entrevistados y entrevistadas radicados en la ciudad de Buenos Aires mencionaron su participación en "Comités de crisis barriales" junto a funcionarios públicos, espacios comunitarios, representantes de la iglesia católica y, eventualmente, del gobierno nacional. El objetivo de estos espacios fue intercambiar toda la información disponible en torno al COVID-19 y planificar acciones coordinadas que permitiesen dar respuestas a las situaciones emergentes. También abordaron la prevalencia de otras enfermedades, como el dengue, y se desarrollaron estrategias de prevención.

Frecuentemente, los/as entrevistados/as se han referido al Estado en relación con sus intervenciones como por la falta de éstas. Al mismo tiempo, el trabajo de las organizaciones consistió en dar una respuesta rápida a las problemáticas emergentes, gestionando en paralelo al Estado y sus dispositivos de atención médica. En otros casos, esta labor consistió en reclamar y confrontar con el Estado como estrategia de intervención, como ha sido el caso de las trabajadoras socio comunitarias. En todos los casos, estas

intervenciones se orientaron hacia tres dimensiones de problemáticas a enfrentar: 1) el diseño, implementación, comunicación y cumplimiento de los protocolos de cuidado; 2) el trabajo y la lucha por mejorar el acceso a la salud en los barrios, y 3) con la campaña de vacunación.

1. PROTOCOLOS DE CUIDADO

En primera instancia, abordaremos el desarrollo de los protocolos de cuidado implementados frente al COVID-19. En esta línea, las organizaciones fueron adoptando, por un lado, los cuidados básicos ampliamente conocidos (uso de barbijo, distanciamiento social, limpieza y sanitización de manos y superficies) como así también medidas específicas, en función de las características de los espacios y de las actividades o ramas de trabajo dentro de la economía popular. En tal sentido, resulta ineludible resaltar el papel que cumplieron las trabajadoras de las postas de salud instaladas a partir del programa "El barrio cuida al barrio", quienes salieron a recorrer los barrios para transmitir la importancia de los cuidados y funcionar como primera línea de referencia comunitaria en torno a la situación sanitaria. Esto aparece dentro de los aspectos resaltados por los y las entrevistadas, considerando un contexto en el cual muchas instituciones públicas y privadas se encontraban cerradas y donde la permanencia de las mesas informativas barriales fue clave para poder canalizar la atención de la gente que exigía la crisis.

Una de las tantas tareas a las que se abocaron los equipos de las postas fue el relevamiento de enfermedades y la presencia de comorbilidades en la comunidad. Es importante destacar que estos relevamientos tuvieron la finalidad de proteger o *guardar* –en palabras de las y los mismos entrevistados– a las y los compañeros que, frente a las progresivas aperturas y habilitaciones para retornar a los espacios de trabajo, debían seguir evitando exponerse al virus. En más de un testimonio se hace mención a la complejidad que supuso esta situación, ya que muchas y muchos compañeros se resistían a dejar de trabajar tanto por cuestiones económicas, pero también por lo que representa el trabajo en términos personales y de lucha y conquista de derechos, ya que en muchos casos el ingreso económico estaba garantizado. En ese sentido, un entrevistado comenta:

> ...había compañeros que no podían venir porque tenían familiares con comorbilidades, pero la realidad es que todos querían venir a trabajar, para nosotros el trabajo es parte de la lucha y parte de la vida y bueno, como nos costó generar esta forma, esta profesión, venimos contentos a trabajar. (Referente de FECARA)

En la medida en que los/as trabajadores/as de las distintas ramas de la economía popular fueron retornado a sus actividades -en función de las progresivas aperturas que se iban definiendo tanto desde el gobierno nacional como desde los gobiernos provinciales y locales- las distintas organizaciones elaboraron protocolos que luego

debían ser evaluados y aprobados por entidades jurisdiccionales u otros organismos públicos. En este sentido, la organización de ladrilleros UOLRA remarcó que debieron elaborar un protocolo para conseguir la habilitación de la actividad ladrillera, destacando la novedad que el estado haya propiciado la confección de dos protocolos alternativos, según si la actividad era desarrollada en empresas privadas o en el marco de la economía popular. Un ejemplo es la disposición del Gobierno de Entre Ríos, que desde 2012 había promulgado la Ley N° 10.151 de Economía Social, donde se definían las líneas de trabajo específicas, por parte de la provincia y los municipios, para promover y garantizar el trabajo entendido dentro de dicho universo. En otros casos, las y los referentes de las organizaciones indicaron que trabajaron en un proceso de elaboración conjunta, destacando el apoyo de profesionales y/o funcionarios pertenecientes a diversas instituciones y organismos públicos. Al respecto, el secretario de la Federación ACTRA mencionó la fuerte articulación con la responsable de la Secretaría de Salud del municipio de Pigüé donde está ubicada su cooperativa textil. En este caso, como parte de ese trabajo conjunto, se realizaron capacitaciones, charlas informativas y control interno del uso de barbijos y de alcohol en gel. Una referenta de la rama de agricultura familiar y campesina destacó lo siguiente:

> Armamos nuestro propio protocolo interno y también teníamos que respetar los protocolos de comercialización, que lo pudimos armar con los profesores de la UNAB, con el INTA y SENASA también, porque tenemos animales, entonces recurrimos a ellos y al municipio para que sea un protocolo oficial. (Referenta MNCI-Buenos Aires)

Asimismo, mencionó que había una diferencia entre un *protocolo oficial* y el *interno*, dado que el cumplimiento del primero era condición necesaria para circular con la mercadería y vender los productos, mientras que el segundo implicaba una decisión consensuada, desarrollada al interior de la organización y orientada a garantizar el cuidado en los distintos espacios de trabajo como quintas y galpones.

Ahora bien, este proceso de adopción de los protocolos de cuidado no fue igual para todos los casos: algunos/as referentes de ciertas ramas expresaron una rápida y estricta asimilación de dichos protocolos, mientras que en otros dieron cuenta de un proceso de insistencia y concientización para poder convencer a sus compañeros/as sobre la importancia de las medidas sanitarias propuestas. Si se lo analiza comparativamente en relación con lo que sucedía en los primeros meses de pandemia en 2020, encontramos que sucede algo similar respecto del sostenimiento de los cuidados al momento del relevamiento en agosto de 2021. En este sentido, una de las entrevistadas, integrante del MNER, comentó lo siguiente:

> Hoy seguimos en todas nuestras unidades productivas manteniendo los recaudos, en su momento en 2020 tuvimos que hacer todos los protocolos y demás que se exigían a nivel municipal para poder funcionar, los hicimos y hoy como todo lo que está sucediendo, de a poco se van bajando los niveles de restricciones, pero sí seguimos sosteniendo fuertemente temas de cuidado entre nosotros y nosotras. (Integrante del MNER)

Gran parte del trabajo de concientización y comunicación acerca de la necesidad del cumplimiento correcto de los protocolos fue realizado por las promotoras de salud, bajo la órbita del programa "El barrio cuida al barrio", como también desde las comisiones de salud y los espacios socio comunitarios de cada barrio. Estas medidas no fueron tarea exclusiva de las personas implicadas en áreas específicas de salud, sino que se trató de objetivos comunes como la promoción de la desinfección de las superficies, asegurar el distanciamiento y el correcto uso del tapabocas.

En espacios productivos y de manipulación de alimentos, las y los entrevistados hicieron referencia al mutuo control en cuanto al uso correcto del barbijo. En una entrevista a una responsable de una olla popular en el Barrio Fátima en la ciudad de Buenos Aires e integrante de La Garganta Poderosa comentó que, además del control de temperatura y la limpieza de los espacios, usaban barbijos descartables que cambiaban periódicamente intensificando así el cuidado. Al respecto, resulta de particular interés la estrategia que encontraron los trabajadores de una cooperativa de reciclado asociada a FECARA: el entrevistado señala que el hecho de haber personalizado los tapabocas con el nombre de la cooperativa produjo el deseado efecto de que el resto de los trabajadores lo usaran con entusiasmo y de manera continua.

En síntesis, podemos señalar que, más allá de que muchos testimonios refieren a procesos iniciados en 2020, durante 2021 los protocolos de cuidado contra la COVID-19 siguieron estando en el centro de la escena en los barrios y espacios de trabajo. A lo largo de las entrevistas se observa un amplio grado de conocimiento de los protocolos, como así también un amplio repertorio de estrategias para lograr que éstos sean bien implementados. En cuanto a su vínculo con el estado, en algunos casos estuvo caracterizado por la evaluación y control de los protocolos por parte de organismos estatales, mientras que en otros proveyó de recursos e insumos, así como capacitaciones y otras instancias de acompañamiento. En términos generales, la gran mayoría de los/as trabajadores/as e integrantes de las organizaciones -más allá del rol que desempeñaban- estuvieron comprometidos/as y dedicados/as al diseño, implementación y comunicación de protocolos por distintos canales, así como en el sostenimiento de los cuidados.

2. ACCESO A LA SALUD

En este apartado abordamos el acceso que tuvieron las personas a la atención médica y las distintas estrategias que se dieron las organizaciones, incluyendo la pandemia de la COVID-19 pero también al acceso a la salud de quienes estaban atravesando otras enfermedades y debían continuar con sus tratamientos médicos. Como hemos mencionado anteriormente, en la mayor parte de los casos las organizaciones formaron parte del programa "El barrio cuida el barrio" y, en los casos que no,enmarcaron sus actividades en este programa, igualmente desarrollaron comisiones de salud y equipos específicos para la realización de este tipo de tareas.

A partir de las entrevistas realizadas identificamos dos ejes principales vinculados al acceso de la salud y las iniciativas desarrolladas por las organizaciones sociales en articulación con otros actores sociales:

- **a)** Estrategias de prevención y acompañamiento a quienes habían estado expuestos/as a la COVID-19
- **b)** Estrategias de acompañamiento a quienes padecían alguna enfermedad crónica o situación de salud no emparentada con la COVID-19

a) Estrategias de prevención y acompañamiento a quienes habían estado expuestos/as a la COVID-19

En cuanto a las acciones preventivas, un aspecto señalado en la mayoría de las entrevistas fue una significativa afluencia de información vinculada a la pandemia de carácter poco confiable o erróneo respecto de la COVID-19 y sus tratamientos. Por este motivo, las organizaciones prestaron especial atención a las estrategias comunicacionales a fin de transmitir información corroborada, fiable y que llevara tranquilidad a la comunidad. En este contexto, se propusieron la conformación en cada territorio de un cuerpo de promotoras comunitarias y/o comisiones de salud, desde donde difundían activamente información elaborada por los organismos estatales.

Al mismo tiempo, coordinaron acciones entre los centros de atención primaria, las organizaciones sociales y espacios de trabajo. Uno de sus objetivos fue fortalecer la comunicación entre los distintos actores sociales en pos de participar de manera conjunta en campañas de asistencia sanitaria y proveer información actualizada respecto de cambios o eventualidades del sistema de salud. La participación en "El barrio cuida el barrio" y de los operativos del programa "DETeCTAr" dio lugar a un trabajo coordinado entre las organizaciones, los trabajadores y los profesionales de la salud. En el marco de estos programas, se realizaron visitas domiciliarias en pos de recopilar información sobre las problemáticas de salud preexistentes, el acceso a recursos de higiene básicos y las necesidades de cuidado más específicas. Con esta información las organizaciones planificaron formas de acompañamiento de carácter personalizado, que luego fueron puestas en común con las instituciones de salud circundantes.

Asimismo, las organizaciones realizaron seguimientos telefónicos hacia quienes cursaban la enfermedad o debían estar aislados de forma preventiva. Este seguimiento permitió conocer cómo estaban atravesando la afección y si requerían algún tipo de asistencia, ya sea médica, alimentaria, de higiene u otro tipo. El trabajo de las comisiones de salud y los equipos de promotores y promotoras comunitarias permitieron contener el avance de los contagios durante los dos años de pandemia y especialmente durante los primeros meses. En la mayor parte de 2020, los esfuerzos de las organizaciones estuvieron vinculados prioritariamente al relevamiento territorial de enfermedades crónicas y al desarrollo de tareas de prevención y contención en torno a dicha enfermedad.

b) Estrategias de acompañamiento a quienes padecían alguna enfermedad crónica o situación de salud no emparentada con la COVID-19

Durante la pandemia, las organizaciones sociales y comunitarias tuvieron un lugar central en la atención preventiva y el cuidado de la salud de los/as trabajadores/as de la economía popular. Las estrategias desplegadas no sólo estuvieron orientadas a la COVID-19, sino que buscaron construir respuestas ante otras cuestiones de salud, como las enfermedades crónicas y el seguimiento de tratamientos médicos en otras especialidades médicas. En todos los casos, se procuró fortalecer la articulación con los centros de atención primaria a fin de que los y las profesionales de la salud pudieran hacer un seguimiento personalizado y garantizar el acceso a los tratamientos correspondientes. Sin embargo, la articulación fue construida conjuntamente entre las organizaciones y las instituciones públicas. En algunos casos, esta articulación estuvo sujeta a voluntades individuales más que a políticas institucionales, por lo cual las actividades realizadas se asociaron fuertemente a las particularidades de cada territorio. Tal como explicó una de las entrevistadas:

> En algunos casos nos pasó de que el director de la sala se sume a los operativos de "El barrio cuida al Barrio". Entonces recorría con nosotros el barrio, brindaba información. En esos casos fue recontra positivo porque era el médico director de la sala acoplándose a una acción más territorial. En otros casos no sucedía eso, pero intentábamos vincularnos. Siempre tener un vínculo salita/organización como para evacuar dudas, tener información, gestionar alguna situación de gravedad. En eso siempre dependiendo de los profesionales y las voluntades, pero siempre de alguna manera ser mediadores de la sala y de la gente del barrio. (Referente de la Rama sociocomunitaria - Movimiento Evita)

Asimismo, las organizaciones coordinaron estrategias de recolección y reparto de alimentos, productos de higiene, medicamentos y otros productos esenciales para quienes estuvieran aislados. Este tipo de asistencia no sólo estuvo orientada a quienes transitaban los síntomas provocados por el virus COVID-19; también lo estuvo a quienes portaban enfermedades preexistentes o eran considerados dentro del grupo de riesgo y se encontraban aislados en sus domicilios sin asistir a sus lugares de trabajo. Es importante destacar que las y los entrevistados acordaron que las enfermedades preexistentes y/o distintas condiciones de salud quedaron relegadas *a un segundo lugar* en relación con las problemáticas asociadas al COVID-19. En función de esto, las organizaciones canalizaron las demandas de las personas con estas problemáticas, articulando con instituciones estatales, como también presentando reclamos. En palabras de una de las entrevistadas:

> [Desde la comisión de salud] también se estaban encargando de otras cuestiones de salud que por la pandemia se priorizó en los hospitales y en las salitas la atención de COVID, entonces se dejaron de lado otras enfermedades como enfermedades crónicas como el HIV, la diabetes, como la presión alta entonces también, la atención de salud estuvo acompañando

todas esas problemáticas y en vínculo con los municipios para reclamar las cosas que sean necesarias. (Referente de Rama Industria Manufacturera - FAR)

Ante esto, se insistió a las personas para que retomen las visitas médicas necesarias y/o continúen con los esquemas de vacunación obligatorios (gripe común y otras enfermedades). Para ello, además de las tareas de concientización y acompañamiento, se articuló con los centros de salud para que este tipo de atenciones médicas puedan ser garantizadas.

Finalmente, los/as entrevistados/as que realizan su trabajo en contextos rurales señalaron como principal problemática la distancia entre las zonas de trabajo y los hospitales, así como el desborde y desabastecimiento que atravesaron los centros de atención primaria. Los y las entrevistadas remarcaron la falta de asistencia hacia su rama por parte del gobierno local, provincial o nacional, lo cual se vio profundizado por las distancias geográficas entre los espacios de trabajo y las postas sanitarias.

3. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

A medida que fue extendiéndose la campaña de vacunación y que los casos de contagio fueron menguando, las fuerzas estuvieron destinadas a informar, empadronar y acompañar en el proceso de vacunación. La campaña de vacunación comenzó en enero de 2021 y hacia agosto -próximo al momento en que se realizaron las entrevistas- la vacunación de la primera dosis contra la COVID-19 había alcanzado al 60% de toda la población. Dentro del grupo de personas con 60 años o más, este porcentaje alcanzaba el 91,5%.

En términos generales, las organizaciones intentaron participar en la campaña de vacunación y a partir de las entrevistas realizadas se observa que dicha participación estuvo abocada prioritariamente en la distribución de información y el desarrollo de estrategias de empadronamiento.

Por un lado, se buscó información certificada y materiales elaborados por el Estado para llevar adelante estrategias comunicacionales mediante las cuales despejar dudas y temores. Se priorizó el uso de materiales de fácil difusión y rápida lectura como infografías, fotografías, audios y videos cortos, que fueron compartidos por medios de comunicación masivos y redes sociales, entre las cuales se destaca el uso de los grupos de *WhatsApp*. En este sentido, adquirió importancia *dar el ejemplo* motivo por el cual algunas organizaciones compartieron fotos de los y las referentes a medida que iban recibiendo las vacunas. Estas actividades fueron complementadas con la realización de campañas y espacios de formación en donde se abordó específicamente la temática de la vacunación. Por otra parte, las organizaciones se dieron la tarea de acompañar en el empadronamiento de adultos mayores y de toda persona que lo solicitara. Esta estrategia permitió inscribir a quienes no estuvieran alfabetizados o no estuvieran familiarizados con el uso de dispositivos tecnológicos. Se puso a disposición dispositivos y puntos de conexión a internet para sortear las dificultades en la conectividad y se generaron

dispositivos de aviso y recordatorio del turno asignado. En algunos casos, procuraron priorizar la inscripción de quienes estaban dentro del grupo de riesgo o cuyo trabajo implicaba mayor exposición al patógeno, como por ejemplo las trabajadoras de la rama sociocomunitaria. Como expresó una entrevistada:

> ...las compañeras estuvieron haciendo el empadronamiento a varias vecinas y también al principio se peleó para que nos vacunemos nosotras que estamos todos los días expuestas frente a un montón de personas, se peleó, se ganó, nos consiguieron la vacuna, nos vacunamos entre todas, y después seguimos ayudando a gente para empadronarse. (Referente de la Rama sociocomunitaria - Movimiento Evita)

Al mismo tiempo, se identificaron algunas problemáticas en cuanto al acceso a la vacunación, especialmente en el contexto rural. En este sentido, los/as entrevistados de la rama de la agricultura familiar y campesina han coincidido en que la distancia respecto de las postas sanitarias fue un obstáculo al momento de incentivar la vacunación. Por este motivo, y en continuidad con lo enunciado anteriormente, se conformaron equipos entre promotoras y profesionales de la salud, a fin de realizar visitas domiciliarias y a las quintas productivas para brindar información y facilitar el trámite de inscripción. Para ello se gestionaron puntos de conexión a internet desde donde fuera posible realizar el trámite. Una vez establecidos los turnos, las organizaciones rurales pusieron a disposición la logística para el traslado hacia los centros de vacunación. Algo similar sucedió en los contextos urbanos, donde las organizaciones pusieron a disposición el conocimiento territorial y los equipos de promotoras de salud para recorrer los domicilios y realizar el empadronamiento.

En la rama de liberados, liberadas y familiares de detenidos/as MTE-UTEP, las organizaciones sostuvieron la importancia de hacer llegar la vacunación a personas detenidas. Esta rama buscó visibilizar que las instituciones de encierro como cárceles, comisarías, alcaldías, institutos de menores, eran espacios propicios a la propagación del patógeno y que era importante desarrollar la campaña de vacunación en estos contextos. A su vez, se organizaron visitas y campañas de vacunación a quienes estuvieran por disposición judicial cumpliendo condena en sus domicilios particulares. Desde el MTE Rural, la intervención se dio por parte de las promotoras de salud en conjunto con médicos del hospital de la zona, que recorrieron los distintos poblados explicando la importancia de vacunarse e inscribiendo a las personas al mismo tiempo. Por otro, referentes de la rama de construcción del FPDS mencionaron un trabajo articulado junto con promotoras del equipo de salud, convenciendo a aquellos y aquellas con dudas y desmintiendo información falsa que provenían de redes sociales y medios de comunicación tradicionales.

Capítulo 5. Educación y escuela en pandemia. El papel de las organizaciones en el 2021

5

Anahí Guelman, María Mercedes Palumbo, María Laura Lezcano

En este capítulo presentamos los hallazgos del relevamiento realizado en lo que refiere a la escolarización de los sectores populares en el contexto de la pandemia y al rol de las organizaciones de la economía popular en el sostenimiento de la educación de niños, niñas y adolescentes. Para ello, organizamos la información en dos secciones. La primera caracteriza las políticas educativas implementadas durante la pandemia. En la segunda se presentan las características de la escolaridad durante la pandemia en los territorios populares. Allí recuperamos a partir de las entrevistas realizadas las distintas problemáticas para sostener la actividad pedagógica, el impacto de la no presencialidad educativa que afectó no solo a estudiantes y docentes sino también a las familias y las iniciativas y los aportes de las organizaciones de la economía popular para garantizar el sostenimiento de la escolaridad. A este respecto, consideramos que las mismas tuvieron un importante papel como mediadoras educativas en tanto contribuyeron al funcionamiento de una escuela virtualizada en el marco de una serie de problemáticas e impactos.

1. LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS EN PANDEMIA

El Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa, desarrolló una serie de líneas de Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, expresadas en seis informes publicados durante 2020, que dan cuenta de las políticas educativas implementadas durante el ASPO como principal medida preventiva y su evaluación. Los sistemas educativos de todos los países del mundo se encontraron frente a una situación inédita. Según el informe de la segunda línea "Políticas Educativas Implementadas en Argentina. Continuidad Pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19" (ME, diciembre de 2020) se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles educativos el 16 de marzo de 2020 como medida sanitaria frente a la expansión de COVID-19 y de la declaración de la pandemia por parte de la OMS. Con estas medidas se alteró la

"gramática escolar" y se fueron organizando "nuevas presencialidades" virtualizadas durante gran parte de 2020 (Alliaud, 2021). La misma semana en que se suspendieron las clases presenciales "los gobiernos nacional y jurisdiccionales comenzaron a desplegar un conjunto de acciones destinadas a garantizar que las escuelas siguieran abiertas para sostener el servicio de alimentación y a diseñar e implementar iniciativas para viabilizar la continuidad pedagógica" (ME, diciembre 2020: 7). En este escenario, durante marzo, el Ministerio de Educación presentó "Seguimos Educando", un sistema multiplataforma que tuvo como objetivo generar condiciones para la continuidad pedagógica, con el soporte de la preexistente plataforma digital Educ.ar. Desde entonces, "el desarrollo de políticas gubernamentales para acompañar a docentes, estudiantes y familias ha variado en función de los antecedentes de trabajo en entornos educativos virtuales, de las condiciones de organización institucional, de las posibilidades de conectividad y acceso a soportes digitales en los hogares y de las condiciones de vida de las familias, entre otras cuestiones" (ME, diciembre 2020: 7).

Entre las estrategias propuestas y desarrolladas fueron habituales, al igual que en muchos países del mundo, "las plataformas y portales educativos virtuales, las interacciones sincrónicas y asincrónicas entre docentes y estudiantes, los programas educativos transmitidos por radio y televisión, la producción y entrega de materiales en formato digital e impreso, así como la facilitación del acceso a dispositivos tecnológicos entre docentes y la distribución entre las y los estudiantes" (ME, diciembre 2020: 7). Estas políticas se pensaron como respuestas para garantizar la continuidad pedagógica frente a la elevada desigualdad y situación de pobreza que afectaba a más del 50% de la población en edad escolar. Según el Informe "Políticas Educativas Implementadas en Argentina…":

> En esta línea, se sostuvieron los recursos destinados a brindar servicios de alimentación en las escuelas que, si bien debieron reorganizarse en función de los criterios sanitarios vigentes, en algunos casos fue posible que continúen abiertas y atender a las demandas de las familias en el marco de una crisis socioeconómica y de desempleo agudizada por la situación. (ME, diciembre 2020: 8)

Algunas de las estrategias implementadas fueron la distribución de material impreso para la población con acceso limitado a medios digitales y los acuerdos con compañías de telecomunicaciones para la liberación de datos móviles para el acceso a las plataformas educativas en la educación básica y superior. Durante agosto de 2020 se impulsó el Programa Juana Manso, que ponía a disposición una plataforma para que docentes y estudiantes pudieran trabajar en todo el país de manera gratuita. En septiembre se implementó el programa "Acompañar. Puentes de Igualdad", que buscaba acompañar la revinculación de niñas, niños y adolescentes con la escuela. Sin embargo, tal como lo reconocen los propios informes ministeriales, la continuidad pedagógica "ha sido resultado de la creatividad y el compromiso de escuelas, docentes y familias, que han reinventado, en un contexto de altísima

complejidad, los modos de sostener a la distancia, la relación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con la escuela y el aprendizaje" (ME, diciembre 2020: 5). Ese mismo informe ha reconocido que que "A pesar de las acciones desplegadas, la crisis sanitaria y la suspensión de las clases presenciales afectaron de manera desigual a la población escolar, colocando en clara desventaja a quienes carecían de infraestructura tecnológica adecuada para beneficiarse de la enseñanza remota" (ME, dic 2020: 51). El "Informe Preliminar. Encuesta a hogares", publicado en diciembre de 2020, afirmaba que:

> ...las condiciones de vida familiares son, a la vez, condiciones de escolarización para las y los estudiantes. Todo aquello que la escuela puede contribuir a mitigar en términos de desigualdades, se recrudece en esta educación en tiempos de emergencia donde son definitorios los recursos educativos y materiales de los hogares". (ME, diciembre 2020(6º): 96)

En ambos informes, las diferencias encontradas en las reconfiguraciones educativas llevadas adelante en el marco de la emergencia sanitaria son leídas "en clave de las desigualdades existentes" (ME, diciembre 2020: 243), educativas, socioeconómicas y territoriales.

Las estrategias desarrolladas incluyen sobre todo 2020, ya que en 2021 el sistema educativo fue retornando progresivamente a la presencialidad de manera heterogénea, desigual y dinámica, con idas y venidas en las decisiones, variaciones en los pronósticos y tensiones entre diversos sectores. Al respecto, el CFE -integrado por los y las ministros y ministras de todas las provincias y de la Nación- acordó la adaptación del currículum para el retorno a las aulas con vistas a la priorización y reorganización de saberes, tomando como base las regulaciones vigentes. Sin embargo, cada Jurisdicción definía la modalidad y temporalidad de este proceso de regreso a la presencialidad, en tanto la prioridad era "el sostenimiento de clases presenciales en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria de acuerdo con el nivel de riesgo de los distintos aglomerados urbanos, partidos o departamentos, pueblos o parajes, en el marco de un análisis sanitario y epidemiológico integral" (CFE Res 386/21).

En tal sentido, el CFE resolvió que, de acuerdo con las condiciones sanitarias, las formas de escolarización a implementarse podrían ser presencialidad, virtualidad o combinada (CFE Res 387/21). Esta última alterna grupos más reducidos de estudiantes con asistencia a la escuela en clases presenciales y actividades educativas en situaciones de no presencialidad, de manera de asegurar el sostenimiento de la norma básica de distanciamiento físico, disminuyendo la densidad de ocupación de las aulas y los edificios escolares. Esta forma de organización de la escolaridad fue conocida como "burbujas", tal como ya fue señalado en el capítulo 1. Asimismo, la Resolución 387/21 disponía de los criterios de organización de estos grupos, los tiempos de trabajo escolar, adaptados a los criterios sanitarios, estableciendo la necesidad de contar con una fluida comunicación con las familias y los estudiantes al respecto de la organización, entre otros aspectos que también tocan al trabajo docente.

2. LA ESCOLARIDAD DURANTE LA PANDEMIA EN LOS TERRITORIOS POPULARES

A pesar de las críticas y demandas permanentes a la institución escuela, esta continúa siendo el principal dispositivo de transmisión generacional, ámbito de producción y apropiación de saberes, agente de socialización, espacio y tiempo destinado a la situación de enseñanza sistemática y masiva, así como a la formación de la ciudadanía (Cols y Basabe, 2007). Por lo tanto, la inédita suspensión de la presencialidad en las instituciones educativas puso de manifiesto la inscripción de la escuela como gran cimiento y ordenador social. Para las organizaciones de la economía popular implicó reinventar y/o fortalecer redes socio comunitarias de apoyo cotidiano para sostener la continuidad pedagógica de niños/as, adolescentes y adultos/as frente a las desigualdades socioeconómicas, educativas y culturales preexistentes.

A partir de las entrevistas realizadas identificamos tres dimensiones vinculadas a la escolaridad durante la pandemia en los territorios populares donde se emplazan las organizaciones de la economía popular que se sintetizan a continuación:

- **a)** Problemáticas para sostener la escolaridad
- **b)** Impacto de la no presencialidad educativa
- **c)** Iniciativas y aportes de las organizaciones de la economía popular

a) Problemáticas para sostener la escolaridad

Contrariamente a los esfuerzos ya mencionados de la política educativa nacional y jurisdiccional para facilitar el acceso a campus virtuales y plataformas educativas por parte de niños/as y jóvenes residentes de barrios populares y ruralidad, los testimonios de las entrevistas realizadas dan cuenta de un conjunto de problemáticas para sostener la continuidad pedagógica.

Por un lado, identificamos la problemática generalizada de falta de acceso a la conectividad, necesaria para establecer la comunicación entre estudiantes y escuela con el objetivo de posibilitar la continuidad del desarrollo de las actividades escolares. Este aspecto no sólo afectó al alumnado, sino que se reflejó en dificultades por parte de los y las docentes para mantener la comunicación con sus estudiantes, que implicaría indagar las condiciones materiales y estructurales del trabajo docente en este contexto particular de pandemia.

La mayoría de las y los referentes consultados relataron la falta de dispositivos tecnológicos suficientes en los hogares para posibilitar el acceso a las plataformas educativas y los encuentros sincrónicos propuestos desde la escuela. En muchos casos, se evidenciaron las dificultades de las familias que tenían más de dos hijos/as en situación de escolaridad y un único dispositivo móvil que debía "rotar" para cumplir con las actividades propuestas. En palabras de una entrevistada de la rama sociocomunitaria del Movimiento Evita-UTEP: "no tenés más de uno o dos celulares y por ahí

tenés cuatro o cinco niños que van al colegio y que por ahí tenían que turnarse con el teléfono, y tal vez el teléfono no tenía internet o no funcionaba la cámara, o tenían poca memoria". Si bien los y las docentes trataron de prever estas circunstancias mediante el diseño de materiales que fueron enviados principalmente por *WhatsApp* para su posterior impresión y resolución de manera asincrónica, encontramos referencias a las dificultades y el costo económico que implicó para las familias las actividades pedagógicas propuestas.

Además, las y los adultos con niñas y niños en situación de escolaridad tuvieron que acompañar el desarrollo de las actividades escolares. Por un lado, conocer, familiarizarse y aprender el uso de las plataformas virtuales para acompañar y garantizar la conexión de los y las estudiantes a las clases virtuales por videollamadas. Por otro lado, dificultades relacionadas con las posibilidades de las familias de brindar aclaraciones de las consignas propuestas. En relación con esto, se agrega la preocupación de madres y padres que no pudieron colaborar con la educación de sus hijas e hijos debido a que no contaban con suficientes estudios o se encontraban en algún proceso de alfabetización antes del inicio de la pandemia. En tal sentido, algunos testimonios han dado cuenta de la necesidad de estudiar algunos contenidos con el fin de reponer explicaciones a sus hijos/as, tal como lo menciona una referente del MNCI Buenos Aires entrevistada:

> Tuvimos que hacer de maestros también, de docentes como quien dice porque si ya nos habíamos olvidado de algo lo aprendimos de nuevo, fue empezar otra vez de cero, porque las madres y los padres muchos son analfabetos y costó bastante, porque si los chicos les preguntaban qué era lo que decía o tenían que hacer ellos no sabían. (Referenta MNCI Buenos Aires)

En muchos casos, las y los entrevistados han señalado que se encontraron con dificultades para comprender los contenidos y las actividades enviadas por la escuela, con lo cual solicitaron ayuda a las organizaciones para sostener la educación de sus hijos/as.

Para las personas adultas que se encontraban retomando sus estudios al inicio de la pandemia, decisión que es valorada y alentada al interior de las organizaciones, se observó un retroceso en los procesos de escolarización. Lo anterior sucedió especialmente con las mujeres, como se desarrolló en los capítulos anteriores, debido a la sobrecarga de tareas de cuidado por la falta de presencialidad en las escuelas y posteriormente por las demandas de la modalidad híbrida en base al armado de burbujas.

En el caso de la rama agricultura familiar y campesina de la economía popular, por el contrario, hallamos una valoración positiva de la continuidad pedagógica virtual, debido a que, paradójicamente, la virtualidad aseguraba el desarrollo de las clases por parte de las y los docentes que, a menudo, tenían dificultades para asistir en épocas de presencialidad. En palabras de una referenta del MNCI Buenos Aires, "los profesores no venían por la parte rural, por el camino, por un montón de cosas (...) eso nos ayudó bastante, el estar en esas clases, tener los profesores de informática, tener clases virtuales".

b) Impacto de la no presencialidad educativa

La alteración de la gramática escolar y las nuevas presencialidades sucedidas especialmente durante 2021 generaron una serie de impactos. Uno de los principales impactos de la ausencia de la presencialidad educativa mencionado por las y los entrevistados fue la dificultad para sostener la continuidad pedagógica por parte de las y los niños/as, jóvenes y adultos en procesos de terminalidad educativa con el Plan FinEs. En ciertos casos, esta dificultad devino en la desvinculación del alumnado de las escuelas a las que asistían en la pre-pandemia. Este impacto se ha agravado en el caso de los estudiantes secundarios. En algunos casos, esta desvinculación se ha relacionado con las limitaciones respecto al acceso y calidad de la conectividad y los dispositivos tecnológicos, o bien por el uso del mismo dispositivo para el grupo familiar, de lo que dependió la posibilidad de participar de actividades sincrónicas y comunicarse con los/as profesores/as.

Aún quienes pudieron sostener la escolarización durante el ciclo lectivo 2020, los/as referentes consultados/as manifiestan la preocupación respecto al impacto de la pandemia en los aprendizajes de los/as estudiantes. Se preguntan por el tipo y grados de aprendizaje en el contexto de las clases desarrolladas por las plataformas virtuales sincrónicas con frecuencia semanal de corta duración y el seguimiento de las actividades propuestas que los y las docentes enviaban por grupos de *WhatsApp*, plataformas como *Classroom* y cuadernillos de estudios que las familias retiraban de manera presencial en las escuelas.

Los y las entrevistadas denunciaron adicionalmente el agravamiento de la situación de vulnerabilidad social, que atraviesan a las juventudes de los barrios populares al mismo tiempo que recuperan la importancia del rol social de la escuela y del trabajo como organizadores sociales. La virtualización de la escuela y la imposibilidad de sostener la continuidad pedagógica por medios virtuales ha supuesto la desorganización en la dinámica cotidiana con repercusiones negativas en los/as jóvenes. En los dichos de una referente del Movimiento Evita:

> ...la escuela, así como lo es el trabajo, son ordenadores de la familia, de la casa, es lo que les da parámetro a muchas familias que a veces les cuesta tenerlos [...] la escuela les da ese mínimo parámetro de una rutina, de un lugar donde pueda compartir otras cosas que no tengan que ver con lo que pasa en el barrio, que en algunos lugares está muy complicado, o que son escapes de problemáticas familiares. (Referenta Movimiento Evita)

Desde esta perspectiva, la escuela se concibe como lugar privilegiado en la construcción de identidades y proyectos de vida; la virtualización y los nuevos modos de "estar" en la escuela provocaron la desorganización y desestructuración de las coordenadas que ordenan la vida cotidiana de este grupo etario como de sus familias.

En cuanto al impacto de la no presencialidad en las familias, en 2020 repercutió negativamente en el trabajo al interior de las organizaciones, ya fue desarrollado en el capítulo 1. Como sostiene una entrevista de la rama textil de Somos Barrios de Pie:

"sin escuela nos veíamos con los chicos en casa, haciendo la escuela en casa. Y esto impactó obviamente en nuestra organización. No teníamos tiempo para producir [...]. Así que sí impactó muchísimo, volver a reorganizar horarios, tiempos. Se notó en nuestro desempeño".

Esta situación continuó en los inicios de 2021 cuando el Ministerio de Educación Nacional planteó la mayor presencialidad posible en las instituciones educativas, mientras las condiciones epidemiológicas lo permitieran y con la aprobación del protocolo de vuelta a las clases presenciales. Esta intencionalidad de atender a la continuidad pedagógica de los/as estudiantes, en la virtualidad excepcional en gran parte del ciclo lectivo 2020, implicó una nueva dificultad para las familias. Lo anterior involucró desplegar, especialmente para las identidades feminizadas, los apoyos necesarios para acompañar la realización de las tareas escolares en los hogares, en los momentos de escuela virtual, como así también garantizar los traslados y la logística necesaria para la permanencia de los y las niños/as en las instituciones educativas convocados/as en diferentes burbujas y/o franjas horarias. Según lo expresa una entrevistada:

> ...las mujeres tuvieron que hacerse cargo de ser maestras y además tener a los pibes todo el día en la casa y hacerse cargo de eso (...) fue más complejo para las mujeres poder retomar el trabajo en la organización mientras que los pibes no iban a la escuela y cuando empezaron a ir en modalidades presenciales alternadas en burbujas. (Referenta de FAR)

Los y las entrevistados/as consultados/as destacaron la imposibilidad de las mujeres para continuar con su trabajo remunerado o la necesidad de modificar los horarios de trabajo en función de las demandas familiares. Por lo general, las burbujas de trabajo se modificaron priorizando a las personas con superposiciones horarias con el ingreso y/o salida de sus hijos de las instituciones educativas en la modalidad de asistencia híbrida.

Un aspecto en común en la heterogeneidad de actividades productivas se orienta a las redes de contención entre compañeras de trabajo para llevar adelante tareas de cuidados. En la mayoría de los casos, se observa la presencia o el incremento de niños/as al cuidado en los espacios de trabajo, lo que implicó el desarrollo de estrategias de delimitación de sectores por parte de las organizaciones. Por ejemplo, en la rama de servicios socio comunitarios las madres que desarrollaban prácticas de asistencia alimentaria en comedores y merenderos comunitarios incorporaron a sus hijos/as en sus jornadas de trabajo. Según un entrevistado perteneciente al Espacio Puebla,

> ...el hecho de estar con los pibes hacía que vengan a laburar y a cocinar con los pibes; y no pasa nada, lo teníamos en cuenta a la hora de armar los grupos, las burbujas, no poníamos madres con muchos hijos juntos. Tratábamos de delimitar un sector para que estén los pibes lo más tranquilos posible, dentro de las posibilidades y que en otro sector se esté cocinando, se esté laburando. (Referente Espacio Puebla)

Si bien en términos generales, la virtualización de la escuela y la implementación de las burbujas escolares generaron una desorganización de las dinámicas familiares y la reconfiguración de las condiciones de trabajo, cabe señalar un contrapunto entre la dinámica urbana y la rural. De acuerdo con un referente de la rama de agricultura familiar y campesina,

> …en el campo el trabajo que hacen las familias en el territorio, no hay que desplazarse y no complica porque no hay que dejar a los chicos al cuidado de otro; distinto es en la ciudad donde las compañeras tienen que salir a trabajar y por ahí esas cuatro horitas que están los chicos en la escuela aprovechan para eso. (Referente del MOCASE -VC)

Como ya mencionamos, durante el ASPO se produjo una sobrecarga de las responsabilidades del cuidado para las identidades feminizadas, centralmente por el sostenimiento de la escolaridad de sus hijos/as. De este modo, se hace notoria la desigualdad entre varones y mujeres que se basa en la existencia de una división sexual del trabajo y la naturalización de la capacidad de las mujeres para cuidar (Esquivel, 2011; Rodríguez Enríquez y Pautassi, 2014; Rodríguez Enríquez, 2015). El impacto de la ausencia de la presencialidad educativa se manifestó no sólo en la desvinculación de estudiantes y en los aprendizajes de quienes lograron seguir vinculados a la escuela, sino también en los esfuerzos dispuestos por las identidades feminizadas en sus hogares y en espacios de las organizaciones de las que son parte para garantizar la continuidad pedagógica de los y las niños/as, realizando un seguimiento, apoyo y en ocasiones, refuerzos de explicaciones de actividades propuestas por la escuela.

c) Iniciativas y aportes de las organizaciones de la economía popular

Frente a las problemáticas e impactos de la no presencialidad desarrollados, las organizaciones de la economía popular llevaron adelante distintas acciones para sostener la actividad escolar durante la pandemia tanto de los espacios educativos propios de distintos niveles como de las escuelas a las que asisten las niñas, niños y jóvenes de los barrios populares. A modo de hallazgo de las entrevistas realizadas, encontramos que en relación a la escolaridad durante la pandemia los cuidados se comparten, ya no recaen solo en el ámbito doméstico y familiar, sino que por el contrario se desprivatizan y socializan en los centros comunitarios y espacios de trabajo colectivos donde se ponen en común los recursos materiales, afectivos y simbólicos para la provisión del bienestar. En otros términos, se trataría de una comunitarización de los cuidados (Campana y Rossi Lashayas, 2020) o bien de una "desfamiliarización" (Fournier, 2017) en torno, en este caso, a lo que implicó sostener una educación en un contexto inédito.

En relación con los espacios educativos propios, las organizaciones ya contaban con una dinámica formativa doble. Por un lado, formas no escolares, como talleres, capacitaciones, y cursos, sobre una variedad de temáticas, entre ellas, salud, género, medios de comunicación, formación política, economía popular. Por otro, propuestas

escolares con diversos grados de formalización estatal. Respecto a estas últimas, se destacan aquellas orientadas a jóvenes y adultas y adultos como el Programa de Finalización de estudios primarios y secundarios-FinEs, los Bachilleratos Populares, la Escuela de Agroecología del MOCASE-VC y las Primarias para adultos/as, así como Espacios de Primera Infancia-EPI y jardines comunitarios para el nivel inicial. Esta dinámica se reconfiguró durante la pandemia para garantizar la continuidad pedagógica de sus estudiantes.

En cuanto a las propuestas orientadas a jóvenes y adultos/as, se desarrollaron las clases de modo virtual por medio de plataformas para videollamadas, se diseñaron y difundieron actividades que se enviaron por *WhatsApp* y se elaboraron y distribuyeron cuadernillos de estudio. En un inicio, se optó por canalizar la escuela a través de las clases virtuales, pero las dificultades de conectividad y acceso a dispositivos que fueron evidenciándose generaron un replanteo en los colectivos docentes. En muchos casos, se decidió la elaboración de cuadernillos para que los/as estudiantes pudieran tener una apoyatura escrita para seguir las dinámicas planteadas en las clases virtuales, así como también la realización de encuentros presenciales de corta duración, individuales o en pequeños grupos, en los que se entregaban esos materiales, se intercambiaban dudas sobre el trabajo realizado y se facilitaba el acompañamiento docente. En los espacios de nivel inicial (EPI y jardines comunitarios), se enviaron actividades por *Whatsapp*, se desarrollaron encuentros para mantener el diálogo con las familias y realizar un seguimiento del proceso educativo y se llevaron materiales a las casas de los/as niños/as para que jugaran.

La preocupación por la alfabetización y escolarización de personas adultas se presentó como un aspecto recuperado por algunos/as entrevistados/as. Como ya fue señalado, en el marco de la pandemia, que implicó especialmente para las mujeres asumir el rol de "mamás-maestras", la necesidad de acompañar las trayectorias escolares de hijos/as se tradujo en una demanda a las organizaciones por la creación de nuevos espacios de alfabetización y propuestas de educación primaria y secundaria.

En cuanto al aporte de las organizaciones a la continuidad pedagógica en las escuelas a las que asisten niños, niñas y jóvenes de los barrios populares que no son parte de las organizaciones, tuvieron lugar una serie de iniciativas que buscaron dar una solución colectiva y comunitaria a las problemáticas para el sostenimiento de la escolaridad y la creciente desvinculación. Se buscó así resolver las condiciones básicas para garantizar el aprendizaje: conectividad, acceso a materiales educativos, acompañamiento pedagógico. En este sentido, las organizaciones de la economía popular asumieron un rol de mediación educativa entre los y las estudiantes, sus familias y las escuelas.

Dentro de las iniciativas referidas, se destacan los apoyos escolares donde se desarrolló el seguimiento del proceso educativo de niños, niñas y jóvenes, la resolución de actividades y tareas propuestas por la escuela y/o el trabajo con los cuadernillos elaborados por el Ministerio de Educación. En ese marco, se distribuyeron materiales de estudio (cuadernillos), tareas y útiles escolares; se relevaron dificultades y necesidades escolares; se impulsó la creación de nodos de conectividad y la compra de dispositivos tecnológicos para facilitar la participación en las clases virtuales y

la realización de tareas. Cabe agregar la contextualización que las organizaciones realizaron de los cuadernillos con contenidos priorizados con el fin de adaptarlos a las realidades particulares de los y las estudiantes. Esta cuestión apareció exclusivamente mencionada en la rama de agricultura familiar y campesina de la economía popular, considerando la fuerte impronta urbana del sistema educativo. En palabras de un integrante del MOCASE-VC: "no resultaban la cartilla, entonces había que pasarles [a los/as estudiantes] la tarea contextualizada al territorio, porque las cartillas no son pensadas para el campo, hay tareas que no tienen nada que ver con lo que los chicos conocen". Aunque son relatadas como situaciones excepcionales, se recuperaron experiencias de comunicación y vinculación entre centros comunitarios y directores/as de escuelas. Esta relación facilitaba el acompañamiento de niños y niñas que se habían desvinculado durante 2020 o la posibilidad de coordinar los horarios de trabajo de mujeres madres en comedores y merenderos comunitarios con los de las burbujas escolares.

Se observa así una revalorización de los apoyos escolares que ya existían en algunas de las organizaciones. Según una entrevistada de la rama sociocomunitaria del Movimiento Evita, "empezaron a surgir nuevamente los apoyos escolares como nuevas necesidades básicas (…) para que puedan hacer la tarea y ayuda en hacer la tarea, recuperar los meses que no fueron [a la escuela]". En el inicio de la pandemia, los apoyos se desarrollaron de modo virtual y, en algunas organizaciones, se combinaron con una estrategia de ir casa por casa a través de promotores/as educativos/as o brigadas. Paulatinamente, hacia finales de 2020 se fue recuperando la presencialidad en los apoyos, aún antes que en las escuelas, y definitivamente en 2021.

En todos los casos, ha sido central la posibilidad de garantizar un lugar físico, como los nodos, puntos educativos o espacios comunitarios con acceso a internet o bien sedes de sindicatos para el caso de la UOLRA. Estos lugares físicos reponían las condiciones espaciales de la escuela en otros espacios de carácter comunitario donde se llevaban a cabo las actividades vinculadas a la escolarización. Con este fin, ciertas organizaciones crearon nuevas estructuras como los puntos educativos de Somos Barrios de Pie, los nodos de conectividad de La Garganta Poderosa y las brigadas educativas del MTE rural; otras, como el MOCASE-VC, reforzaron sus brigadas de educación con las que venían trabajando en los espacios educativos propios como la Escuela de Agroecología.

Se puede pensar entonces el par presencialidad-virtualidad como aquel que estructuró el sistema educativo a partir de la pandemia, en la dinámica que se configuró entre escuela e iniciativas educativas de las organizaciones, entre una presencia virtual de la escuela, difícil de sostener en contextos donde existen problemas o falta de conectividad y una presencialidad "real" de las organizaciones en los territorios apuntalando las trayectorias escolares. Como resume con claridad un entrevistado del MTE referente de la rama construcción y liberados/as, las organizaciones "ayudaron a que la escuela funcione".

Los testimonios también dan cuenta de las dificultades en la implementación de estas iniciativas colectivas y comunitarias: cuadernillos elaborados con actividades de

recreación que no despertaron interés y no fueron devueltos, armado de burbujas para el uso de internet en espacios comunes donde no había dispositivos tecnológicos que no resolvieron el problema del acceso a la escuela, instancias virtuales de apoyo escolar que no siempre funcionaron por los problemas de conectividad y de acceso a dispositivos, el trabajo en burbujas, cuando se retornó a la presencialidad, que limitaba la cantidad de tiempo disponible para el apoyo. Adicionalmente, algunos/as entrevistados/as aluden a la dificultad de acceso durante la pandemia a políticas estatales que garantizaran y/o incrementaran la conectividad y los dispositivos tecnológicos disponibles para su uso en los barrios populares.

El común involucramiento de las organizaciones en la continuidad pedagógica de los niños, niñas y jóvenes resultó relevante durante la pandemia. Así canalizaron parte de las demandas de las escuelas hacia las familias de los barrios populares y buscaron soluciones en conjunto frente a circunstancias excepcionales de una escuela totalmente virtualizada en 2020 y con modalidad híbrida durante una parte considerable de 2021. Las iniciativas descriptas fueron sostenidas por militantes especialmente de las áreas de educación de las organizaciones, mujeres de la rama sociocomunitaria de la economía popular que trabajaban en comedores y merenderos de las organizaciones y estudiantes universitarios que se acercaron voluntariamente o por intermedio de acuerdos con universidades públicas.

Capítulo 6. Formas de intervención del estado: límites y alcances

6

Ana Natalucci, Lucio Fernández Moján, Ernesto Mate

En el contexto de la pandemia, el gobierno implementó nuevas medidas de contención, así como el refuerzo de otras ya existentes. El 8 de enero de 2020, a través de la Resolución 8/2020 del MDS, el gobierno había creado la Tarjeta Alimentar en el marco del Plan Nacional "Argentina contra el Hambre". Esta Tarjeta buscaba paliar una situación social crítica heredada del anterior gobierno y, a la vez, constituyó una forma de abordaje desde el Estado a la situación social durante la pandemia. Según los Reportes de Monitoreo de la Tarjeta Alimentar, para el 1º trimestre de 2021 habían poco más de 1.500.000 titulares (MDS, 2021a). En mayo de 2021, se amplió el límite de edad de los hijos/as de titulares de AUH que podían percibir la Tarjeta Alimentar y se incorporó una nueva categoría de prestación para aquellos/as personas que tuvieran 3 o más hijos/as a cargo. Estos cambios elevaron la cantidad de titulares a 2.320.569 para el 2º trimestre de 2021 (MDS, 2021b). Otra de las políticas impulsadas fue el Programa Nacional de Inclusión Social y Desarrollo Local "Potenciar Trabajo" (PT). El 20 de marzo de 2020, a través de la resolución 121/2020, el MDS creó este programa y transfirió a los/as titulares de dos programas preexistentes: Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Contemporáneos. Mientras que en febrero de 2020 los programas Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Contemporáneos en conjunto alcanzaban a aproximadamente 550 mil titulares, en diciembre de 2020 llegaban a 800 mil titulares y, finalmente, en diciembre de 2021 a más de 1.300.000. El Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar fueron las principales políticas de contención social durante 2021.

Paralelamente, el 23 de marzo de 2020, se creó el IFE (Decreto Nº 310/2020) por medio del cual se proponía garantizar un ingreso mínimo a trabajadores/as sin ingresos fijos como modo de garantizar un ingreso mínimo a quienes no eran alcanzados por las políticas de transferencia de ingreso existentes; por ello entre las condiciones de acceso se prohibía el acceso a otros titulares de programas sociales excepto de la AUH, AUE y el PROGRESAR. Los cálculos gubernamentales iniciales proyectaban alcanzar a 3.6 millones de personas, pero finalmente fueron admitidas 8.9 millones de las 13.4 millones inscriptas inicialmente (ANSES, 2020). El IFE implicó tres pagos de $10.000 hasta agosto-septiembre de 2020 pese a las demandas de las organizaciones sociales

y de sectores, incluso afines al gobierno, de pagar una cuota en diciembre de ese año. El IFE hizo visible la situación en la que se encuentra un amplio sector de la población, muchas veces con condiciones laborales desprotegidas, que excede el sector de la economía popular.

El 1º de abril de 2020, el gobierno impulsó el ATP (Decreto 332/2020), cuyo objetivo principal era "cuidar el trabajo, garantizar la producción y amortiguar el impacto económico generado por la crisis del COVID-19", por lo que estaba orientado al ámbito de la producción en términos amplios, abarcando empresas de todos los tamaños, monotributistas y autónomos. La asistencia se otorgaba principalmente a través del pago de salarios complementarios por parte del Estado y líneas de crédito a tasa subsidiada. A fines de 2020, a partir de la apertura progresiva del ASPO, se fue reduciendo la magnitud del ATP; en su reemplazo el gobierno impulsó el REPRO II, cuyo antecedente el REPRO I se había implementado desde 2004. Si bien tanto el ATP como el REPRO II fueron medidas de bajo impacto en el sector de la economía popular -debido a que estuvieron orientadas principalmente a la asistencia a empresas privadas- lo cierto es que algunas cooperativas, principalmente de la rama de empresas recuperadas pudieron contar con algunas de estas herramientas. Otras cooperativas, que no lograron acceder al ATP o al REPRO II, contaron con el PTA implementado por el MTEySS desde 2004, cuyos objetivos han sido la promoción y fortalecimiento de las unidades productivas autogestionadas, para la mejora de su competitividad y sustentabilidad. Vale destacar que en términos de cantidad de beneficiarios, el PTA es un programa de pequeña magnitud en comparación con otros, como el PT.

Según nuestros datos cuantitativos (Fernández Álvarez y Natalucci, et. al., 2021), en el 4º trimestre de 2020 el sector de la economía popular estaba integrado por 4.980.968 personas, 4.638.773 en el 1t de 2021 y 4.365.540 en el 2t de ese mismo año. Como puede observarse, la población incluida en el sector de la economía popular es mucho más amplia que la cobertura de los programas sociales. Si bien esta situación se hizo evidente en 2021 a partir de la discontinuación del IFE, lo cierto es que, incluso en el contexto más crítico de la situación sanitaria y las restricciones, las estrategias de contención social implementadas fueron insuficientes en relación con la magnitud de la pandemia. Un problema adicional ha sido que esas estrategias no fueron uniformes, sino que han presentado claroscuros que nos permiten comprender la complejidad de la crisis en curso.

Según los testimonios de los/as entrevistadas, identificamos cuatro cuestiones claves para entender la intervención del Estado, en sus diferentes niveles, en el contexto de la pandemia. La primera es que el programa Potenciar Trabajo ha sido el principal recibido los/as trabajadores/as de la economía popular junto con otros de menor cobertura. Su ampliación durante 2021 -sobre todo del PT- se mostraron insuficientes para atravesar la crisis de pandemia. La segunda cuestión que nos interesa destacar es que desde el gobierno nacional se proveyó a las organizaciones de diferentes recursos, asistenciales, capacitaciones, etc. A algunas, la posibilidad de co-gestionar los programas les permitió ofrecer respuestas focalizadas a problemáticas específicas, pero sin modificar cuestiones de tipo estructural. La tercera remite a la desarticulación significativa

entre el Poder Ejecutivo entre los diferentes ministerios y, a su vez, entre los diferentes niveles estatales: nacional, provincial y municipal. Estos déficits fueron decisivos tanto en la efectividad estatal como para la magnificación del trabajo de las organizaciones. Finalmente, la cuarta cuestión alude a que en este contexto las demandas al gobierno se concentraron principalmente en mayor asistencia por la crisis y en la garantía de la conectividad, seguida de problemáticas específicas de los sectores y en última instancia a las problemáticas estructurales del sector.

En función de estas cuestiones claves, en la primera sección desarrollamos un mapeo sobre las políticas estatales impulsadas durante 2021. Luego nos concentramos en las particularidades que atravesaron las diferentes ramas del sector de la economía popular. Finalmente, analizamos las demandas construidas por las organizaciones a lo largo de la pandemia y que presentan desafíos futuros, toda vez que la pandemia no solo aparejó consecuencias, sino que éstas se asentaban sobre problemas estructurales que atraviesan al sector.

1. UN MAPEO SOBRE EL ACCESO A PROGRAMAS Y RECURSOS DURANTE 2021

El acceso a los programas de contención fue irregular. Esta heterogeneidad en el acceso se puede atribuir a varias cuestiones. La primera es que muchos programas, sobre todo los que se impulsaron desde el MTEySS, estaban destinados a cooperativas que contaban con personería jurídica; mientras que muchas de las cooperativas de la economía popular no cuentan con este proceso legal completo. Esta cuestión implicó que muchas cooperativas no pudieran acceder a créditos o beneficios estatales en pos de mantener la continuidad y estabilidad de sus fuentes de trabajo.

La segunda cuestión remite a la prioridad del abordaje estatal en la pandemia, concentrado en la situación sanitaria, más que en la consideración de sus consecuencias sociales y económicas. Un comentario extendido entre los testimonios de las entrevistas, aún con el diferencial de acceso a programas y recursos, ha sido que los emprendimientos productivos y cooperativas se sostuvieron principalmente por la organización, principalmente por recursos provistos por ella misma o por relaciones con otras organizaciones que prestaron ayuda, tal como se desarrolló en los capítulos 2 y 5. Esta lógica estuvo presente en los tres niveles estatales: nacional, provincial y municipal.

Asimismo, si bien la mayoría de los testimonios alude al MDS, por ejemplo, en el caso de algunas cooperativas de reciclaje, hubo una relación con el Ministerio de Ambiente de la Nación y con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Esta relación fue estrecha y aunque no siempre logró canalizar las demandas económicas de las organizaciones por medio de programas específicos, sí tuvo un rol central para que la actividad pudiera desarrollarse en el contexto de restricción de actividad y de movilidad. El rol de la OPDS ha sido central en la actividad dado que convocó a un consejo consultivo para la promoción de capacitaciones. En vinculación con la actividad de reciclaje, algunas or-

ganizaciones -entre ellas FECARA- firmaron un convenio con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación para un programa de empleo verde. Incluso los referentes/as consultados han destacado al INAES como el ente estatal con un rol central en la definición e implementación de algunas iniciativas, capacitaciones o programas.

A su vez, esta lógica de abordaje estatal se ha visto complejizada por la virtualización de los trámites. Como se mencionó en el capítulo 1 y 2, esto supuso un aprendizaje y esfuerzo extra por parte de las organizaciones, sobre todo al inicio de la pandemia por las dificultades en el acceso a la conexión, falta de equipamiento -o por ser compartido entre la familia- e incluso por el desconocimiento por el funcionamiento de los sistemas. Sin embargo, una vez adquiridos ciertos saberes, observamos una coincidencia entre las y los entrevistados respecto de valorizar como esta virtualización permitió la agilización de los procesos y los tiempos y en consecuencia a la posibilidad de acceder a algunos beneficios y/o programas. Finalmente, las organizaciones empezaron a trabajar en el proyecto de ley de Envases y a exigir al poder Ejecutivo su regularización e implementación. En relación con esto, algunos testimonios manifestaron como positivo que algunos compañeros o compañeras de la organización ocuparan cargos de gestión en áreas específicas del Estado, sobre todo por la visibilidad y reivindicación del sector de la economía popular, como también por la posibilidad de elaborar programas específicos para fomento y fortalecimiento.

En general, los programas a los que accedieron los y las trabajadores de la economía popular fueron el Potenciar Trabajo, IFE, REPRO, la tarjeta Alimentar, AUH. En muchas oportunidades, la dificultad del acceso al IFE tuvo que ver con la falta de documentación de una población con importante proporción migrante. Paralelamente, muchas organizaciones recibieron fondos para alimentos en el formato *bolsones* de los comedores que sostenían, más allá de los beneficios particulares que podían recibir los y las trabajadores. Como mencionamos, este acceso no fue universal, y en muchos casos no logró contener la magnitud de la crisis.

Otro programa de acceso irregular pero habilitado para todas las ramas fue el Programa Cuidate, que se implementó en algunos municipios del GBA -Lanús, Morón, Tigre, San Miguel y Pilar, entre otros- orientado a proveer de elementos de higiene y de inscripciones para la vacuna contra el virus COVID-19 y la gripe. Este programa fue clave sobre todo para las ramas que siguieron produciendo durante el ASPO, para garantizar el trabajo por burbujas y disminuir la posibilidad de contagio. Finalmente, algunas organizaciones recibieron por parte de la ENACOM tarjetas para garantizar la conectividad.

Si bien no vamos a desarrollar esta cuestión, es importante remarcar que no todos estos programas tienen el mismo estatuto en el sentido que tienen diferentes alcances, coberturas y caracteres. Algunos son de tipo individualizante, como el Tarjeta Alimentar o IFE, mientras otros son de tipo colectivistas, como el Potenciar Trabajo. Esta diferencia remite a una larga discusión sobre el carácter focalizado de la política social. Sin entrar en un debate epistemológico-político sobre cada uno, lo que observamos es que operó una lógica más bien desarticulada, no planificada desde el gobierno que probablemente contribuya a explicar porqué la ayuda o intervención estatal se percibió como insuficiente o tardía y desarticulada tanto a nivel ministerial como de escala. Al respecto, una

entrevistada manifestó: "claro, los problemas son muchos y las respuestas son pocas. Bueno, la verdad que el Estado responde con silencio, digamos" (Referenta de FAR).

2. ALGUNAS ESPECIFICIDADES POR RAMA DE ACTIVIDAD

Algunas cooperativas de cartoneros/as de la rama Recuperación, Reciclado y Servicios Ambientales, como el caso de FECUTRA -que ya contaban con algún financiamiento- accedieron al programa Argentina Recicla por el que obtuvieron herramientas (en transporte e indumentaria) para consolidar el trabajo que ya venían realizando. Si bien hicieron reclamos al MDS, no lograron conseguir el IFE por su incompatibilidad con otros programas preexistentes. Otras cooperativas de reciclado pudieron incluirse dentro de las actividades esenciales, sobre todo por la recolección y tratamiento de los residuos, por lo que algunos de sus integrantes accedieron o bien al IFE o al REPRO. El acceso al PT fue clave para la provisión de herramientas y equipamiento a las cooperativas para fortalecer su capacidad productiva. Desde el MDS, o incluso algunos municipios, otorgaron provisiones de higiene para desarrollar la tarea como alcohol en gel y barbijos. Los trabajadores/as pudieron acceder al IFE mientras no recibieran el Potenciar Trabajo.

En la rama de comercio popular y trabajos en espacios públicos, algunas organizaciones, con vínculos previos con la Secretaría de Empleo del MTEySS, lograron acceder a dos programas ya vigentes. Uno de ellos ha sido el PTA que consiste en el pago de subsidios a trabajadores/as para propiciar su incorporación en una cooperativa o para el fortalecimiento de cada una. El segundo programa, EPT, estaba orientado a la capacitación laboral con la guía de un tutor para su incorporación en una cooperativa.

En el caso de otras cooperativas lograron gestionar con la CONAMI, el acceso a un crédito para la adquisición de mercadería directamente a una distribuidora, para comercializar y vender garantizando el acceso a recursos esenciales para su actividad económica. Esta estrategia implicó una mejora sustantiva en el trabajo cotidiano evitando la inflación, pero también la especulación de sectores que re-venden a trabajadores/as de la vía pública con un impacto directo en la ganancia de cada uno. Otras organizaciones integrantes de la iniciativa de comercialización Me.Co.Po (como el FPDS y la UTT, entre otras) participaron del "Mercado Federal Ambulante"; una feria itinerante organizada por la Secretaría de Comercio Interior a través de la línea "El Mercado en tu Barrio", en la que se buscaba acercar productos de primera necesidad a menores costos en distintos municipios tanto del GBA como en otras provincias.

En la rama de servicios socio comunitarios, la recepción de los programas y recursos se canalizó principalmente a partir del PT y desde el MDS el envío de bolsones de comida seca (fideos, arroz, aceite), para aprovisionar a los comedores. En algunos municipios -como Tigre- se enviaron alimentos frescos, pollo, carne o verdura. En este caso, el PT implicaba una retribución económica a las compañeras abocadas a los comedores y merenderos, de las cuales solo unas pocas cobraban un plus por esta tarea, prevista

por el proyecto de ley conocido como *Ramona* por el caso de una compañera que trabajaba en un comedor y falleció a causa del virus COVID-19.[5] El cobro de este plus implicaba duplicar la cantidad de horas de trabajo, con lo cual no se trató estrictamente de una jerarquización de la actividad, sino de un aumento de las horas destinadas a la tarea. La cifra a agosto de 2021 era de 13.600 pesos, por lo que era generalizada la necesidad de realizar *changas* para complementar el ingreso. Esta rama es tal vez donde menos se visualizó la intervención del gobierno en todos sus niveles pese a la agudización de la crisis. Fundamentalmente, el punto central radica en que el reconocimiento del carácter de trabajadoras de las compañeras que trabajan en comedores y merenderos, que no se restringe sólo a la economía popular, sino a un debate mayor sobre el trabajo no reproductivo. Según los testimonios de los/as entrevistadas, esta rama fue "de las más presionadas" debido al incremento significativo de la demanda por comida en los barrios. Por esta razón, tuvo una activa participación en el programa "El Barrio Cuida al Barrio" que, como se mencionó en el capítulo 4, implicaba la instalación de un espacio de concientización y atención, donde se tomaba la temperatura, se informaba sobre los hisopados, se contribuía a la detección de síntomas y distribuían elementos de higiene, sanitarios, etc.

En el caso de algunas empresas recuperadas, la situación revistió una particularidad extra dado que algunos trabajadores/as recibieron el IFE, pero al ser cooperativas no pudieron recibir algunos programas del MDS, como el PT, quedando en una especie de *zona gris* que dificultó el desarrollo de la actividad. Algunas de estas cooperativas, luego de varios meses de reuniones y envío de notas, consiguieron una ayuda parcial cercana a los 11 mil pesos por unos pocos meses. En el caso de otras empresas recuperadas, muchas de las dificultades económicas que atravesaron pudieron canalizarse parcialmente con el otorgamiento de créditos blandos para la adquisición o renovación de maquinarias, compra de materiales y capacitación. Las mismas pudieron acceder a maquinarias por medio de programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Productivo, del programa Manos a la Obra del MDS y a subsidios otorgados por el INAES. Estas iniciativas fueron clave sobre todo si consideramos que por la constitución legal de las cooperativas no suelen acceder a los créditos bancarios dispuestos por las leyes del Banco Central.

Mientras que desde la FACTA se ha impulsado la conformación de polos productivos, algunos relacionados con el Mercado Central para favorecer la comercialización en otros circuitos comerciales; el MNER pudo acceder a algunos programas a partir de la gestión de la Dirección de Empresas Recuperadas del MDS, que integraban en calidad de funcionarios dirigentes de la organización. Esta participación fue clave para la sensibilidad y visibilidad de los problemas que atraviesan a esta rama.

La rama de industria manufacturera, específicamente para las cooperativas textiles, una referenta de Somos Barrios de Pie mencionó que solo accedieron al IFE y algunas compañeras/os a la tarjeta alimentaria, pero no a créditos o línea de programa de tipo colectivizante. Si bien desde la Federación de Cooperativas de Costureros, Trabajadores de la Indumentaria y Sector Textil-MTE no pudieron acceder a algunos de estos programas, si pudieron consolidar su trabajo a partir de la confección de los kits que el Mi-

5. La ley ramona finalmente no prosperó, pero el gobierno dio un plus de $5000 a titulares del Potenciar Trabajo que hacían trabajo en comedores.

nisterio de Salud de la PBA entregaba. Estos kits estaban compuestos en general por un camisolín, una cofia y un par de botas. Hasta agosto de 2021, se había producido cerca de 3 millones de kits. Aunque no se trató específicamente de un programa, constituyó una iniciativa estatal que permitió consolidar e impulsar el trabajo de las cooperativas textiles. Otras cooperativas recibieron maquinarias, entre ellas una *metra*, una máquina especial para la confección de pantalones e indumentaria de trabajo. La producción de materiales para la pandemia atravesó a otras organizaciones, por ejemplo, al área Textil del FPDS se dedicó a la confección de los barbijos diseñados por el CONICET. Algo que han destacado las y los entrevistados de esta rama, pero también de otras, han sido los problemas logísticos, ya que cada cooperativa pudo incrementar su capacidad de producción, pero no así respecto de la distribución de la mercadería, ya que eso requiere de transporte, la organización de polos de comercialización, etc.

En relación con la rama de la construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental, algunas organizaciones manifestaron que pudieron mantener los programas a los que accedían como la AUH y el PT. El acceso a este último fue clave para algunas cooperativas respecto de la provisión de herramientas y equipamiento para la producción. A su vez, algunas lograron percibir un plus del PT que alcanzó al SMVM, con el respectivo incremento de la jornada laboral.

La rama agricultura familiar y campesina ha presentado como particularidad que su interlocutor no ha sido el MDS, sino la Secretaría de Agricultura Familiar. Una de sus iniciativas claves fue el Programa de Asistencia Crítica y Directa, destinado al acompañamiento de los floricultores junto con la provisión de insumos, semillas y biopreparados para garantizar y mejorar las producciones. En otras oportunidades, aquella proveyó de alimentos para los animales que se crían. Debido que la producción se garantizó con este tipo de herramienta, la demanda de este período tuvo más bien relación con los canales de comercialización y de venta; generalmente sostenida a partir de la distribución de bolsones y de ferias. En esta rama es destacable que a los problemas emergentes de la pandemia se le sumaban algunos de tipo estructural. Si bien esta característica podría generalizarse a todo el universo de la economía popular, en este caso, el acceso a la tierra reviste una importancia política de magnitud. Por expresiones de los/as entrevistadas, el IFE prácticamente no llegó al área rural, sólo en algunos casos por situaciones de violencia de género y algunos PT. Algunas organizaciones manifestaron además haber implementado el programa Sembrar Soberanía dependiente del MDS. Una cuestión que resaltan los/as entrevistadas es que si bien no contaron con recursos o programas sectoriales necesarios, sí lograron incrementar su participación institucional en dependencias estatales, entre ellas el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación y Mesas y Secretarías con el Ministerio de Desarrollo Productivo o la Mesa de Desarrollo Regional en el marco del Ministerio del Interior de la Nación.

En otros casos, las organizaciones presentaron proyectos, a partir de la convocatoria que realizó el MMGyD orientado a mujeres que sufren de violencia de género. Uno de esos proyectos fue el Nuestras Manos les permitió contar con la adquisición de maquinarias y recursos para mejorar las instalaciones para la producción.

La rama de liberados, liberadas y familiares de detenidos/a MTE-UTEP señalaron que no recibieron programas o recursos específicos que atendieran las particularidades de las personas con antecedentes penales. En tal sentido, una de las acciones impulsadas de la organización fue la creación de polos productivos que pudieran impulsar la producción y simultáneamente la creación de puestos de trabajo para personas liberadas. Si bien esos polos aún son incipientes, la recepción del PT fue clave para la provisión de herramientas, maquinarias esenciales para el desarrollo de las diferentes actividades productivas. Paralelamente a este proceso, la organización participó en la mesa "Más trabajo Menos Reincidencia", impulsada en conjunto entre organizaciones de liberados/as, el Ministerio de Justicia de PBA y municipios de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de comenzar a discutir la implementación de políticas de inclusión social para las personas liberadas en el ámbito de la provincia.

Para finalizar, lo que observamos de las entrevistas es que el acceso a recursos y programas fue desigual, heterogéneo de acuerdo con las diferentes ramas de actividad y con una visible desarticulación interministerial, principalmente entre Desarrollo Social, Trabajo, Ambiente y Salud.

3. DEMANDAS Y PERCEPCIONES SOBRE LA INTERVENCIÓN ESTATAL

A partir del cambio de gobierno en 2019 y el acceso de dirigentes a áreas estratégicas para el sector en los ministerios, las organizaciones han caracterizado al Estado en términos más receptivo a sus demandas. Sin embargo, en general los/as entrevistados/as han identificado muchas falencias de tipo estructural y tareas pendientes para paliar la crisis y consolidar el sector. Una de las críticas más generalizadas ha sido en torno a la insuficiente respuesta del gobierno frente a la magnitud de la crisis producida por la pandemia; específicamente las dificultades para acceder al IFE fueron claves como también su finalización abrupta pese a la continuidad de los impedimentos laborales. Esta cuestión se sintetizó en el reclamo generalizado por el pago de una cuarta cuota en diciembre de 2020. Otras críticas se orientaron a los problemas asociados a las capacidades estatales como la (no) articulación interministerial y las trabas burocráticas para la gestión de recursos y subsidios, también a la falta de la cobertura de conectividad y de reconocimiento de la importancia de la economía popular en el mundo del trabajo actual. Según las organizaciones, el reclamo de reconocimiento del sector de la economía popular implica fortalecer sus trabajos, la regularización y la discusión sobre un salario básico universal. Como puede observarse, no todos estos cuestionamientos tienen el mismo alcance ni aluden a la pandemia y sus consecuencias.

A su vez, las demandas de reconocimiento de la economía popular presentan particularidades de acuerdo con las distintas ramas. Las organizaciones de la rama de la construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental y de la rama de industria manufacturera -ladrilleros y textiles, principalmente- reclaman la posibilidad de asociarse al Estado. En tal sentido, la rama de la construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental ha reclamado desde 2018 una ley de Infraestructura Social

que garantice que un 25% de la obra pública se destine para las cooperativas de construcción. Al respecto, las ramas textiles y de ladrilleros reconocen que convertirse en proveedores del Estado impactaría positivamente en el desarrollo de las cooperativas de trabajo.

Otras demandas están vinculadas a la intervención del Estado en el mercado para impulsar el desarrollo o atenuar los desequilibrios propios del sistema capitalista. Por ejemplo, sectores alimenticios de la rama de industria manufacturera han reclamado que la Tarjeta Alimentar pueda ser utilizada en almacenes populares y no sólo en cadenas de supermercados. La rama de la agricultura familiar y campesina ha solicitado que se garantice un precio sostén para sus productos y desde la rama recuperación, reciclado y servicios ambientales -principalmente la FACCyR- exigieron la sanción del proyecto de ley de Envases, así como otras iniciativas, como la asociación de los servicios de reciclaje con los supermercados. En la misma dirección, la rama de liberados, liberadas y familiares de detenidos/as ha reclamado la promoción de los bienes producidos por sus cooperativas en el marco de un reclamo más amplio de políticas que fomenten la inclusión social.

Una de las demandas más extendidas en las ramas productivas de la economía popular ha sido el fomento estatal mediante subsidios, créditos y equipamiento. Las ramas de empresas recuperadas, de ladrillos, de liberados/as y familiares de detenidos/as y de agricultura familiar y campesina han señalado las dificultades para la gestión de proyectos y subsidios, la falta equipamiento. En el caso de los ladrilleros/as han exigido una política integral para la actividad, además de la construcción de parques ladrilleros. Los reclamos por tierra para trabajar también son compartidos por la rama construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental y la rama de agricultura familiar y campesina.

Otro tipo de demandas se asocian a las condiciones de trabajo del sector de la economía popular, uno de los principales es el de la rama de trabajadores/as de la vía pública, quienes son sujetos de constante persecución policial y judicial en los distintos niveles del estado. Tanto la rama de servicios socio comunitarios como socio comunitaria, han reclamado, por un lado, una mayor celeridad en la respuesta estatal y aumento en los insumos (alimentos y kits sanitarios) y, por el otro, políticas para resolver problemas vinculados a las condiciones de vida en los barrios y en particular para enfrentar la violencia de género.

En definitiva, si bien buena parte de las demandas hacia el Estado tuvieron que ver con la necesidad de garantizar un mínimo de contención social en un contexto de profunda crisis, lo cierto es que en las demandas se vislumbra la continuidad de problemas de tipo estructural. En tal sentido, muchas de las demandas no se acotaron a la salida a la crisis, sino en una apuesta a futuro en vistas del desarrollo del sector y así en la mejora en las condiciones de trabajo de las y los trabajadores. Esta apuesta gira en torno, por un lado, a la necesidad de que el Estado impulse en términos productivos al sector. El salto de escala en la producción de muchas cooperativas necesita de un Estado que provea recursos en términos amplios -financieros, capacitación, infraestructura, tierra, etc.- a modo de afianzar y expandir al sector. Por otro lado, las

organizaciones han exigido que el Estado garantice condiciones de trabajo y de vida dignas, principalmente un ingreso mínimo y el acceso a los derechos sociales, como salud, educación y hábitat. En suma, el amplio abanico de demandas se orienta a la igualación de los derechos sociales como al incentivo de la economía popular como actividad económica.

Bibliografía

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) (2020). Boletín IFE I-2020: Caracterización de la población beneficiaria. http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/Boletin%20IFE%20I-2020.pdf

Alliaud, A. (2021). *Enseñar hoy. Apuntes para la formación.* Buenos Aires: Paidós.

Arcidiácono, P. y Gamallo, G. (2020). El ingreso familiar de emergencia. Respuesta inmediata y debates futuros. Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas, Universidad de Buenos Aires. https://www.dspp.com.ar/wp-content/uploads/DSP-2007010-Debates-02-IFE-Arcidiacono-y-Gamallo.pdf

Arza, C. (2020). Familias, cuidado y desigualdad. En Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) "Cuidados y mujeres en tiempos de COVID-19: la experiencia en la Argentina". Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/153). Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Azzati, S., Bustos, A.J., Castronovo, A., Gago, V y Roig, A. (2020). Argentina. En Economías populares en la pandemia. Cartografía provisoria en tiempos de aislamiento y crisis global. (36-40). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/07/InformeClacso_FINAL-FINAL.pdf

Basualdo, V., y Peláez, P. (2020). Procesos de conflictividad laboral en el marco de la pandemia del COVID-19 en Argentina (marzo-mayo 2020). *Rei-revista Estudos Institucionais*, *6* (3), 1086-1134.

Batthyány, K.y Sánchez, A. (2020). Profundización de las brechas de desigualdad por razones de género: el impacto de la pandemia en los cuidados, el mercado de trabajo y la violencia en América Latina y el Caribe. *Astrolabio. Nueva Época*, 25, 1-21. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/article/view/29284

Batthynay K. y Sanchez, A. (2020). Profundización de las brechas de desigualdad por razones de género: el impacto de la pandemia en los cuidados, el mercado de trabajo y la violencia en América latina y el caribe. Revista *Astrolabio. Nueva Época*. N.25 pp: 1-25. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/article/view/29284

Batthyány, K. (2020). *Miradas latinoamericanas al cuidado*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Bergesio, L. y González, N. (2020). *Economía popular y herramientas estatales: la (in)habilitación de ganarse la vida en tiempos de pandemia*. En Bergesio, L y Perassi, L. (coord.) La pandemia en/desde Jujuy. Reflexiones situadas. San Salvador de Jujuy: Tiraxi ediciones. p. 163-168.

Bidaseca, K; Aragão Guimarães Costa, M., Brighenti, M. y Ruggero, S. (2020). Diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas y disidencias en el contexto de COVID- 19. Buenos Aires: Unidad Coronavirus, CONICET.

Bonfiglio, J.I., Salvia, A. y Vera, J. (2020). Empobrecimiento y desigualdades sociales en tiempos de

pandemia. ODSA-UCA Informe de Avance.

Campana, J. y Rossi Lashayas, A. (2020). *Economía Popular y Feminismo: articulaciones y nuevas demandas emergentes*. Otra economía, 13(23), 246-263.

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (2020). COVID-19 en la vida de las mujeres. Razones para reconocer los impactos diferenciados. Organización de los Estados Americanos (OEA).

Cols, E. y Basabe, L. (2007). *La enseñanza*. En Camillioni, A. (Comp.) El saber didáctico. Buenos Aires: Paidós.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2020a). Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación. Informe Especial COVID19 Nº2. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/4/S2000286_es.pdf

CEPAL. (2020b). La Pandemia del Covid-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe. Informes Covid-19. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45335-la-pandemia-covid-19-profundiza-la-crisis-cuidados-america-latina-caribe

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2021). La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. https://www.cepal.org/es/publicaciones/46633-la-autonomia-economica-mujeres-la-recuperacion-sostenible-igualdad

CEPAL, N. (2020). Enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas durante y después de la pandemia de COVID-19.

Consejo Federal de Educación. Resolución 386-2021

Consejo Federal de Educación. Resolución 387-2021

Craviotti, C. (2020). Reflexiones sobre el impacto de la pandemia en la Argentina, y la posibilidad de fortalecer los sistemas alimentarios locales. Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. (IADE). http://www.iade.org.ar/system/files/reflexiones_sobre_el_impacto_de_la_pandemia_en_la_argentina_esp_2_0.pdf

Daich, D. y Tarducci, M. (2018). De feminismos y violencias. Recuperar la historicidad de las luchas para enfrentar nuevos desafíos. En M. Tarducci y D. Daich (comp) *Mujeres y feminismos en movimiento. Politizaciones de la vida cotidiana.* (75-97) Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA

Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2020). Asistencia Alimentaria. La asistencia alimentaria en los barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el contexto de la pandemia de COVID- 19. http://www.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2020/07/informe-COMEDORES.pdf

Delfini, M., Drolas, A., Montes Cató, J. y Spinosa, L. (2020). Lidiando con el trabajo. Impacto del COVID-19 sobre el trabajo productivo y reproductivo. *Trabajo y Sociedad*, 35, 67-82. Disponible en: https://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/35%20D%20Delfini_Drolas_Montes%20Cato_Spinosa%20SECCION%201.pdf

Deux Marzi, M. V. y Hintze, S. (2020). Políticas y organizaciones en contexto de pandemia: la Economía Popular, Social y Solidaria en la coyuntura y después. *Temas y debates*, (24), 227-239.

Deux Marzi, M. V., Hintze, S. y Vazquez, G. (2020). Argentina: políticas y organizaciones de Economía Social y Solidaria en la pandemia. *Otra Economía*, 13(24), 201-215.

Di Croce Garay, A., Musante, F. y Ventura, V. (2021). Las redes del cuidado barrial. El rol de las organizaciones sociales frente a la pandemia del COVID-19. En Melón, D. y Relli Ugartamendia, (Coords.) Geografías del conflicto. Crisis civilizatoria, resistencias y construcciones populares en la periferia capitalista (pp. 93-100). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Muchos Mundos Ediciones-Fundación Rosa Luxemburgo; La Plata: Centro de Investigaciones Geográficas.

Di Marco, G. (2011). Las demandas en torno al aborto legal en Argentina y la constitución de nuevas identidades políticas. En G. Di Marco, y C. Tabbush, Feminismos, democratización y democracia radical. *Estudios de caso de América del Sur, Central, Medio Oriente y Norte de África* (págs. 177-200). San Martin: UNSAM Edita.

Esquivel, V. (2011). La economía del cuidado en América Latina: Poniendo a los cuidados en el centro de la agenda. El Salvador: PNUD.

Faur, E. y Brovelli, K. (2020). Del cuidado comunitario al trabajo en casas particulares. ¿Quién sostiene a quienes cuidan? En Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) "Cuidados y mujeres en tiempos de COVID-19: la experiencia en la Argentina". Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/153). Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Fernández Álvarez, M I; Pacifico, F y Señorans, D. (2020). Parar la olla durante la pandemia: *Economía popular y cuidados colectivos*. Anfibia, 4, 1-16.

Fernández, Álvarez, M.I. y Quirós, J. (2021). Ganarse la Vida. https://lanaciontrabajadora.com/ensayo/ganarse-la-vida/

Fernández Álvarez, M. I. (2022). Pérez, Pablo y Mariana Busso (coords). (Re)inventarse el trabajo en tiempos de pandemia. En: *Economía, trabajo y pandemia: apuntes sobre modelo productivo y mercado laboral en Argentina*. Temperley: Tren en Movimiento.

Fernández Álvarez, M.I., Laurens, P., Pacífico, F., Pederiva, C., Señorans, D., Sorroche, S. y Stefanetti, C. (2020). La economía popular durante la cuarentena. Relevamiento realizado en el marco del proyecto monitor laboral covid-19. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA).

Fernandez Álvarez, M.I., Laurens, M.P. y Stefanetti, C. (2022). Sostener la vida: las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular más acá y más allá de la pandemia del COVID 19.En: Dalle, Pablo (comp.) *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Tomo 2: Respuestas estatales, experiencias de trabajadoras/es y estrategias colectivas de resistencia en tres sectores estratégicos.* Buenos Aires: Colección IIGG-Agencia I+D+i / Imago Mundi. En prensa.

Fernández Álvarez, M.I., Natalucci, A., Di Giovambattista, A.P., Fernández Mouján, L., Mate, E. y Sorroche, S. (2021). *La economía popular en números. Bases metodológicas para una propuesta de medición.* Ciudad Autónoma De Buenos Aires: Citra.

Fournier, M. (2017). La labor de las trabajadoras comunitarias de cuidado infantil en el conurbano bonaerense ¿Una forma de subsidio de "abajo hacia arriba"? *Trabajo y Sociedad*, 28, 84-108.

Fournier, M. (2020). Cuando lo que importa es la vida en común: intersecciones entre Economía Social, cuidados comunitarios y feminismo. En N, Sanchís (Comp.), *El cuidado comunitario en tiempos de pandemia… y más allá* (22-42). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Asociación Lola Mora. https://generoycomercio.net/wp-content/uploads/2020/07/El-cuidado-comunitario-Publicacio%CC%81n-virtual.pdf#page=22

Frega, M. (2019). Que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos. Apuntes sobre las potencialidades, límites y desafíos de los feminismos en la experiencia argentina reciente. *Revista THEOMAI Estudios críticos sobre Sociedad y Desarrollo, 39*, 21-38.

Gago, V. (2021). Notas sobre la noción de trabajo esencial. *Mora, 22*, 7-14.

Galdos, M. (2021). Aportes para reflexionar sobre la organización popular del cuidado desde la economía popular en tiempos de pandemia. *Trabajo y sociedad*, 35 (11), 1-8.

Guelman, A., Palumbo, M.M. y Lezcano, M.L. (2021). Contextos y ámbitos del trabajo comunitario de cuidados: una perspectiva interseccional desde los movimientos populares. *Estudios del Trabajo, 62*, 1-29. https://ojs.aset.org.ar/revista/article/view/104/150

Herrero, V. (2021). Pandemia y economía popular: desafíos y estrategias en tiempos de aislamiento social. *Escenarios*, *Revista de Trabajo Social y Ciencias Sociales*, *33*, 1-10. https://revistas.unlp.edu.ar/escenarios/article/view/12402/11212

Hopp, M V y Maldován Bonelli, J. (Coords.) (2020a). ¿De qué hablamos cuando hablamos de una «nueva normalidad"? Reflexiones en torno al trabajo de los/as vendedores/as callejeros/as en el contexto de la pandemia del covid-19. Informes de coyuntura IIGG.

Hopp, M. y Maldován Bonelli, J. (2020b). La economía popular frente a la pandemia COVID-19. Informe sobre la situación de vendedores/as callejeros en la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires: Informes del OEPSS, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Hopp, M. V., Maldován Bonelli, J., Frega, M., y Trajtemberg, A. (2020). Trabajo, género y desigualdades en la economía popular: Una mirada sobre la situación de los vendedores/as callejeros en tiempos de pandemia. *Trabajo y sociedad*, (35), 7-25.

Hopp, M.V. y Kasparian, D. (2021). La opción cooperativa para el trabajo de cuidado. Potencialidades y límites para la inserción sociolaboral de mujeres de sectores populares en Argentina. *Pampa. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales, 23*, 76-99. doi: 10.14409/pampa.2021.23.e0034

Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento. (ICOUNGS). (2020a). El Conurbano en la Cuarentena II Informe del segundo relevamiento a referentes de los barrios populares del Conurbano Bonaerense en el contexto de aislamiento social obligatorio.https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/El-Conurbano-en-cuarentena.-Segundo-informe.pdf

Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento. (ICOUNGS). (2020b). El Conurbano en la Cuarentena III. Informe del tercer relevamiento a referentes de los barrios populares del Conurbano Bonaerense en el contexto de aislamiento social obligatorio.https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2020/09/El-Conurbano-en-la-Cuarentena-III.-Tercer-informe-de-relevamiento.-Final.pdf

Kessler, G. (Coord.). (2020). Relevamiento del impacto social de las medidas del Aislamiento dispuestas por el PEN. Buenos Aires: Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus COVID-19, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Informe_Final_Covid-Cs.Sociales-1.pdf

Korol, C. (2016). Feminismos populares. Las brujas necesarias en los tiempos de cólera. *Nueva Sociedad*, 265, 142-152.

Laudano, C. (2017). Movilizaciones #Ni Una Menos y #Vivas nos queremos en Argentina. Entre el Activismo digital y #El feminismo lo hizo. 13° *Mundos de Mulheres y Fazendo Gënero*, *11*, 1-12.

Maldovan Bonelli, J., Goren, N. y Corradi, F. (2021). ¿Nuevos problemas o profundización de desigualdades prexistentes? Los impactos de la pandemia del COVID-19 en el sector del ladrillo artesanal en Argentina. *Trabajo y sociedad, 36* (XXII), 55-79.

Manzanelli, P., Calvo, D. y E. Basualdo, V. (2020). Un balance preliminar de la crisis económica en la Argentina en el marco del Coronavirus. Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-FLACSO). Documento de trabajo N°17. http://www.ctasantafe.org.ar/IMG/pdf/crisis_coronavirus.pdf

Mariños, S. (2020). ¿Trabajos esenciales, pero no reconocidos? Una mirada desde la economía popular frente a la pandemia del COVID-19. *Trabajo y sociedad, 21* (35), 27-49.

Mate, E. y Stefanetti, C. (2020) Las organizaciones sociales de la economía popular frente a la pandemia de la Covid-19 en Argentina. *Socio Debate, Revista en Ciencias Sociales, 6* (9), 1-35.

Ministerio de Mujeres Género y Diversidad (2020). Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género (2020-2022).

Ministerio de Economía (2021). Desafíos de la política pública frente a la crisis de los cuidados. El impacto de la pandemia en los hogares con niñas, niños y adolescentes a cargo de mujeres.

Ministerio de Desarrollo Social (MDS), (2021a). *Reporte de Monitoreo de Tarjeta Alimentar.* Informe de gestión 1º trimestre 2021.https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/reporte_de_monitoreo_de_tarjeta_alimentar_1o_2021vf.pdf

Ministerio de Desarrollo Social (MDS), (2021b). Reporte de Monitoreo de Tarjeta Alimentar. Informe de gestión 2º trimestre 2021.https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reporte_de_monitoreo_de_tarjeta_alimentar_2o_2021_final.pdf

Ministerio de Educación de la Nación (MEN), (2020). Informe final: Políticas educativas frente a la pandemia en el contexto internacional. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.

Ministerio de Educación de la Nación (MEN), (2020). Secretaría de Evaluación e Información Educativa. Evaluación. Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica.

Molina, A. y Sayago Peralta, E. (2021). Experiencias de la economía popular en el contexto de la pandemia COVID-19 en Argentina. Abordaje de casos en Córdoba Capital y la Ciudad de Santiago del Estero, ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. *Idelcoop*, 231, 145-176.

Natalucci, A.L., y Rey, J. (2018). ¿Una nueva oleada feminista? Agendas de género, repertorios de acción y colectivos de mujeres (Argentina, 2015-2018). *Revista de Estudios Políticos y Estratégicos, 6* (2), 14-34.

Natalucci, A., Fernández Mouján, L., Kelmeszes, A. Y., Mate E., Andrade, I. R., Ríos, V., Stefanetti, C., y Vaccari, S. (2020). La protesta en cuarentena. Análisis de una base cuantitativa. *Método CITRA 6*. https://citra.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/2020_DOCUMENTO_Metodo-CITRA-volumen-6.pdf

Organización Naciones Unidas (ONU) MUJERES. (2020). Prevención de la violencia contra las mujeres frente a Covid-19 en América Latina y el Caribe. Prevención de la violencia contra las mujeres frente a COVID-19 en América Latina y el Caribe | ONU Mujeres – América Latina y el Caribe (unwomen.org)

Organización Naciones Unidas (ONU) MUJERES y CEPAL. (2020) Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID – 19. Hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación. Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19: Hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación | ONU Mujeres – América Latina y el Caribe (unwomen.org)

Organización Naciones Unidas (ONU). (2020). Análisis inicial de las Naciones Unidas. Covid-19 en Argentina: impacto socioeconómico y ambiental. https://www.onu.org.ar/stuff/Informe-COVID-19-Argentina.pdf

Ottaviano, J. M. (2020). *Teletrabajo y cuidados. Cuidados y mujeres en tiempos de COVID-19: la experiencia en la Argentina.* Santiago: CEPAL.

Pautassi, L. C. (2020). La centralidad del derecho al cuidado en la crisis del COVID-19 en América Latina. Oportunidades en riesgo. *IUS ET VERITAS*, (61), 78-93.

Ramacciotti, K. I. (2020). Cuidar en tiempos de pandemia. *Descentrada. Revista interdisciplinaria de feminismos y género, 4* (2), 26. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.11942/pr.11942.pdf

Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP), (2021). Diagnóstico y perspectivas de la economía popular. Secretaría de economía social. Ministerio de Desarrollo Social. Agosto de 2021.

Registro Único de Personas Detenidas (RUD), (2020). Informe Área de Registros. Secretaria de estrategia institucional y gestión. Ministerio público fiscal. Procuración general de la SCBA. Provincia de Buenos Aires.

Roig, A. (2020). Enlazar cuidados en tiempos de pandemia. Organizar vida en barrios populares del AMBA. En Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) *Cuidados y mujeres en tiempos de COVID-19: la experiencia*

en la Argentina. Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/153). Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Roig, A. y Blanco Esmoris, M.F. (2021). Producir lazo, organizar "la olla" y "contener" a otros/as. Experiencias de cuidado sociocomunitario durante la pandemia de la covid-19 en el AMBA (Argentina). Antipod. *Rev. Antropol. Arqueol., 45*, 29-51. https://doi.org/10.7440/antipoda45.2021.02

Rodríguez Enríquez, C. y Pautassi, L. (2014). *La organización social del cuidado de niños y niñas. Elementos para la construcción de una agenda de cuidados en Argentina*. Buenos Aires: ELA / CIEPP / ADC.

Rodríguez Enríquez, C. (2015). Economía feminista y economía del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad. *Nueva Sociedad, 256*, 30-44.

Sanchís, N. (2020). Ampliando la concepción de cuidado: ¿privilegio de pocxs o bien común? En N. Sanchís (Comp.) *El cuidado comunitario en tiempos de pandemia… y más allá* (9-21). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Asociación Lola Mora. https://generoycomercio.net/wp-content/uploads/2020/07/El-cuidado-comunitario-Publicacio%CC%81n-virtual.pdf#page=9

Sciortino, S. (2018). Consideraciones sobre el movimiento amplio de mujeres a partir del 'Ni una menos': Continuidad histórica, diversidad y trayectorias locales. *Publicar, 16* (24), 27-47.

Soldano, D. y Villarroel, N. (2020). Llueve sobre mojado. El Conurbano Bonaerense entre nuevos y viejos confinamientos. *Revista Temas y Debates, 24*, 35-40. https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/19653

Sterling Plazas, S., García, I.L., García Tarsia, A., Fontanet, F., Rosa y P., García, A. (2020). Situación y perspectivas de las cooperativas y organizaciones de la ESS en tiempos de Pandemia COVID-19. Grupo de Desarrollo Regional y Economía Social (DRyES). Centro de Estudios Urbanos y Regionales. (CEUR/CONICET) http://www.ceur-conicet.gov.ar/archivos/novedades/Diagnostico-Prospectivo-Situacion-y-perspectivas-de-Coops-y-ESS-en-tiempos-de-Covid-19.pdf

Tabbush, C. (2021). La pandemia, una encrucijada para la igualdad de género. *Nueva Sociedad*, (293), 93-105.

Wagon, M. (2021). Crisis de los cuidados y violencia contra las mujeres. Un análisis de la repercusión de la pandemia del COVID-19 en la vida de las mujeres. *Argumentos. Revista de crítica social*, (24), 166-190.

Zibechi, C. (2020). Cuidar a los chicos del barrio: trabajo comunitario de las cuidadoras, expectativas y horizontes de politización en contextos de pandemia. En Norma Sanchís (Compil.), *El cuidado comunitario en tiempos de pandemia… y más allá.* (44-63). Asociación Lola Mora. https://generoycomercio.net/wp-content/uploads/2020/07/El-cuidado-comunitario-Publicacio%CC%81n-virtual.pdf#page=44

ACTRA	Federación Autogestión, Cooperativismo, Trabajo
ANSES	Administración Nacional de la Seguridad Social
ATP	Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción
AUE	Asignación Universal por Embarazo
AUH	Asignación Universal por Hijo
CFE	Consejo Federal de Educación
CIM	Comisión Interamericana de Mujeres
CONAMI	Comisión Nacional de Microcrédito
DETeCTAr	Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio Argentino
ENACOM	Ente Nacional de Comunicaciones
EPT	Entrenamiento para el Trabajo
ESI	Educación Sexual Integral
ENOCEP	Escuela Nacional de Formación en Economía Popular y Organización Comunitaria
FACCyR	Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores
FACTA	Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados
FAR	Frente Arde Rojo
FECARA	Federación de Cooperativas Argentinas de Reciclado Autogestionadas
FECUTRA	Federación de Cooperativas Unión de Trabajadores y Recicladores Argentinos
FEDECABA	Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires
FPDS	Frente Popular Darío Santillán
IFE	Ingreso Familiar de Emergencia
INAES	Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
MDS	Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
ME.CO.PO	Mercado de Consumo Popular
ME	Ministerio de Educación de la Nación
MMGyD	Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
MNCI	Movimiento Nacional Campesino Indígena
MNER	Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas
MOCASE-VC	Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina
MTE	Movimiento de Trabajadores Excluidos
MTEySS	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
PBA	Provincia de Buenos Aires
PT	Programa Nacional de Inclusión Social y Desarrollo Local "Potenciar Trabajo"
PTA	Programa de Trabajo Autogestionado
REPRO	Programa de Recuperación Productiva
ReNAF	Registro Nacional de la Agricultura Familiar
ReNaTEP	Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular
SMVM	Salario Mínimo, Vital y Móvil
UOLRA	Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina
UTEP	Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular
UTRA	Unión de Trabajadores Recicladores Argentinos
UTT	Unión de Trabajadores de la Tierra

La economía popular en pandemia: situación actualizada 2021

CITRA
CONICET - UMET

El CITRA es producto de una invitación directa y frontal de varias decenas de organizaciones sindicales al sistema científico argentino a construir conocimiento en forma conjunta.

Esta invitación es también una interpelación epistemológica: ¿somos capaces de construir conocimiento poniendo en diálogo los saberes académicos y locales? ¿Nos animamos a pensar agendas de investigación basadas en las necesidades concretas de un sector sin perder rigor científico? ¿Es posible respetar la legitimidad de los distintos conocimientos sin perder identidad? ¿Nos atrevemos a confiar en la calidad de los aportes de quienes se han formado en ámbitos que nos resultan ajenos y distantes? Dentro de los caminos que estamos transitando para responder a este desafío compartido se encuentra el desarrollo de investigaciones surgidas de demandas sectoriales. Y al modo en que encaramos estas investigaciones le llamamos lúdicamente, el "Método CITRA".

María Inés Fernández Álvarez,
Anahi Guelman,
Ana Natalucci,
Mercedes Palumbo (coordinadoras)
Lautaro Chamorro,
Lucio Fernández Mouján,
María Paz Laurens,
María Laura Lezcano,
Ernesto Mate,
Florencia Pacífico,
Verónica Puricelli,
Santiago Sorroche,
Camila Stefanetti

www.citra.org.ar
citra@citra.org.ar

CITRA CONICET - UMET
PEPTIS Programa de Estudios e Investigaciones de Economía Popular y Tecnologías de Impacto Social
ANTROPOLOGIA EN COLABOR Para el fortalecimiento de organizaciones de trabajadores/as
OPS
EDUC.UNLu Departamento de Educación
IICE